

Actualmente puede reproducirse con facilidad el mismo conflicto con una diferencia; que las circunstancias son por entero distintas de las que motivaron la célebre sentencia arbitral dada en Guadalupe por Fernando el Católico.

Se han apuntado también otras causas a saber; en Villafranca y Tortosa el aumento considerable del valor de los productos incluso de su producción lo que implica para el capital un interés - crecido y desproporcionado al del trabajo.

En algunos casos podría ello ser exacto, no en todos, puesto que también la tierra ha aumentado de valor y en todo caso ha aumentado en caso de que existan el valor de las prestaciones del propietario (abonos, sulfatos, etcétera).

El Juez de Villanueva alude a un posible aumento de coste de obtención de productos. Es cierto que existe, pero en este caso es obligado la admisión de un principio o sea el de asignar al cultivador un jornal análogo al de la industria. En este supuesto precisa un estudio previo para ver su relación con el coste de vida, estudio no practicado todavía y que parece vaticinar en sus resultados la - desproporción notoria entre el cultivador que no es jornalero y el proletario industrial. En Cataluña se ha suprimido prácticamente el trabajo agrícola a jornal y en las pocas comarcas donde existe el jornalero no suele ser catalán (Llano del Llobregat, etcétera).

Lo que sí puede afirmarse es la inexactitud del motivo principal que dió origen a los Decretos de Julio y Agosto del año de revisión. La cosecha en Cataluña fue regularmente buena, en muchos pun-

tos excelente y en pocos mala y las labores del campo es efectuaron en plena normalidad.

#### PROCESO HISTÓRICO DEL CONFLICTO

La Unión de Rabassaires: Precisa como antecedente necesario aludir a esta importante agrupación que data ya de muchos años. La vitificación intensísima de la comarca del Panadés (Villafranca, Vendrell y sus aledaños) determinó un cambio profundo en la misma; la extensión del cultivo produjo una comunidad de intereses que entre el propietario y rabassaires sufrió hondo quebranto con la aparición de la filoxera. Las nuevas plantaciones de cepa americana – no fueron hechas por igual, en ocasiones fizolas todas el propietario; en otras, no pocas al parecer el rabassaire o aparcero. De ahí que el contrato de establecimiento a primeras cepas o el de aparcería vinícola sufriesen grave contratiempo que vino a agravar la muerte de las primeras cepas y el hecho de que por este motivo o por haber fijado el término estipulado o por falta de pago de frutos o de pensión se ejercitase por algún propietario la acción de desahucio. La aplicación a Cataluña del artículo 1.656 en su número 9º del Código civil e incluso la del desahucio o la aparcería en general produjo una verdadera lucha entre propietarios y colonos en toda la comarca del Panadés.

A ello debió su fuerza la Unión de Rabassaires constituida para oponerse a tal acción y desarrollada después con finalidades – concomitantes como son la perpetuidad de sus contratos, la libre transmisión por el rabassaire aunque en realidad fuese aparcero solamente de sus derechos y finalmente con otros objetivos de cooperación v. gr. en la elaboración del caldo, en conservación, venta y compra de abonos.

Desarrollo del conflicto.— El Decreto de 11 de Julio de 1931 tiene un precedente; el Real Decreto Ley de 21 de Noviembre de 1929. Sin embargo no suscitaron uno ni otro, movimiento alguno; lo propio — ocurrió con el Decreto de 6 de Agosto del año último.

El problema adquirió caracteres de gravedad notoria en los partidos aludidos principalmente en Villafranca, San Feliu y parte de Sabadell.

En aquella coyuntura se hallaban el infrascrito Presidente de esta Audiencia desempeñando el Gobierno Civil y publicó en el "Boletín Oficial" y en idioma catalán para su más fácil comprensión, una circular encaminada a prevenir los conflictos que amenazaban, circular que fué íntegramente reproducida por el señor Gobernador Civil de — Tarragona.

Se explicaba el verdadero alcance de los Decretos a la sazón vigentes, los de Julio y Agosto de 1931; se recordaba el derecho del propietario a intervenir en la recolección y medición de frutos y dejando completamente a salvo el derecho de revisión para el año — en curso, se prevenía lo temporal de la medida. Finalmente se indicaba la posibilidad de ahorrar las molestias de la consignación depositando previamente la renta mediante recibo en poder del propietario quien — tenía, si más no con la misma finca, solvencia más que suficiente y — notoria para responder del resultado del juicio.

Con ello el conflicto se agravó considerablemente. Pequeñas movilizaciones de la Guardia Civil la cual no intervino en ningún conflicto limitándose a cursar denuncias, fueron altamente protestadas. Y el que suscribe recuerda todavía temerosamente las manifestaciones de varios grupos de ambos estamentos todas ellas de gran violencia. El Ayuntamiento de Santmenat casi en pleno dijo por boca de su alcalde de condición aparcero: "la tierra es de quien la trabaja, es toda nuestra". Algunos propietarios no ciertamente en gran número se mostraron también asaz violentos. En algunos puntos se alteró el orden público y la cosecha de uvas se recogió en muchas partes lastimosamente. En una noche, una partida numerosa vendimiaba un campo alzando en seguida los frutos, y el caso fué muy repetido.

Ante la gravedad del momento el Presidente que suscribe actuando también como Gobernador Civil, tuvo la fortuna de conseguir la reunión de varios estamentos representados por sus Corporaciones más importantes "la Unió de Rabassaires" y "el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro" reunión que se celebró bajo la presidencia del que la ostenta de la Generalidad de Cataluña, Don Francisco Macià y con intervención del que suscribe y de los Diputados a Cortes señores Companys y Lluhí Vallescà, quienes contribuyeron en gran manera a la consecución de un pacto llamado desde entonces "Pacto de la Generalidad", firmado en 21 de Septiembre de 1931; es dicho pacto puramente pragmático transitorio y circunscrito a la "provincia" de Barcelona y al año 1931, consistía en facilitar la convivencia durante las previsiones y en evitar la consignación judicial estipulándose que el aparcero o rabassaire que pagase por contrato la mitad de los frutos entregase sólo un tercio, el que un tercio sólo un cuarto y el que un cuarto un quinto y así sucesivamente.

En lo demás quedaban en vigor las cláusulas de los contratos.

Como medio de aproximación amigable y de facilitar una intervención eficaz se consignó también una cláusula especial por la que todos los conflictos debían de ser resueltos por la Generalidad la cual, al efecto, establecería una dependencia adecuada.

Desgraciadamente dicha dependencia no ha sido siquiera establecida y la intervención que de ser prestada oportunamente hubiese sin duda resultado eficaz no ha tenido efecto ni en calidad de tentativa.

Ni siquiera el pacto ha sido cumplido en todas las localidades v. gr. en Tarrasa (Memoria número 9), en otros muchos puntos si no con carácter general como fenómeno muy repetido también han dejado de cumplirlo gran número de personas.

Terminada con la de la uva las cosechas de 1931 el conflicto permaneció estacionado y en apariencia olvidado.

En cuanto al orden público dejó de preocupar pero sus efectos permanecieron latentes con la misma fuerza y gravedad.

"La Unió de Rabassaires" no cejó en su propaganda convirtiéndose en Unió de Rabassaires, aparceros y cultivadores de todo orden.

A pesar de ello aunque se multiplicaban las demandas la tramitación de los juicios no era instada por los actores. Por el contra-

rio se entorpecía la tramitación y sistemáticamente dejaban de verificarse las consignaciones en términos que luego los Juzgados especiales han venido a practicar diligencias no cortas de número para que las demandas pudiesen ser tramitadas.

La actividad de los Jueces ordinarios quedaban por tanto paralizada a consecuencia de la falta de cooperación de los que debían estar interesados en la pronta resolución de los litigios planteados.

#### TRAMITACIÓN DE LOS JUICIOS

Con el nombramiento de Jueces especiales dió principio la actividad procesal.

En materia de conciliaciones logró fortuna el Juez de Lérida-Cervera, pues se obtuvieron 748 contra cerca de 900 demandas (Memoria número 1). El de la "provincia" de Gerona sólo pudo conseguir 130 en 1.577 juicios, registrándose además 116 desistimientos. El Juez de Tarragona-Tortosa pudo disfrutar de mayor éxito pues 1.003 juicios 780 terminaron por conciliación.

En los demás partidos las conciliaciones han sido muy escasas.

Valls sólo ofrece 15. Montblanch ninguna. Vendrell muy pocas, en los demás casi no llegan en mucho a un 10%. El Juez de Igualada menciona la intransigencia de los aparceros reacios a toda propuesta distinta de rebajar el 50% de la renta de 1914.

Manresa ofrece el caso raro de 1.026 desistimientos en -  
3.084 juicios.

En cambio han tenido que declararse caducadas gran número de demandas, ya por falta de consignación debida (siendo de notar que se ha admitido como tal la prueba indicaria de haberse entregado su importe al propietario), ya por no consignarse el nombre del demandado y resultar su citación imposible.

Número mayor ha debido ser desestimado por confesión de - que las rentas no habían aumentado (en muchos casos han disminuido a partir de 1914). Y otro número importante de demandas ha sido desestimado por pretenderse en ellas una novación de contrato.

En los juicios incluso para los comprendidos en los casos anteriores se han dado toda suerte de facilidades admitiéndose toda clase de pruebas, en algunos casos harto impertinentes. Muchos dejaron de comparecer incluso al acto conciliatorio v. gr., San Feliu de Llobregat con sus términos anexos de Villafranca donde dejaron de - comparecer 1.036 actores (Memoria número 13).

En los demás casos los demandantes han comparecido generalmente por medio de mandatario. En Vich lo verificaron elementos del sindicato de la localidad pero estos representantes, sin instrucciones de ningún género de sus comitentes, no podían, ni intentaban, - por desconocimiento de los hechos, hacer alegación de ninguna prueba ... manifestaban paladinamente ignorarlo todo (Memoria número 6), página 13.

Salvo contadísimas excepciones, dice el Juez de Vendrell, los litigantes, si así puede llamarse a los llevados a una contienda han estado representados. Un mismo representante para los actores y otro para los demandados de las dos opuestas asociaciones; - finalidad en la contienda apenas iniciada como si ambos contendedores proclamasen de antemano la seguridad de que la justicia no podía amparar una causa injusta que no se forzaban en defender ni combatir (Memoria número 5).

En otros puntos han comparecido portándose correctamente, v. gr. en Sabadell y en Manresa.

En la celebración de los juicios no se han producido incidentes salvo en San Feliu de Llobregat (Memoria número 13). Véase también la Memoria número 12 página 3 y 4 y la de número 3.

Las sentencias favorables a los actores han tenido por nulo forzoso de ser relativamente escasas, excepción hecha de Tortosa y de algún otro partido (véase las Memorias). Si algo podía hacerse se conseguía en la conciliación.

La apelación ha sido norma general de los demandantes. La Memoria número 6 sintetiza este hecho diciendo el gran número de apelaciones que se interpusieron contra las resoluciones recaídas - al punto que las no apeladas constituyen la excepción y las manifestaciones que verbalmente reiteraban los propios solicitantes demuestran que la finalidad a que aspiraban y lograban, convencidos de que sus pretensiones eran esencialmente improcedentes o proporcionalmente

desmedidas por las resoluciones recaídas y por las numerosas explicaciones que en su obligada intervención hubo de hacer a las partes el Juez que suscribe, era la de satisfacer entretanto solamente la mitad de la renta pactada.

Tan honda raigambre aclamaba este deseo en el espíritu de los actores que en algún caso, al llamársele por los aguaciles para la celebración del acto conciliatorio, no se consideraban ni aludidos, pues decían "nosotros no somos parte, sino apelantes" y en numerosísimos casos al concedérseles la palabra pretendían entregar ya el escrito de apelación y que llevaban redactado y firmado previamente (pág. 11 y 12).

Ha podido el Juez que suscribe adquirir la plena convicción de que si los demandantes, no obstante los juicios de revisión, hubieran tenido que pagar a su debido conocimiento, sin perjuicio de los que después hubiera procedido ... el número de demandas no hubiera llegado ni a la décima parte; habiendo de atribuir por modo muy especial a esta causa el conflicto creado (página 13).

Más conciso el Juez de Vendrell dice: "aunque la verdad real es la afirmada, es decir que no ha habido aumento de renta, - antes disminución, pretenden los cultivadores ganar días con las apelaciones entabladas; un afán explicitamente manifestado, es el de tener tiempo pendientes las revisiones, para poder recoger la actual cosecha mientras se dicte resolución firme en los juicios" (Memoria número 5 folio 4 Vº.).

La regla general de apelar ha sufrido una excepción tanto más curiosa en cuanto ha tenido lugar en el centro mismo del movimiento, en las dos jurisdicciones especiales de Villafranca del Panadés. Sin embargo tal sumisión, contra lo que se afirma en la Memoria número 12, es más aparente que real. Lejos de obedecer a un convencimiento íntimo y sincero responde lo propio que los numerosos decaimientos de San Feliu de Llobregat a un plan muy distinto del que es imposible prescindir.

#### ESTADO ACTUAL DEL CONFLICTO

Con las nuevas cosechas del año corriente ha vuelto la discordia a revestir caracteres agudos que repercuten en el orden público. No es ello una novedad. Varios Jueces lo previeron al redactar sus informes. La propaganda ha recrudecido en los términos más disolventes y a las palabras siguieron los hechos. La cosecha de la esparceta le fué levantada en Villafranca por los aparceros que tenían pendiente juicio de revisión y ... por quienes no lo habían promovido siquiera. Lo propio ha acontecido con la de ajos y principia a suceder con la de trigo. Clandestinamente se ha procedido ya a la siega en muchos casos, y en otros se ha impedido al propietario al acceso a la finca.

El movimiento parece por ahora circunscrito a Villafranca, Vendrell y sus alrededores. No obstante empero señales de extensión a otro partido y merced a la propaganda oral y escrita que se está efectuando, el conflicto podría fácilmente generalizarse y propagarse a lugares todavía indemnes.

A las sentencias firmes no se les dá importancia ni se les presta en aquellos partidos acatamiento. El movimiento revisante caracteriza de generalidad. En la mente ilusa o interesada de aquellos labradores se ha inculcado la idea errónea de que existen decretos que amparan ese proceder antijurídico. Al propósito dice el Juez de Vendrell tratando de las apelaciones si estas se desestiman en definitiva serán ineficaces muchos fallos por la premeditada deslealtad de algunos demandantes que hurtan o desvían la responsabilidad con añadidas insolvenias ... acaso el peligro mayor devenga inmediato al intento de hacer valer los derechos ahora limitados y después libres de los demandados en la hipótesis, de que sean absueltos, si los falsos pastores aconsejan, como antes las demandas sujetas a un par de modelos impresos, resistencia después al pago y desobediencia al fallo, pues en esas falaces propagandas con fines políticos y no de justicia, radica la principal causa, no eficiente y si final de esa cuestión (Memoria núm. 5 fol. 5).

Esos tristes augurios se están realizando ya. Y no se ocultan por los propios dirigentes el propósito de promover un estado de agitación tanto más peligroso en cuanto en el presente estado, no desdice del interés directo y notorio de los grupos comunistas y anarquistas de la comarca cuyos conductores se convierten a su vez en propagandistas de la desobediencia a la Ley vigente. Y más peligroso resulta el caso considerando que no pocos alcaldes y Jueces municipales no sólo apoyan el movimiento indirecta sino abiertamente en actitud verdaderamente sedicosa.

De tener que procederse a la ejecución de la sentencia y al cumplimiento de contrato por la vía judicial se renueva en idénticos sino peores y más graves términos la cuestión planteada con -

las demandas ya falladas, precisando un personal de que no dispondrá y una fuerza pública harto numerosa.

El peligro será más grave cuanto más se tarde en hacerle frente.

De momento ya empiezan a dibujarse serios perjuicios y en primer término la desvalorización de la propiedad rústica la cual - se halla en Cataluña tal vez excesivamente dividida y afecta por ende a gran número de personas que representan un papel decisivo en la riqueza del país.

Ello trae consigo aparejada, una pérdida real de riqueza, una mengua considerable del crédito público y paso franco a los manejos de la usura.

#### POSIBLES MEDIDAS A PROPONER

El poder judicial ha cumplido ya su misión; y cabe repetir que sus funcionarios la han cumplido honorable y dignamente con celo mayor de que era dable exigir de la función y si solamente era posible pedir al espíritu de sacrificio y abnegación inspirados por el - patriotismo.

Con todo, por vía de observación autorizada por el examen - y conocimiento directo de los hechos cabe tal vez representar que podía ser una posible solución jurídica del conflicto, inspirada solamente en principios de justicia y equidad, la adopción de las medidas siguientes:

A) Antiguamente, hasta hace poco tiempo, la libre contratación podía ser un medio de progreso; podía serlo también la costumbre. Hoy evidentemente las circunstancias han variado la intercesión social es más precisa hoy que ayer y no dejará de serlo mañana. Por ello, pues, debería en primer término procederse en cada comarca al estudio y determinación de los contratos tipos en sus respectivas clases determinando sus prestaciones recíprocas. La que a favor del propietario resulte excede del tipo más usual deben atemperarse a este, salvo el caso de compensaciones equivalentes a juicio de los Tribunales o Jurados mixtos o representaciones autorizadas de ambos estamentos.

B) En caso de modificación de contrato con arreglo al párrafo anterior y siempre que ello sea posible a no rebajarse la renta en frutos sino que se aumentará las prestaciones del propietario. En esta forma lo más caro del cultivo se invierte en él con ventaja para ambos partícipes.

C) El colono o aparcero tendrá derecho al finir el contrato de ser indemnizado del importe de las mejoras que efectúe en las fincas. Las mejoras indemnizables serán determinadas previamente y deberán efectuarse de acuerdo entre ambas partes. No son indemnizables las labores y reparaciones ordinarias.

D) Se determinará en cada comarca dentro de las variaciones usuales de composición de familias de los cultivadores el máximo de tierra que pueda corresponder a cada cultivador. El exceso será de libre contratación.

E) Sólo procederá el desahucio por los motivos siguientes:

a) Falta de pago de rentas. b) Deterioro de la finca por voluntad – deliberada o por negligencia. c) Mal cultivo de la finca a tenor del uso y costumbre de la comarca. d) Id. cuando los medios empleados – por el cultivador resulten en desproporción con los facilitados por el propietario para mejorar la producción. e) Término del contrato cuando el propietario hubiese de proceder a la explotación directa por sí o por sus descendientes o afines casados con descendientes. En este caso será indemnizado al aparcero una parte del mayor valor que tuviese la finca siempre que no fuera debido a mejoras exclusivamente realizadas por el propietario. f) Delito, falta grave del aparcero y embriaguez habitual.

F) Toda finca garantiza directamente y con carácter real – el abono de las mejoras y prestaciones debidas al cultivador. Esta acción prescribe al año de ser debidas las prestaciones y totalmente al año de desocupada la finca.

G) Corresponde al aparcero que lleve más de seis años en – una finca el derecho de retracto y tanteo en todo caso de venta, salvo si se tratara de pariente que no pase de tercer grado. Este retracto antecede al de colindantes, pero no al de comuneros.

H) Las rentas pendientes de pago serán entregadas sin demoras al propietario cuya finca responda de su retorno al aparcero en caso de reducción. Mientras estén pendientes juicios de revisión se procederá a entregar las rentas que vengan en adelante, concediéndose un término para el pago de las vencidas. Si se declarara haber lugar a la reducción se abonarán intereses del importe de la parte reducida. Al hacer pago de las rentas en casos de revisión pendientes procedrá a una previa estimación. Las rentas que hayan quedado en poder del aparcero devengarán asimismo intereses.

I) Las prestaciones e indemnizaciones debidas por el aparcerero quedan garantizadas con los derechos que le correspondan sobre la finca y sobre las cosechas.

J) Para el ejercicio de toda acción dimanante del contrato de aparcería o de rabassaire es preciso el acto conciliatorio - previo.

No ignora esta Sala que si lo propuesto como solución - por la Unión de Rabassaires una rebaja de cuentas de acuerdo con - el llamado pacto de la Generalidad que sería en tal caso elevado - a un carácter permanente y definitivo. No parece justa esa solución que sólo fué pactada con carácter previsorio por cuanto de concretar se a quienes tienen pendientes juicio de revisión resultaría injusto para los mismos aparceros que obraron con razón derecha, y para quienes guardaron fidelidad a lo pactado. Y en todo caso, lo resultaría para los propietarios haciendo de peor condición a quien procedió con equidad que al que prescindiendo de ella solo pensó en - lucrar mayores ventajas y prestaciones.

Naturalmente que la solución de las cuestiones apuntadas - debería corresponder al mismo Territorio Catalán si éste ha de constituir y regular su propio derecho civil. Ello no obstante dado lo - urgente del problema no hay otro remedio que resolverlo de una vez - evitando así probables días de luto para este país y quebrantos tal vez irreparables para el interés nacional.

Por otra parte los promovedores del problema son quienes ponen al Gobierno de la República en el trance de resolverlo con urgencia.

Espera el que suscribe que perdona V. E. los defectos - que pueda contener esta Memoria que requería redacción más reposada y seguramente exposición más completa. Sin embargo la urgencia del caso ha determinado el que se procediese con la rapidez - que demanda lo agudo del conflicto.- Barcelona 18 de Julio de 1932.- Excmo. señor Oriol Anguera de Sojo.- Por acuerdo de la Sala de Gobierno.- Emilio Oppelt.

DECRET CONCEDINT ALS JUTGES ESPECIALS EL TERME DE 30 DIES PER A FINIR  
EL SEU COMES, DE 21 DE JULIOL DE 1932 (GAZ. DEL DIA 22)

El artículo 3º del Decreto de 26 de Marzo del corriente año concede a los jueces especiales encargados de la revisión de los contratos de arrendamiento de fincas rústicas un plazo de sesenta días, a contar de aquel en que se hicieron cargo de la jurisdicción para realizar su cometido.

Muchos de los jueces designados dieron fin a la labor - que les fué encomendada dentro del citado plazo; pero otros, por causas justificadas y ajenas a su voluntad, no han podido terminarla en los sesenta días concedidos.

Es necesario, por lo tanto, a fin de evitar los inconvenientes con que en otro caso se tropezaría, conceder un nuevo plazo a los Jueces especiales que no han podido terminar la revisión para que dentro de él puedan resolver todos los casos sometidos a su conocimiento.

En virtud de estas consideraciones, de acuerdo con el Consejo de Ministros y a propuesta del de Justicia.

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo Único. Se concede un plazo de treinta días a los Jueces especiales encargados de conocer de las demandas de revisión de los contratos de arrendamientos de fincas rústicas que no han podido terminar su cometido, para tramitar y resolver los juicios sometidos a su conocimiento. Dicho plazo comenzará a contarse desde el día de la publicación de este Decreto en la Gaceta de Madrid.

Dado en Madrid a veintiuno de julio de mil novecientos treinta y dos.

DECRET DEL MINISTERI DE TREBALL I PREVISIÓ DE 4 D'AGOST DE 1932 (GAZ. 5),  
ESTABLINT AMB CARÀCTER CIRCUMSTANCIAL DOS JURATS MIXTOS DE LA PROPIETAT  
RÚSTICA AMB RESIDÈNCIA L'UN A VILAFRANCA DEL PENEDES I L'ALTRE A IGUALADA

A propuesta del Ministro de Trabajo y Previsión y de acuerdo con el Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1º. De conformidad con el espíritu que informa la primera de las disposiciones adicionales de la Ley de 27 de noviembre de 1931, relativa a los Jurados mixtos, se instituyen con carácter circunstancial, ínterin se llega a la creación normal de estos organismos, dos Jurados mixtos de la Propiedad rústica, que tendrán su residencia, uno en Villafranca del Panadés y otro en Igualada.

La jurisdicción del primero se extenderá no sólo sobre el - partido judicial del mismo nombre, sino también sobre el de Villanueva y Geltrú. La del segundo quedará limitada a la del propio partido de Igualada.

Artículo 2º. Ambos Jurados tendrán la plenitud de atribuciones que otorga a los de su clase la referida Ley sobre Jurados mixtos.

Artículo 3º. Los Jurados circunstanciales que se crean - por la presente disposición estarán compuestos por cinco Vocales - numerarios, con sus respectivos suplentes, que, representarán - los intereses de los propietarios de la tierra, y de otros cinco - Vocales titulares, también con suplentes en igual número, que representarán los intereses de los arrendatarios, aparceros y rabassaires. Ambas representaciones serán designadas por el Delegado provincial - de Trabajo, de acuerdo con el Gobernador civil de la provincia de - Barcelona y previa consulta con las Asociaciones más calificadas de una y otra clase, residentes en el territorio asignado a cada uno - de los Jurados.

Las designaciones serán comunicadas al Ministerio de Trabajo y Previsión para que, una vez aprobadas por el Ministro, sean publicadas en la "Gaceta de Madrid".

Artículo 4º. La Presidencia de los organismos creados por la presente disposición corresponde a los Jueces de primera instancia de los partidos judiciales en que cada uno de ellos tiene su residencia.

Artículo 5º. Se autoriza al Ministro de Trabajo y Previsión para extender la jurisdicción de ambos Jurados mixtos circunstanciales

de la Propiedad rústica a otros partidos judiciales de la provincia o para crear en ella nuevos Jurados circunstanciales de dicho orden cuando se considere necesario.

Dado en La Granja a cuatro de agosto de mil novecientos treinta y dos.

NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES

El Ministro de Trabajo y Previsión,

FRANCISCO L. CABALLERO

ORDRE DEL MINISTERI DEL TREBALL I PREVISIÓ DEL 19 D'AGOST DE 1932 (GAZ.22),  
NOMENANT ELS VOCALS PER A FORMAR PART DELS JURATS MIXTOS CIRCUMSTANCIALS -  
DE LA PROPIETAT RÚSTICA DE VILAFRANCA DEL PENEDES I D'IGUALADA

Ilmo. Sr.: De conformidad con lo previsto en el artículo 3º del Decreto del día 4 del corriente mes, y a propuesta del Delegado provincial de Trabajo, de acuerdo con el Gobernador civil de Barcelona.

Este Ministerio ha resuelto designar a los representantes que a continuación se indican para que formen parte como Vocales de los Jurados mixtos circunstanciales de la Propiedad rústica que fueron creados por el citado Decreto:

Para el Jurado mixto de Villafranca del Panadés: Vocales propietarios efectivos, D. José Raspall dels Horts, D. Martín Vallés Montserrat, D. José María Fábregas y Soler, D. Luis Carreras Macaya, D. Alejandro Cabañas Marqués; Vocales propietarios suplentes, don Manuel Massana Piñol, D. Amadeo Albareda Raventós, D. Antonio Bolet Piñol, D. Félix

Mestres Carbonell, D. José A. Sardá; Vocales efectivos en representación de arrendatarios, rabassaires y aparceros, D. Pablo Raques - Durán, D. Antonio Romeu Busquets, D. Pablo Bertrán y Vía, D. Juan - Durán Ferret, D. Magín Farré y Beltrán; Vocales suplentes de la última representación, D. Magín Parera y Parera, D. José Maques y Mestres, D. Ramón Canals Expósito, D. José Augé y Tutusaus, D. Antonio Save y Urgel.

Para el Jurado mixto de Igualada: Vocales propietarios efectivos, D. Ramón Queralt Gili, D. José Sendil Massana, D. José Guix - Claramunt, D. Pedro Mussons Bernades, D. Justino Vilaró Casulleras; - Vocales propietarios suplentes, D. Jaime Vich Casanovas, D. Aurelio - Roviralta Puigventós, D. Juan Rovira Brugués, D. José Morera Mestres, D. Francisco Riba Ferrer; Vocales efectivos en representación de arrendatarios, rabassaires y aparceros, D. José Boil Castany, D. Juan Codina Serra, D. José Soteras Estrada, D. Pedro Sabaté Mañosas, don Juan Valls Pujol; Vocales suplentes de la última representación, D. Pedro Isart - Parera, D. Juan Doménech Grau, D. Isidro Guixa Rexades, D. César Borrás Villarrubí, D. Juan Bonastre Ferrer.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. Madrid,  
19 de Agosto de 1932.

FRANCISCO L. CABALLERO

Señor Director general de Trabajo.

ORDRE DEL MINISTERI DEL TREBALL I PREVISIÓ DE 19 D'AGOST DE 1932 (GAZ.23),  
DECLARANT QUE SIGUI EL JUTGE ESPECIAL QUE S'INDICA, EL QUE EXERCEIXI LA  
PRESIDENCIA DELS JURATS MIXTOS DE LA PROPIETAT RÒSTICA DE VILAFRANCA DEL  
PENEDÈS I D'IGUALADA

Ilmo. Sr.: Por Decreto del dia 4 del mes actual se dispuso la creación de los Jurados mixtos de la Propiedad rústica, que con carácter circunstancial e ínterin se llegue a la constitución normal y permanente de esos organismos, actuaren con las facultades que les asigna la Ley de 27 de Noviembre de 1931, uno en Villafranca del Panadés, con la jurisdicción de este partido judicial y del de Villanueva y Geltrú; y otro en Igualada y jurisdicción del partido judicial correspondiente; y en el artículo 4º del citado Decreto disponíase que la Presidencia de los indicados Jurados mixtos correspondería a los Jueces de primera instancia de los partidos judiciales en que cada uno de aquellos tuviera su residencia. Mas siendo la función principal de los expresados organismos entender en la regulación de los contratos de arrendamiento y en la revisión de las rentas de las fincas rústicas, y habiéndose designado por virtud del Decreto de 26 de Marzo del corriente año un Juez especial precisamente para la aplicación del Decreto de 11 de Julio de 1931 y disposiciones complementarias sobre la revisión de las indicadas rentas, en territorio que comprende los señalados a los dos Jurados mixtos circunstanciales de la Propiedad rústica de que se ha hecho mención.

Este Ministerio, de acuerdo con el Consejo de Ministros,  
ha resuelto disponer que, de conformidad con el artículo 6º del -  
citado Decreto de 26 de Marzo Último, ejerza la Presidencia de los  
Jurados mixtos de la Propiedad rústica de Villafranca del Panadés  
y de Igualada el Juez especial antes citado, el cual se trasladará  
a las residencias de los indicados Jurados cuando haya de presidir  
a los respectivos Vocales para entender en asuntos de las jurisdic-  
ciones correspondientes.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos. Madrid,  
19 de Agosto de 1932.- Francisco L. Caballero.

Señor Director general de Trabajo.

DECRET DEL MINISTERI DE TREBALL I PREVISIÓ RELATIVA A LA RESIDÈNCIA  
DEL PRESIDENT DELS JURATS MIXTOS DE LA PROPIETAT RÚSTICA DE VILAFRAN-  
CA DEL PENEDES I D'IGUALADA DEL 19 D'AGOST DE 1932

Por Decreto del día 4 del mes actual se dispuso la creación de los Jurados mixtos de la Propiedad rústica, que con carácter circunstancial e ínterin se llegue a la constitución normal y permanente de estos organismos, actuarán con las facultades que les asigna la Ley de 27 de noviembre de 1931, uno en Villafranca del Panadés, con la jurisdicción de este partido judicial y del de Villanueva y Geltrú; y otro en Igualada y jurisdicción del partido judicial correspondiente; y en el artículo 4º del citado Decreto disponíase que la Presidencia de los Jurados mixtos correspondería a los Jueces de primera instancia de los partidos judiciales en que cada uno de aquellos tuviera su residencia. Más siendo la función principal de los expresados organismos entender en la regulación de los contratos de arrendamientos y en la revisión de las rentas de las fincas rústicas y habiéndose designado por virtud del Decreto de 26 de marzo del corriente año un Juez especial precisamente para la aplicación del Decreto de 11 de Julio de 1931 y disposiciones complementarias sobre la revisión de las indicadas rentas, en territorio que comprende los señalados a los dos Ju-

rados mixtos circunstanciales de la Propiedad rústica de que se ha hecho mención.

Este Ministerio, de acuerdo con el Consejo de Ministros, ha resuelto disponer que, de conformidad con el artículo 6º del citado Decreto de 26 de Marzo último ejerza la Presidencia de los Jurados mixtos de la Propiedad rústica de Villafranca del Panadés y de Igualada el Juez especial antes citado, el cual se trasladará a las residencias de los indicados Jurados cuando haya de presidir a los respectivos Vocales para entender en asuntos de las jurisdicciones correspondientes.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos. Madrid,  
19 de Agosto de 1932.

FRANCISCO L. CABALLERO

Señor Director general de Trabajo.

ORDRE MINISTERIAL CREATANT EL JURAT MIXT DE LA PROPIETAT RÚSTICA EN VIC  
EL 29 D'AGOST DE 1932 (GAZ. DIA 5 DE SETEMBRE).

1º. Que con carácter normal y la plenitud de atribuciones que concede a estos organismos la Ley de 27 de noviembre de 1931, - relativa a Jurados mixtos de Trabajo, se constituya en Vic (Barcelona) un Jurado mixto de la Propiedad rústica, con jurisdicción sobre los - partidos judiciales de Vic, Berga, Granollers y Manresa, de la provincia de Barcelona.

2º. Este Jurado se compondrá de cinco Vocales representantes de los intereses de los propietarios de fincas rústicas, y otros tantos Vocales en representación de los colonos, teniendo en cuenta - unos y otros sus respectivos suplentes, y elegidos todos de las Asociaciones de una y otra clase legalmente constituidas en la comarca a que se extiende la jurisdicción del Jurado.

3º. A este efecto tendrán derecho a la designación de Vocales las Asociaciones de propietarios de fincas rústicas y - las de arrendatarios, aparceros o colonos de cualquier clase, - constituidas legalmente en el territorio de la jurisdicción del Jurado e inscritas en el Censo electoral, social, que se lleva en este Departamento, más las que se inscriban en el mismo dentro de los quince días siguientes de la publicación de esta Orden en la "Gaceta".

4º. En atención a la escasez de entidades puras de arrendatarios, se extiende el derecho electoral, a que se refiere el - número anterior, a las Asociaciones de carácter obrero que consten inscritas en el Censo Electoral del Ministerio. Pero tratándose de esta clase de entidades, será requisito indispensable, para la validez de la elección, que se remitan a este Ministerio, dentro de los quince días siguientes a la publicación de la presente Orden, declaración suscrita por el Presidente y Secretario respectivos, haciendo constar el número de socios arrendatarios, aparceros o - colonos que figuren en ellas, con sus respectivos nombres, siendo éstos los únicos que podrán participar en la elección.

5º. Transcurridos los quince días a partir de la publicación de esta Orden en la "Gaceta", las entidades a quienes alcance el derecho electoral declarado procederán, en el plazo de cinco días, a celebrar la elección, con arreglo a sus Estatutos y Reglamento - y ante un representante de la Autoridad gubernativa.

6º. Se tendrán en cuenta para el procedimiento electoral las reglas del artículo 14 de la Ley de Jurados mixtos de Trabajo, con la modificación de que las actas parciales de votación deberán remitirse al Servicio de Política agraria del Ministerio de Trabajo y Previsión.

NORMES PER A LA VALORACIÓ DELS PRODUCTES, ESTABLERTES PER A LA PONÈNCIA  
DEL JURAT MIXT DE LA PROPIETAT RÚSTICA D'IGUALADA EN 5 DE SETEMBRE DE

1932

Com a conseqüència dels Decrets d'II de juliol, 6 d'agost i II d'octubre de 1931, foren molts els parcers que entaularen judici de revisió de renda de les finques que tenien en parceria.

Els uns consignaren en metàllic unes quantitats, la major part de les vegades arbitràries, però que deien que estaven en relació amb el líquid imputat a la finca objecte de la revisió.

Altres s'acolliren a l'anomenat "Pacte de la Generalitat", i lliuraren el rebut del propietari com a consignació, acreditant - haver lliurat una part dels fruits i a les resultes del judici iniciat.

Els jutges especials nomenats per a entendre aquests judicis, amb un zel i desinterès digne de lloança, imprimiren gran activitat per a la tramitació i resolució de les demandes pendents, a fi d'evitar conflictes en la collita cereals que s'apropava, segurs que serien acatades les sentències i respectada la santetat de la cosa jutjada.

Vingué la collita de cereals, i a la nostra comarca es donaren els casos següents:

Primer. El parcer que sense haver acudit al judici de revisió retenia el 50 per cent de la collita que corresponia al propietari.

Segon. El parcer que haven acudit al judici de revisió, estant aquell faltat i sense recurs pendent, i que també retenia, sense raó justificada, el 50 per cent de la collita de cereals - corresponent al propietari.

Tercer. El parcer que, tenint el judici de revisió apel·lat davant la Comissió Mixta Arbitral Agrícola i que, aquest fet, reté, en ús del seu dret, el 50 per cent del que correspon al propietari i a les resultes del judici.

Quart. El parcer que, en qualsevol dels casos reté la totalitat de la collita.

Entén aquesta Ponència que s'han de resoldre aquests casos conforme la llei, equitat i justícia, fent respectar els veredictes definitius i obligant uns i altres a subjectar-se als decrets i lles vigents.

I abans de passar endavant, per a millor orientació i més avantatjosa i ràpida resolució de les demandes que es presentin, entenen convenient que pel Jurat Mixt s'adoptin unes normes relatives a la valoració de productes controvertits a fi que, ràpidament,

puguin fer-se efectives les resolucions, i que, segons el nostre criteri, podrien ésser les següents:

Per cada cova de raïm, 1'25 pessetes; per cada càrrega de vi, 26 per cada quartera de blat, 25; per cada quartera d'ordi, 14; per cada quartera de civada, 13.

Tenint en compte per a facilitar equivalències, que: una dotzena de garbes de blat equivalen a una quartera; una dotzena de garbes d'ordi, equivalen a una quartera; una dotzena de garbes de civada, equivalen a una quartera.

Es creu convenient adoptar aquesta valoració davant la gran dificultat o impossibilitat material de retornar els productes retinguts i, en canvi, quedarán les resolucions extraordinàriament simplificades, obligant a retornar les equivalències en metàllic - corresponents.

A continuació es citen quatre casos que justifiquen les normes més amunt esmentades, i acaba amb aquestes assenyalades manifestacions:

L'agricultura, més que patrimoni particular, és una de les branques, potser la primera, de la riquesa nacional, i aquesta no pertany a uns ni a altres, sinó que és patrimoni de tots, i per això tots estem obligats a defensar-la.

Que els parcers es convencin que han de complir les lleis i decrets del Govern, procurant sempre tenir una visió objectiva - no subjectiva del problema, deixant a part els apassionaments i - l'amor propi, amb les quals armes difícilment s'arriba a punts de coincidència.

I que els propietaris procurin també tenir de l'assumpte una visió altruista, fent-se càrrec de les circumstàncies i del - moviment revolucionari que ha canviat per complert la cara d'Espanya, i deixant a part egoismes, moltes vegades mal entesos, tractin aquest assumpte en forma liberal per aconseguir que siguin novament un fet - les bones relacions entre parcers i propietaris, base principal de - la prosperitat dels camps.

Igualada, 5 de setembre de 1932".

LLEI DECLARANT QUE NO PODRÀ EXERCITAR-SE L'ACCIÓ DE DESNONAMENT EN ELS  
CONTRACTES D'ARRENDAMENT DE FINQUES RÚSTIQUES, EN AQUELLES EN QUE LA -  
RENDA O LIQUID ANYAL NO EXCEDIEXI DE 1.500 PESSETES, A EXCEPCIÓ D'AQUE-  
LLES EN QUE LA DEMANDA ES FONAMENTI EN LA MANCA DE PAGAMENT DEL PREU -  
CONVINGUT, D'II DE SETEMBRE DE 1932 (GAZETA DEL DIA 21)

## L E Y

Art. I.- No podrá ejercitarse la acción de desahucio en los contratos de arrendamiento de fincas rústicas, cultivadas o aprovechadas por agricultores o labradores, cuya renta o merced anual no exceda de 1.500 ptas. excepto cuando la demanda se funde en falta de pago del precio convenido.

Art. 2.- La tramitación de los desahucios incoados con anterioridad a la vigencia de esta Ley, y las providencias judiciales mandando ejecutar sentencias que lleven aparejado el lanzamiento quedarán en suspenso, con la excepción consignada en el artículo anterior, si todavía no se hubiesen cumplido en todas sus partes y el demandado continuase en la tenencia efectiva de la finca arrendada.

Este precepto no será aplicable a los procedimientos que por las normas del juicio especial de desahucio se hubiesen promovido con anterioridad al 29 de abril de 1931, para hacer efectivo el derecho concedido al comprador por el art. 1571 del Código civil, ni a los casos de precario, excepción hecha de los bienes de capellanías y fundaciones eclesiásticas; sin perjuicio de que tales entidades puedan instar las acciones que estimen procedentes en reivindicación de los mismos o en reconocimiento de sus derechos sobre la propiedad; dejándose sin efecto los procedimientos que en la fecha en que entre en vigor esta Ley se encuentren en tramitación o no se hayan ejecutado las sentencias.

Art. 3.- Las anteriores disposiciones serán aplicables, por analogía a las aparcerías y tipos contractuales similares, - cuando el beneficio medio obtenido por el titular de la propiedad de cada aparcero no hubiera excedido en los últimos 5 años - de 1.500 ptas.

Art. 4.- Esta Ley estará en vigor hasta que se publique la que regule los arrendamientos de fincas rústicas.

Art. 5.- Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo preceptuado a la presente Ley.

S. Sebastián, 11 de Septiembre de 1932.

LLEI REFERENT A REVISIÓ DE FINQUES RÚSTIQUES D'II DE SETEMBRE DE 1932  
(GAZ. DEL DIA 21).

L E Y

Art. I.- En todos aquellos casos en que por resolución de los tribunales ordinarios, como jurados mixtos o comisión - mixta arbitral agrícola, o por convenio de los interesados, se ha verificado la revisión de las rentas o participaciones de - aparcería a que se refiere el art. 2 del decreto de 31 de octubre de 1931, seguirá en vigor la reducción concedida o accordada hasta que se publique la ley de arrendamientos de fincas rústicas.

Art. 2.- En el caso de que la renta revisada fuere inferior a la declarada por el propietario a fines fiscales hasta primero de septiembre del presente año, aquel podrá aumentar dicha renta en el exceso de contribución que haya experimentado la finca como resultado de la declaración.

Art. 3.- Lo dispuesto en los artículos anteriores será aplicable a los juicios de revisión en que aun no haya recaído resolución definitiva y a aquellos en que no se hubiere resuelto sobre el fondo del asunto, siempre que se hubiese consignado debidamente y entablado la reclamación en momento oportuno.

Art. 4.- Esta Ley comenzará a regir desde su publicación a la Gaceta de Madrid.

S. Sebastián a 11 de septiembre de 1932.

ACORD DEL JURAT MIXT CIRCUMSTANCIAL DE LA PROPIETAT RÚSTICA DELS  
PARTITS DE VILAFRANCA DEL PENEDES-VILANOVA I LA GELTRU

En el seu darrer ple, aquest Jurat aprovà, per majoria de vots, el següent acord:

Primer. Acatar totes les disposicions del Govern de la República, referent al particular, i particularment aquelles en les quals hom disposa que, fins a la promulgació de la Llei d'Arrendaments, resten vigents les decisions dels judicis de revisió (sigui dels Jutjats especials o de la Comissió Mixta arbitral), tant si hom ha declarat que no hi ha lloc a la revisió, com si ha estat atorgada una rebaixa a profit del conreador, i que regiran els contractes actuals quan hagi estat favorable al propietari o no s'hagi sol·licitat la revisió, i, en conseqüència:

Segon. Que procedirà a la partició segons la sentència del judici de revisió, quan s'hi ordeni rebaixa a favor del conreador.

Tercer. Es partirà amb el 50 per cent de rebaixa a favor del llaurador, quan hi hagi judici de revisió pendent en primera - instància o en apel.lació, a resultes dels fallos que recaiguin.

Quart. En tots els altres casos, es compliran exactament els contractes actuals, en el ben entès que el propietari lliurará al conreador un rebut dels fruits que li han estat lliurats, i s'obligarà a retornar al conreador la part corresponent, quan el Jurat mixt declari haver-hi lloc a modificar el contracte. Es a dir, acceptant que tingui efecte retroactiu per a la collita de raïm actual i, a més, per a totes les d'enguany, a comptar des de 1er. del passat mes de gener.

Cinquè. Es liquidarà, per part del propietari, el sulfat i el sofre que aquest hauria de satisfer, i que per no haver-lo recollit el conreador o per no haver-lo donat el propietari, hagi hagut d'ésser satisfet pel conreador. Aquests returns podrien donar lloc a diferències, que seran resoltes per una ponència especial d'aquest - Jurat.

La qual cosa es comunica per a coneixement general, així - com que l'incompliment d'això acordat es sancionarà per aquest organisme en la forma i pels tràmits que estableix la Llei, sense perjudici de les accions governatives i judicials que resultin procedents en cada cas.

Vilafranca, 16 setembre de 1932.- El president, Gregori  
Burgués i Foz.- El secretari, C. Cortina i Giner.

ORDRE DEL MINISTERI DE TREBALL I PREVISIÓ DE 24 D'OCTUBRE DE 1932  
(GAZ. 28), CREANT UN JURAT MIXT DE LA PROPIETAT RÚSTICA A VENDRELL

Ilmo. Sr.: Vista la instancia suscrita por el Presidente de la Sociedad "Sindicato Agricultores Rabassaires", de Lloréns - del Panadés (Tarragona), en nombre de dicha Sociedad y de las 23 que comprende el partido judicial de Vendrell, en solicitud de que se constituya en este partido un Jurado mixto de la Propiedad rústica, por existir pendientes reclamaciones de revisión de contratos de arrendamientos de fincas rústicas, en espera de la constitución del Jurado mixto correspondiente:

Considerando justificada la petición y procedente la constitución de un Jurado mixto de la Propiedad rústica en Vendrell (Tarragona), con jurisdicción sobre el partido judicial del mismo nombre,

Este Ministerio ha dispuesto:

1º. Que, con carácter normal y la plenitud de atribuciones que concede a estos organismos la Ley de 27 de Noviembre de 1931, - relativa a Jurados mixtos de trabajo, se constituya en Vendrell un Jurado mixto de la Propiedad rústica, con jurisdicción sobre el partido judicial del mismo nombre.

2º. Este Jurado se compondrá de cinco Vocales representantes de los intereses de los propietarios de fincas rústicas, y otros tantos Vocales en representación de los colonos, teniendo en cuenta unos y otros sus respectivos suplentes y elegidos todos de las Asociaciones de una y otra clase legalmente constituidas en la comarca a que se extiende la jurisdicción del Jurado.

3º. A este efecto, tendrán derecho a la designación de Vocales, las Asociaciones de propietarios de fincas rústicas y las de arrendatarios, aparceros o colonos de cualquier clase constituidas legalmente en el territorio de la Jurisdicción del Jurado e inscritas - en el censo electoral social que se lleva en este Departamento, más - las que se inscriban en el mismo, dentro de los treinta días siguientes de la publicación de esta Orden en la "Gaceta".

4º. Se extiende este derecho electoral a que se refiere el número anterior a las Asociaciones de carácter obrero que consten inscritas en el Censo Electoral del Ministerio. Pero tratándose de esta clase de entidades, será requisito indispensable, para la validez de la elección, que remitan a este Ministerio, dentro de los treinta días siguientes a la publicación de la presente Orden, declaración suscrita por el Presidente y Secretario respectivos, haciendo constar el número

de socios arrendatarios, aparceros o colonos que figuren en ellas, con sus respectivos nombres, siendo éstos los únicos que podrán participar en la elección.

5º. Transcurridos los treinta días, a partir de la publicación de esta Orden en la "Gaceta", las entidades a quienes alcance el derecho electoral declarado, procederán, en el plazo de cinco días, a celebrar la elección, con arreglo a sus Estatutos y Reglamento y ante un representante de la Autoridad gubernativa.

6º. Se tendrán en cuenta para el procedimiento electoral, las reglas del artículo número 14 de la ley de Jurados mixtos de trabajo, con la modificación de que las actas parciales de votación deberán remitirse al Servicio de Política agraria del Ministerio de Trabajo y Previsión.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.  
Madrid, 24 de Octubre de 1932.

P. D.,  
A. FABRA RIBAS

Señor Director general de Trabajo.

ACORD ADOPTAT PEL PLE DELS JURATS MIXTOS CIRCUMSTANCIALS DE LA PROPIETAT RÚSTICA D'IGUALADA, VILAFRANCA DEL PENEDÈS I VILANOVA I LA GelTRU  
EL DIA 18 D'OCTUBRE DE 1932 (B. O. DIA 26)

Tanto los señores Jueces especiales, en su día, como, en su anterior momento, la Comisión Arbitral Agrícola, decidieron, mediante sentencias o resoluciones, respecto de la interpretación partitiva - de los contratos agrícolas que, regulando rabassas y aparcerías, fueron, por sus cultivadores, sometidos a revisión.

Creados posteriormente los Jurados mixtos circunstanciales de la Propiedad rústica de los partidos de Igualada-Villafranca del Panadés-Villanueva y Geltrú, dictaron estos organismos resoluciones generales que, sin contener puntos de vista nuevos en el orden legal, resumían y agrupaban de modo claro y orientador, las disposiciones vigentes.

Tales disposiciones, contenidas en los aludidos acuerdos - de estos Jurados, han sido confirmados por la Ley de 11 de septiembre último, inserta en la Gaceta de 21 del propio mes.

Esta medida pone razonablemente término a la contienda, - pues tratándose de una disposición que cuenta con el asenso legislativo del país, no deja otra posibilidad que la de su recta interpretación y aplicación, por lo menos en cuanto a aquellas situaciones ya enjuiciadas y resueltas por decisiones de los señores Jueces o la Comisión Arbitral antes citada, y sin perjuicio de que los Jurados mixtos circunstanciales de la Propiedad rústica actuando previamente dicten normas contractuales que sirvan para regular - las próximas cosechas, evitando que durante el transcurso de ellas se produzcan perturbaciones en los campos y agitaciones dañosas en los espíritus.

La Ley antes citada cancela jurídicamente cuanto pueda tener de opinable el problema que se debate, y a ella han de atenerse los que, con diversas posiciones, hubiesen litigado hasta su publicación.

Dedúcense de su recta lectura las acciones que corresponden a la propiedad, tanto las de índole civil como las sujetas al procedimiento penal.

No obstante, los Jurados mixtos circunstanciales de la - Propiedad rústica de Villafranca-Villanueva-Igualada se han creído en el deber de dictar ahora una resolución que poniendo término a lo actuado hasta el día, y reiterando en esta oportunidad que en la cosecha de la uva se debe partir conforme a los acuerdos adoptados en 16 de septiembre en Villafranca para esta comarca y la de Villanueva, y en 5 de octubre en Igualada para cuantos pueblos dependan de su capitalidad territorial, sirva de cauce para la restitución -

normal de lo indebidamente retenido, tanto en beneficio de los legítimos intereses y derechos de la propiedad, a la que, aunque sin necesidad, se reitera en su justa posición contractual, como en provecho de los propios cultivadores, que si ajustan su proceder sucesivo a las normas que se dibujan en esta resolución evitarán el ejercicio de aquellas acciones civiles o criminales antes mencionadas, posibilitando el restablecimiento de la normalidad jurídica, base imprescindible para que, serena y meditadamente, puedan estudiarse nuevas normas de contratación, que en unos casos sustituyan y en otros rectifiquen las que han regido aún hoy, y que por no ajustarse a la voluntad de ambas partes contratantes han podido dar lugar a la colisión que entre todos estamos obligados a evitar perdure o se reproduzca.

Vistas estas consideraciones, en su Último Pleno adoptaron los Jurados mixtos circunstanciales de la Propiedad rústica el siguiente acuerdo:

"Siempre que el cultivador (aparcero o rabassaire) haya dejado de entregar al propietario parte de la totalidad de los frutos que según contrato y disposiciones legales (ratificadas y refundidas estas últimas en resoluciones de estos Jurados, recaídas en - 16 de septiembre y en 5 de octubre y reiteradas en Ley de 11 de septiembre, Gaceta de 21 del propio mes) pertenezcan a éste, queda obligado el cultivador a devolver a su legítimo propietario aquella parte o partes que indebidamente retenga en su poder.

Esta devolución, referida a cuantas participaciones se -  
hayan hecho provisionalmente con recibo de retención o con protesta de la parte propietaria durante el año último y el actual, deberá verificarla desde luego, el cultivador, en la forma que convenga con el respectivo propietario.

Si de este modo espontáneo no lo hiciera, el propietario deberá dirigirse, por sí o por la Asociación legal que le represente, al Jurado pertinente poniendo el hecho en conocimiento de éste - y formulando en el escrito que suscriba y eleve una razonada liquidación de las partes que a su favor acredice y retenga el cultivador, como se ha dicho, de modo indebido, en su poder.

El Jurado, aparte de fijar la sanción que corresponda por infracción de sus acuerdos y de celebrar el oportuno juicio ante su Ponencia Tribunal, librará al reclamante, una vez puesto en claro su derecho, certificado de la resolución de hoy, por la que se declara la obligación de restituir la indebidamente ocupada por el cultivador, con cuyo certificado el propietario afectado podrá acudir al Juzgado correspondiente en defensa de su derecho.

Para fijar la más estrecha colaboración entre los Jurados que suscriben y la Autoridad judicial, se dará cuenta a ésta de la presente resolución, comunicándola al excelentísimo señor Presidente de la Audiencia Territorial, por si él mismo estimara conveniente, y así de él se interesa, dictar alguna circular aclaratoria, simplificando el procedimiento en lo posible, hasta dotar al anterior acuerdo de la máxima eficacia.

También se comunica este acuerdo al Iltre. señor Delegado del Trabajo y a la primera Autoridad gubernativa de esta provincia por si ésta se digna prestar para la ejecución de lo acordado, su valiosa y necesaria asistencia".

Barcelona, 18 de Octubre de 1932.- El Presidente (firma - ilegible).- El Secretario, C. Cortina Giner.

ACORD DEL JURAT MIXT CIRCUMSTANCIAL DE LA PROPIETAT RÚSTICA D'IGUALADA  
DE 16 D'OCTUBRE DE 1932. (B. O. DEL DIA 26)

En su último Pleno, celebrado el día 5 del corriente aprobó este Jurado el siguiente acuerdo:

"Aparecida la Ley de 11 de septiembre último, que inserta la Gaceta de 21 del propio mes, y coincidiendo dicha superior disposición estrictamente con acuerdos establecidos por el Jurado mixto - circunstancial de la Propiedad rústica de Villafranca-Villanueva, - de 16 de Septiembre antes citado, este Jurado de igual clase de Igualada hace suyos los citados acuerdos que son como sigue:

1º. Acatar todas las disposiciones del Gobierno de la República referentes al particular y especialmente aquellas en que se dispone que hasta la promulgación de la ley de Arrendamientos quedan en vigor los fallos de los juicios de revisión (sea de los Juzgados especiales o de la Comisión mixta arbitral), tanto si se ha declarado no haber lugar a la revisión como si se ha otorgado una rebaja a favor del cultivador, y que regirán los contratos actuales, cuando haya sido

favorable al propietario o no se haya solicitado la revisión. En consecuencia:

2º. Se procederá a la partición según la sentencia del juicio de revisión cuando en ella se ordene rebaja a favor del cultivador.

3º. Se repartirá con el 50 por 100 de rebaja a favor del labrador, cuando haya juicio de revisión pendiente, en primera instancia o en apelación, a resultas de los fallos que recaigan.

4º. En todos los demás casos se cumplirán exactamente los contratos actuales; en el bien entendido que el propietario entregará al cultivador un recibo de los frutos que se le entreguen, obligándose a la devolución al cultivador de la parte correspondiente - cuando el Jurado mixto declare haber lugar a modificar el contrato, es decir, aceptando tenga efecto retroactivo para la cosecha de uva actual, y además para todas las del año actual a partir de 1 de enero pasado.

5º. Se liquidará por parte del propietario el sulfato y - azufre que éste debiera satisfacer, y que sea por no haberlo recogido el cultivador o no haberlo dado el propietario, haya tenido que ser suplido por el cultivador.

Estas devoluciones podrán dar lugar a diferencias que serán resueltas por una ponencia especial de este Jurado.

Lo que se comunica para general conocimiento, así como que el incumplimiento de lo acordado se sancionará por este Organismo — en la forma y por los trámites que establece la Ley, sin perjuicio de las acciones gubernativas que pudieran en cada caso resultar procedentes".

Igualada, 16 de Octubre de 1932.— El Presidente (firma ilegible).— El Secretario, C. Cortina Giner.

APENDIX VII

DOCUMENTS OFICIALS I OFICIOSOS UTILIT-  
ZATS PER LA GENERALITAT PER CONSTRUIR  
LA LLEI DE CONTRACTES DE CONREU I DE-  
FENSAR-LA DAVANT EL TRIBUNAL DE GARAN-  
TIES CONSTITUCIONALS.

EXPOSICIÓ QUE PRECEDIIX A L'AVANTPROJECTE DE LLEI  
DE LA COMISSIÓ JURÍDICA ASSESSORA

## EXPOSICIÓ

La Comissió Jurídica Assessora, en compliment del Decret de l'honorable senyor Conseller de Justícia i Dret del Govern de la Generalitat de Catalunya, pel qual li encomanà, amb caràcter d'urgència, la formació d'un avantprojecte de Llei reguladora dels contractes d'arrendament, masoveria, parceria, rabassa morta i altres relatius a finques rústiques, servant les peculiaritats del dret propi de Catalunya, designà una Secció especial per a donar compliment a l'honorós encàrrec, que avui té l'honor d'elevar a la V. S.

En complir aquest deure, la Secció especial formuladora del present avantprojecte creu convenient manifestar, amb la major sobrietat, les orientacions fonamentals a què respon, i els motius en què recolza.

La Secció especial es troba plantejada com a primera qüestió, la de determinar l'àrea que en la matèria a regular corresponia a la competència legislativa de Catalunya, a l'efecte de salvar, en determinades zones extremes, les limitacions que imposen l'Estatut

del 15 de setembre del 1932 i la Constitució de la República.

L'art. II de l'Estatut reconeix a Catalunya la legislació exclusiva en matèria civil, exceptuant allò que disposa l'art. 15, nº 1r, de la Constitució; i entre les excepcions que conté —que, com a tals, són d'interpretació restrictiva— no hi entren els contractes de conreu. L'art. 12 de l'Estatut disposa que correspon a la Generalitat la legislació exclusiva i l'execució directa en el que es refereix a política i acció social agrària, encara que exceptuant la legislació social, de conformitat amb el paràgraf primer de l'art. 15 de la Constitució. La Secció especial, per tant, ha pogut actuar en un sector d'ampla competència, ja que el dret social, que té per finalitat específica regular el desenvolupament del contracte de treball o de prestació de serveis, no afecta als contractes de conreu, o sigui d'arrendament de coses.

Resolta aquesta qüestió prèvia, la Secció entrà a l'estudi del problema del mètode a adoptar en l'elaboració de normes; i en aquest punt, preferí situar-se en un prudent eclecticisme, entre la forma sintètica i la reglamentària o casuista, procurant salvar en determinats casos els inconvenients dels preceptes simplistes, sense, però, caure en un excessiu pragmatisme.

La forma sintètica o concentrada és recomanable en general, i factible en tractar-se de preceptes de substància codificadora, reguladors d'institucions científicament consolidades i depurades, però no sempre és convenient ni possible la seva aplicació en lleis com la present pel caire innovador d'algunes de les regulacions que conté, com ho és, entre altres, la del dret d'adquisició, que frenen de precedents mostrats i de camí fressat per la doctrina o la legislació comparada.

La Secció s'ha trobat en la necessitat de redactar una Llei reclamada després d'un període d'anormalitat, per mor del qual és lògic que el legislador no resti confiat en què el joc de la consuetud i del compliment pacífic ompli o fecundi les normes sintètiques en què podia condensar els principis establerts; la necessitat d'entendre que, si bé certs articles poden tenir un regust reglamentari, amb tot, per ésser preceptes de contingut eminentment civil que afecten, per tant, els drets privats dels ciutadans, no procedia abandonar la regulació de certs extrems, a la potestat reglamentària de l'Administració; i per aquests motius, i per respecte als furs del Parlament català, ha cregut la Secció necessari incrustar en la Llei certs pronunciaments i oferir-li un cos legal gràvid de juridicitat, però absent d'encarcararaments i feixugueses, que un reglament posterior podrà desenrotillar.

Com altra qüestió prèvia, la Secció hagué de precisar la matèria que havia d'ésser objecte de la regulació, i atenent-se a la comanda que li era confiada, s'ha concretat a normar el que es refereix a contractes de conreu de terres, i ha deixat la regulació dels pecuaris, dels mixtes de pecuaris, i de conreu i dels que no tinguin per finalitat específica el conreu agrícola, per a ésser reposadament ordenats en la futura legislació civil de Catalunya.

Dins la matèria a regular, la Secció, davant la premura del temps, i desitjosa d'evitar discussions sobre conceptes tècnics potser encara no prou consolidats, i defugint aspectes que no demanen una reforma immediata, atès que la Llei, la preparació de la qual se li confiava, havia de resoldre amb ineludibles apremis qüestions plantejades pels contractes actuals, s'ha limitat a formular preceptes que els regulen en els aspectes més vius, deixant també els seus altres caires per a la regulació futura de la nostra legislació civil, on podran ésser recollits els preceptes fonamentals i de caràcter permanent que pressuposa aquest avantprojecte.

El Decret expressat, en dir que la regulació dels contractes de conreu havia d'esser "servant les peculiaritats del dret propi de Catalunya", determinà el suport i les línies fonamentals que ha de tenir aquest avantprojecte.

La Secció, lluny de sentir-se cohibida amb aquest condiccionament, hi ha trobat la veu inspiradora del seu treball perquè respon a una arrelada convicció seva. Entengué, però, la Secció, que no podia interpretar la indicació esmentada en el sentit que els nous preceptes havien d'ésser una simple reproducció de les formes vetustes del nostre dret, considerant-les intangibles, en forma que hauria dificultat les produccions legislatives de l'avenir. La Secció, en conseqüència, hagué d'enlairar-se a la zona dels principis generals - de les nostres institucions viscudes, i es va inspirar en els de llibertat i equitat, que no sols constitueixen el motor del nostre règim jurídic, sinó que han estat en tot temps la base del nostre ressorgiment nacional, i que per a harmonitzar-se de manera admirable amb el postulat de justícia social, poden ésser fonament d'un demà prometedor.

Els principis animadors d'aquest avantprojecte són, per tant, la llibertat de contractació i l'equitat. Ells li donen l'harmonia que permet de regular l'autonomia de la voluntat sense regust de doctrinariisme, i modernitzar la nostra legislació civil amb experiències copades en la realitat de la vida jurídica catalana.

Són també aquests dos principis els que donen a l'avantprojecte una unitat que el fan un conjunt sistemàtic, en el qual el desplaçament d'una peça, no degudament compensat, podria provocar la seva total desarticulació.

Una de les matèries més importants de l'avantprojecte és la relativa a la durada dels contractes de conreu. La Secció ha procurat mantenir la llibertat contractual, però supeditant-la a un equitatiu frenatge quan un interès especial o la protecció de la part més feble ho exigia.

En el que es refereix a la durada, ha tingut per mira econòmicament seguir la màxima estabilitat del conreador amb la terra; i a aquest efecte, ha estatuit diverses pròrrogues en cura, però de no pertorbar amb elles la normalitat de la contractació futura; harmonitzant l'estabilitat amb disposicions encaminades a garantir un lleial compliment dels contractes per ambdues parts.

Ha reduït a un sol cas l'exercici aïllat de l'acció fulminant de desnonament, sens perjudici que, en el terreny més ample de la resolució dels contractes per incompliment d'obligacions o per altres causes, pugui ésser ventilada en forma ràpida la resolució del contracte, i, si és procedent, el llançament del conreador,

En aquest aspecte de la vida agrícola, això és, el de l'estabilitat del que conrea, l'avantprojecte ha tingut compte d'eliminar el rigorisme de la Llei Emptori del Corpus Juris Civilis, cristal·litzada en l'art. 1571 del Codi Civil espanyol.

El contracte de conreu és en essència un simple expedient d'explotació agrícola, i és lògic, per tant, que l'adquirent d'una finca hagi de suportar els contractes que hi trobi subsistents. Però quan un contracte de conreu, per la seva durada, adquiereix un perfil de càrrega real, si el conreador vol que el seu dret prevalgui contra el de tercer que desconeixia l'existència del contracte, és necessari que aquest estigui inscrit, ja que la protecció de la bona fe i la normalitat de la contractació immobiliària ho exigeixen.

Es prohibeixen pel futur els subarrendaments en els contractes de conreu, per a evitar l'actuació parasitària d'agents intermediaris. La prohibició, però, no és feta d'una manera tan absoluta que no permeti casos justificats.

En el que es refereix a despeses i millors, la Secció creu haver proposat fórmules justes que mantenen l'estímul de millorament dels nostres camps i eviten alhora que les disponibilitats del propietari quedin subjectes al caprici del conreador.

La qüestió potser més delicada que regula l'avantprojecte és la de les revisions. La possibilitat excepcional de reduir la renda en els arrendaments, no era desconeguda del tot en el nostre Dret. La revisió del preu o quota-part de fruits en els contractes de conreu als efectes d'atansar-la a termes d'equitat, fou iniciada per la República. En aquest avantprojecte la revisió deixa de tenir un caràcter circumstancial i provisori, i es converteix en institució permanent, encara que sotmesa a un ritme.

La consciència jurídica dels membres de la Comissió que han integrat la Secció especial redactora, no dubtà de donar caire d'institució permanent a les revisions; i per a fer-ho, no s'ha hagut d'eixoplugar en la teoria del fet revolucionari. Li ha estat suficient inspirar-se en el mateix criteri d'equitat, que per ésser consubstancial al nostre dret al través de la consuetud i de la doctrina, ha dinamitzat les nostres lleis catalanes amb una inspiració ètica i social absent de liturgisme jurídic.

La revisió regulada en l'articulat no ataca el contracte, en el que té d'immutable, ni en la seva substància jurídica i lligam contractual; i es limita a rectificar les seves conseqüències econòmiques. Aquesta rectificació és evidentment justa en les institucions jurídiques de llarg termini que comprometen l'avenir, en les quals les mutacions de la vida disloquen sovint la seva normalitat econòmica.

La qüestió que té major dificultat en aquesta matèria és la d'obtenir la fórmula de la renda justa i de la distribució equitativa que serveixi de base a les revisions.

Pel que es refereix a contractes de preu fix, la Secció no ha adoptat el sistema de nivell mig de rendes en cada comarca, perquè algun cop podia haver esdevingut inequitatiu, i perillava que la llei consagrés una situació de fet abusiva. Tampoc no ha acceptat com a renda justa a percebre pel propietari, la que resultés d'aplicar un tant per 100 d'interès del valor del capital-terra, perquè aquesta fórmula podia posar el conreador en condicions econòmiques inferiors a les d'un simple jornaler. Tampoc no ha admès la Secció, com a base de les revisions, el líquid imponible; perquè essent un element, el volum del qual està influenciat per la declaració del propietari, i que no és fàcilment comprovable amb eficiència tècnica, no oferia cap garantia de representar una renda justa.

La Secció ha rebutjat, per tant, com a pauta de les revisions, la fórmula simplista del líquid imponible amillorat, perquè la considera d'equitat dubtosa i, per tant, possiblement perjudicial per a qualsevol de les parts. L'equitat no pot dependre del caprici del propietari en declarar rendes als efectes tributaris, ni és just que vagi a remolc d'un ressort purament fiscal, més o menys imperfecte. Un cadastre ben format, i conservat sincrònicament amb les variacions que imposi la realitat, podria ésser-ne una bona base; però no els actuals amillaraments.

Amb tot, fins que el Cadastre sigui una realitat a Catalunya, cap inconvenient no hi ha que els organismes que hagin d'entendre de les revisions emprin les fórmules que ja han estat acceptades per la legislació cadastral vigent.

Per aquest motiu, en referir-se a contractes de preu fix, l'avantprojecte adoptà una base de revisió que en el fons és la de tot bon Cadastre.

En el que es refereix a contractes a parts, de caràcter semblant als d'unió o cooperació, la distribució dels avantatges econòmics que corresponen al conreador i al propietari ha de respondre a les característiques de l'essencial cooperació esmentada, i, per tant, la distribució de fruits ha d'estar en equació amb el percentatge d'aportacions i prestacions de les parts, en el compte d'elements i despeses de l'explotació agrícola.

La Secció ha entès que facilitarà la tasca de revisar la formulació de contractes-tipus de conreu comarcal, que sota les normes expressades hauran de confeccionar gent entesa; i per aquesta causa, la regula, encara que sense fer-los d'aplicació imperativa, per a donar-los el caràcter de pauta equitativa, no sols de les futures revisions, sinó també de la futura contractació.

Ha considerat la Secció perillós i impracticable que la Llei s'avancés a determinar no sols aquests contractes-tipus, sinó també quins dels vigents havien d'ésser considerats com a abusius. La gran varietat de pactes de conreu en les diferents comarques catalanes fa perillosíssima aquesta determinació per endavant. Una quota-part que de bell antuvi podria semblar abusiva, pot de fet ésser justa i fins favorable al conreador, segons siguin les prestacions del propietari. Aquesta possibilitat, ha decidit la Secció a no escometre una empresa que considerava estèril i fins perturbadora, i a entendre que el projecte de Llei complia la seva comesa, assenyalant una fórmula per a determinar en cada cas concret quin fóra el preu just i la distribució equitativa.

En el que fa referència al ritme de les revisions, la Secció ha estimat convenient adoptar el que allunya més el perill de promoure perturbacions malaguanyades, i ha considerat just el que proposa, tenint en compte la situació en què de fet es troba el compliment dels contractes en els nostres camps, i l'alta consideració que ha de merèixer el treball en l'actual estadi de civilització.

També ha cregut equitatiu reconèixer al propietari el dret a una revisió excepcional, rectificadora del desequilibri que ha provocat la desvalorització de la nostra divisa en els darrers temps.

Aquesta revisió és compensada per altres d'extraordinàries atribuïdes al conreador, la justícia de les quals no és necessari raonar.

Una de les innovacions de l'avantprojecte consisteix en el dret d'adquisició, l'adopció del qual respon no sols a les aspiracions, sinó a les característiques del nostre poble. En un altre país potser esdevindria una institució inútil, i fins fictícia; a Catalunya, en canvi, esdevindrà segurament un instrument fecund de redistribució - de la propietat rústica, un ressort de pacificació en multiplicar els propietaris i una font intensificadora de la producció agrícola en - propulsar la tendència integradora del domini.

El prodigi de la robustesa de la propietat territorial catalana es deu en gran part a l'establiment emfítetic. L'estroncament d'aquesta institució, facilitadora de l'ascens dels estaments treballadors a la condició de propietaris, ha contribuït força a provocar un moviment retardatari en aquella evolució tan nostra, de reforma agrària automàtica assolida, sense interpol.lacions dels òrgans públics, i amb expropriacions doloroses. La conversió dels contractes de conreu actuals, per imposició legal, en situacions emfítètiques, encara que fossin a nua percepció, a més de representar una mutació forçada de causa contractual, que violenta el Dret, no respondria a la idiosincràsia del nostre poble. El règim d'economia privada, que tan admirablement encaixa amb la nostra manera d'ésser, orienta els catalans envers el desig d'ésser propietaris integrals, no pas en el migrant de convertir-se en emfiteutes, o sigui en simples titulants - d'una propietat gravada i controlada.

Per aquest motiu, el dret d'adquisició que l'avantprojecte regula, té la virtut de dirigir-se francament a convertir els conreadors en propietaris, prescindint d'imposar-los una prèvia fase emfiteutica. En l'emfiteusi aquest canvi s'efectua a través de dos cicles, que són : el d'establiment primer, i el de redempció després. El dret d'adquisició opera el canvi d'una manera directa i en un acte únic. La potencialitat econòmica de la nostra pagesia, i, on manqués, l'ajut de la Generalitat o dels instruments de crèdit agrari que institueixi, faran possible el dret d'adquisició. El dret regulat per la seva pròpia essència repugna tota comparació amb la institució administrativa de l'expropiació forçosa. Es una fórmula eminentment civil, que exigeix, per a fer-se efectiva, la preexistència de qualificats contractes de conreu; i que, per aquest motiu, el dret d'adquisició s'ha de catalogar dins de la família dels drets d'opció, retracte, tempteig i altres anàlegs de dret privat.

En regular l'esmentat dret d'adquisició, la Secció ha tingut cura d'atendre les diverses situacions jurídiques en què es pot trobar el domini d'una terra. Vetllant per la nostra producció agrícola, ha procurat evitar la denigració de les propietats unitàries i la destrucció de les indústries agrícoles. L'ha aplicat tan sols a situacions de conreu especials existents en l'actualitat. Ha ordenat el seu exercici en forma breu, que faci possible una solució arbitral, per evitar la multiplicació de plets, i perquè no esdevingui il·lusori l'exercici del dret. L'ha regulat, encara, de manera que no perilli de desvaloritzar la propietat rústica, fent d'ell un instrument eficac, però no pertorbador de l'economia de Catalunya. Per últim ha atribuït al dret d'adquisició una actuació provisòria per a evitar que la seva permanència indefinida obstaculitzés el tràfic immobiliari.

En el que ateny a contractes de conreu de naturalesa emfitèutica temporal, com la rabassa morta pròpiament dita, la Secció ha tingut en compte el gran parentiu que aquests contractes tenen amb els actes alienatoris, i per aquesta causa ha regulat el dret d'adquisició per a ells en forma que els reconeix un tracte de favor, especialment per a la determinació del preu d'adquisició. En reconèixer aquest avantatge ha considerat que en aquesta mena de contractes, el propietari havia deixat de tenir en el seu patrimoni la integrat dominical de la terra a la qual el contracte afecta.

La Secció, en regular el retracte legal a favor del conreador, ha tingut en compte que greus motius aconsellen no donar-li una gran amplitud. Malgrat reconèixer que gaudeix de certa simpatia la seva extensió a tot conreador, la Secció ha cregut que tan sols una visió simplista pot dissimular, sota la seva aparença inofensiva, -- greus inconvenients.

Els retractes legals avui existents són d'aplicació poc freqüent per l'excepcionalitat dels casos en què esdevenen aplicables; i això, malgrat que algun d'ells pertorba la contractació d'immobles en algun indret de Catalunya. El reconeixement del retracte a favor del conreador en tots els contractes de conreu, complicaria malgrat nyadament la contractació de la nostra propietat rústica, sotmetent-la a una limitació que actuaria més com a rèmora per a retraire els adquirents, que no pas de mitjà eficient d'integració dominical, perquè fàcilment és enervat amb preus simulats i altres artificis.

La localització, per tant, d'aquest dret de retracte a favor dels conreadors, a casos especials preexistents i regulats era amb més precisió i extensió, és feta amb mires a evitar l'estancament i el forcejament de la contratació. També la Secció ha tingut en compte, per a no estendre més el retracte del conreador, que el dret d'adqui-

sició el supleix amb avantatge. Amb tot, ha entès, també, que no hi havia causa per abolir-lo totalment i l'ha conservat perquè un cop transcorregut el període en què pot actuar el dret d'adquisició, - quedí encara la possibilitat d'integrament del domini en determinats contractes de conreu.

Un elemental sentit d'equitat exigeix concedir en justa - reciprocitat al propietari el dret de rescat o recobrament dels drets que deriven del contracte de conreu, quan el conreador els aliena en determinades circumstàncies.

L'últim capítol de l'avantprojecte es refereix als òrgans de concòrdia i arbitratge. De ben poc serviria, en molts casos, legislar i regular formes de convivença si no s'establia la seva efectivitat amb mitjans adequats i la matèria regulada. Però tot i tractant-se d'un sector en el qual correspon a Catalunya la seva legislació, l'avantprojecte es limita a desenrotillar el principi d'arbitratge que tant encaixa amb la vida del camp i amb la consciència del nostre poble; i organitza, a l'efecte, dues jurisdicccions arbitrals, l'una voluntària i necessària l'altra.

La concòrdia i arbitratge d'ordenament voluntaris, de funció tan conciliadora com jurisdiccional, té interessants precedents a Catalunya, i en arrelar en el règim jurídic de la nostra terra, posarà de relleu el caràcter nostrat, que tendeix a l'autoresolució dels conflictes.

Per a suprir la concòrdia i arbitratge voluntaris és regulada una jurisdicció arbitral forçosa, d'actuació ràpida i eficient.

L'òrgan superior dels arbitrals serà el Tribunal de Cassació, al qual es atribuirà el coneixement dels laudes en apel.lació.

La Secció té una ferma confiança que el Tribunal de Cassació, en entendre aquestes qüestions, produirà una jurisprudència - sàvia i encaixada alhora amb les realitats del camp i amb la manera

d'ésser del nostre poble.

La Secció, en completar l'avantprojecte amb ineludibles disposicions transitòries, no ha estimat convenient continuar-hi les que estableixen normes solucionadores dels conflictes jurídics provocats per fets ocorreguts aquests últims temps en algunes comarcas, perquè ha cregut que no era oportú involucrar en una Llei que es proposa la regulació definitiva dels contractes de conreu, precep-tes circumstancials que en el fons constitueixen una mesura de govern i acusen el ràssec de fets pretèrits. Ha preferit per aquesta causa desglossar-les, englobant-les en un text legal especial.

Amb aquestes consideracions, la Secció creu haver exposat i motivat breument les bases i orientacions principals d'aquest avantprojecte.

Malgrat les limitacions de temps i la fretura d'estadístiques i, en bona part, de fonts d'informació, la Secció que s'ha esforçat a estar sempre situada en un pla d'absoluta objectivitat, té el conven-ciment d'haver proposat una regulació justa. L'assolir aquesta fina-litat de justícia ha estat la seva constant preocupació. Ha tingut cura, sobretot, que les regles formulades responguessin a les carac-terístiques dels temps presents, sense que llur aplicació pogués pro-vocar una desvalorització de la nostra propietat rural, un estan-cament de la contractació, pertorbacions greus en la pròspera agricul-tura de la terra i, sobretot, un augment dels assalariats, no propie-

taris, en el nostre camp, que per tots els mitjans cal evitar.

Barcelona, abril del 1933.

Joan Maluquer i Viladot, Ramon M. Roca i Sastre, Joan Martí i Miralles, Antoni M. Borrell, F. de P. Maspons i Anglasell, Francesc Girons.

ACTA NÚMERO I DE LA PONÈNCIA ESPECIAL DE LA COMISSION JURÍDICA ASSESSORA  
ENCARREGADA DE FORMULAR L'AVANTPROJECTE DE LLEI REGULADORA DELS CONTRAC-  
TES DE CONREU A CATALUNYA QUE TINGUE LLOC EL PRIMER DE FEBRER DE 1933

Ponència especial. Acta núm. I.- Assitents: Senyor Maluquer,  
Roca, Martí i Miralles, Borrell i Soler, Quero.

A la ciutat de Barcelona, a primer de febrer de mil nou-cents  
treanta-tres.

Reunits els senyors Vocals de la Comissió Jurídica Assessora,  
que s'han expressat, sota la presidència del senyor Maluquer i Viladot  
i actuant el Secretari tècnic Quero, es declara oberta la sessió a les  
setze hores.

El Secretari dóna compte que els senyors Raventós i Mies estan  
malalts i el senyor Font de Rubinat no ha assistit segurament per la --  
peremptorietat de la convocatòria.

El President dóna compte que a requeriment del senyor Conseller de Justícia i Dret ha constituït una ponència especial per a formular un avantprojecte de llei sobre contractes d'arrendament de terres i altres. Que ha cregut convenient designar al Sr. Roca com a Ponent especial, que junt amb els senyors Borrell, Martí Miralles, Raventós, Mies, Fabrer i Font de Rubinat, constituiran la ponència especial esmentada. Que es tracta d'una qüestió urgent i difícil, i demana es treballi activament, per a poder lliurar al Govern el corresponent avantprojecte en el terme d'un mes. Així mateix comunica a la Ponència, que han estat designats els senyors Pujol i Font, Pau Padró i Josep Calvet, per a informar en nom de la Unió de Rabassaires, davant de la Ponència i que també s'avisarà a una representació de l'Institut Agrícola de Sant Isidre, amb el mateix objecte.

El senyor Roca accepta la designació feta pel senyor President, i prega als seus companys que s'estableixi una solidaritat íntima, a fi de què el projecte que resulti, sigui l'obra de tothom i sol·licita aclaracions respecte alguns punts.

El Sr. Martí Miralles exposa que, si en la llei en projecte es tracta de regular una matèria social, no és en realitat a la Generalitat a qui correspon el dret de legislar, i si es considera que és matèria civil, es trobaran amb la dificultat d'aplicar retroactivament les seves normes. El senyor Borrell exposa que l'objecció del seu il·lustre company pot rebutjar-se tenint en compte la facultat de rescindir els contractes que es considerin lesius, i que els contractes d'arrendament de terres podrien considerar-se que entren en aquesta cate-

goria per raó dels canvis soferts en les formes de cultiu i els -  
augments que ha sofert la mà d'obra.

El senyor Martí creu que també pot tenir-se en compte l'e-  
quitat, i el senyor Roca manifesta que la retroactivitat afecta a a-  
quelles institucions que, com els fideicomisos i els censos, tenen -  
tracte llarg i que així mateix pot tenir-se en compte la teoria del  
precedent causal, que admet el dret germànic.

Per últim es posen d'acord respecte a la forma de treball  
que ha de regir l'actuació de la Ponència i el senyor President ai-  
xeca la sessió a les divuit hores. En dono fe.

Vist i plau

El President,

J. MALUQUER I VILADOT  
(Rubricat)

El Secretari,

J. QUERO  
(Rubricat)

PROJECTE DE LLEI  
DE CONTRACTES DE CONREU

196

AL PARLAMENT DE CATALUNYA

El Conseller de Justícia i Dret, d'acord amb el Consell Executiu, té l'honor de sotmetre a la deliberació del Parlament de Catalunya el següent

PROJECTE DE LLEI  
DE CONTRACTES DE CONREU

CAPÍTOL I

Disposicions generals

Art. I<sup>r</sup>. Són objecte d'aquesta Llei els contractes - de conreu, i s'entenen compresos sota aquesta denominació els - contractes de rabassa morta, parceria, masoveria, arrendament - de terres i altres contractes de naturalesa anàloga, sempre - que siguin d'explotació preferentment agrícola. 197

Els contractes expressats no perden el seu caràcter per la circumstància de concórrer junt amb l'objecte específic de conreu, prestacions de serveis o obligacions de representació.

Queden, per tant, exceptuats els contractes pecuaris, o preferentment pecuaris, els quals seran objecte d'una llei especial.

Art. 2<sup>n</sup>. Els contractes de conreu han de complir-se segons els pactes lliurament convinguts, i obliguen els contractants al que expressament s'hagi pactat i, també, a les seves conseqüències segons la seva naturalesa, de conformitat a l'ús, a la bona fe i a la llei.

Art. 3<sup>r</sup>. Es obligació derivada del contracte, encara que no hagi estat expressament pactada, la de conrear segons ús i costum de la comarca i complir les consuetuds que generalment hi són observades, salvat el cas de pacte especial o de precepte legal contrari.

El conreador no podrà arrencar ni tallar cap arbre sense el consentiment del propietari.

Art. 4<sup>t</sup>. No corresponderà al conreador, llevat pacte en contra, el pagament de la contribució territorial i tributs i taxes anexes, ni el de les càrregues reals de la finca.

Art. 5<sup>è</sup>. En el contracte de masoveria, si no es pacta expressament, el masover no estarà obligat a pagar al propietari el lloguer de la casa ni de les altres dependències que utilitzi.

L'ocupació de la casa i de les dependències expressades haurà de seguir la sort del contracte de conreu a què vinguin - afectades, i, per tant, haurà d'exercitar-se sempre conjuntament l'acció de resolució de contracte o de desnonament.

El masover, llevat pacte en contra, podrà servir-se de les eines del mas pel conreu de la terra.

Art. 6<sup>è</sup>. L'usufructuari no pot atorgar, sense consentiment del nu propietari, cap contracte de conreu de terme superior a deu anys.

El marit, sense consentiment de la muller, no pot atorgar contractes de conreu de més de sis anys de durada respecte a la terra aportada en dot inestimat.

Els representants legals no podran tampoc, per si sols atorgar contractes de conreu per més de sis anys, ni els administradors judicials per més de dos.

## CAPÍTOL II

### Durada dels contractes

Art. 7<sup>è</sup>. El termini de duració dels contractes de conreu que en endavant s'atorquin, serà el pactat expressament per les parts; i, en defecte de pacte, es regiran per les normes següents:

En els contractes de rabassa morta, s'entendrà que el termini de duració és de cinquanta anys agrícoles o el menor que resulti en cas de mort dels primers ceps, o per quedar improductives les dues terceres parts dels plantats.

En els altres contractes de conreu s'entendrà que el termini de duració és el que es dedueixi del contracte, i si el contracte s'atorga per termini indefinit, s'entendrà que la seva duració és de sis anys agrícoles.

Art. 8<sup>è</sup>. Perquè els contractes de conreu no subjectes a la pròrroga legal, que estableix l'art II quedin extingits a l'expirar el termini pactat, o el supletori legal, cal que el propietari posi a coneixement del conreador, abans de començar l'últim any agrícola de durada, o el conreador al propietari, abans dels sis mesos darrers, la decisió de donar per finit el contracte.

Per tant, si ha expirat el termini pactat o el supletori legal, sense que cap de les parts hagi donat oportunament a l'altra l'avís a què fa referència el paràgraf anterior, s'entendrà tacitament continuat el contracte de conreu mentre el conreador o el propietari no donin els avisos que estableix el paràgraf anterior. Si el contracte era per un període menor de quatre anys, el període de tacita reconducció serà igual al del contracte, i si fos de quatre o més anys, aquell serà de quatre anys.

Art. 9<sup>è</sup>. Si durant la vigència d'un contracte de conreu o estant aquest tacitament continuat, el conreador, amb el consentiment exprés del propietari, hagués realitzat una nova plantació de la mateixa espècie que fou objecte principal del contracte, s'entendrà produïda una renovació per un termini igual a l'anterior i a comptar des de l'any agrícola inclusiu, en què es començà la nova plantació, i així successivament.

Art. 10. Quan per circumstàncies sobrevingudes o anteriors, però ignorades en contractar, la continuació - dels contractes regulats en aquesta Llei esdevingués perjudicial al conreador, aquest estarà facultat per fer abandó de la terra, finit que sigui l'any agrícola, però haurà de denunciar el contracte abans dels sis mesos darrers.

Art. II. Els contractes de conreu agrícola subsistents a l'<sup>r</sup>. de gener del 1932, que no s'hagin donat després per finits o resolts, per acord de les parts, abans de promulgar-se aquesta Llei, sempre que el conreador hagi continuat portant la terra, i que hi concorrin els requisits compresos en els números 2 i 4 de l'art. 59 es consideraran indefinidament prorrogats per ministeri de la Llei, a voluntat del conreador, i, obligatòriament, pel propietari, per anys agrícoles successius, a comptar des que fineixi el termini pactat.

En els contractes de conreu atorgats per les persones que s'expressen en l'article 13, a excepció dels fiduciaris, no es produirà la pròrroga establerta en aquest article.

Art. 12. Per a obtenir la pròrroga establerta en l'article anterior, caldrà que el conreador posi a coneixement del propietari la seva decisió de gaudir-se'n, abans dels sis mesos anteriors al venciment del contracte de conreu, sense perjudici, cas de no fer-ho, que es produexi la tàcita reconducció establerta en el paràgraf 2<sup>n</sup>. de l'art. 8<sup>è</sup>.

Art. 13. Els contractes de conreu, atorgats o que s'atorguin per l'usufructuari, fiduciari, reservista, comprador a carta de gràcia o empenyorament, o per altres titulars de domini o dret real amenaçat de revocació, en produir-se aquesta, — subsistiran amb el caràcter de prorrogats legalment a voluntat del conreador, fins que fineixi el termini estipulat.

Aquesta disposició és aplicable a les situacions jurídiques d'hereu apparent i posseïdor civil, sempre que aquesta i el conreador hagin obrat de bona fe.

Als efectes d'aquest article, i sols quant al càlcul de temps, l'usdefruit vitalici no es considerarà extingit fins a la mort de l'usufructuari, encara que aquest deixi d'ésser-ho per renúncia o altra causa.

En l'usdefruit temporal, una vegada finit el seu termini de duració, quedarà extingit el contracte de conreu. Si abans de finir el dit termini morís l'usufructuari, el contracte subsistirà com a prorrogat legalment, durant el temps que falti — per a consumir el termini inicial de l'usdefruit.

Art. 14. Si el contracte de conreu es troba en situació de pròrroga legal, el conreador podrà donar-la per finida, per quan acabi l'any agrícola en curs, avisant-ho al propietari abans dels sis mesos darrers.

Art. 15. La pròrroga legal provoca l'exoneració de les obligacions contretes per tercer per a l'assegurament del contracte de conreu.

Art. 16. Si el contracte de conreu es troba en situació de pròrroga legal, de conformitat al que estableixen els arts. II i I3, el propietari pot donar per finida la pròrroga, quan es proposin conrear directament la terra, ell o llurs descendents o afiliats de dret o de fet, sempre que aquests afiliats convisquin amb ell.

El propietari sols podrà fer ús d'aquest dret quant a terres a les quals pugui estendre's normalment la seva intervenció eficient, sense que mai, soles, o junt amb les que ja conreï pel seu compte, no puguin excedir de 30 hectàrees.

Aquesta facultat del propietari està condicionada:

Primer.- Al requisit de notificar-ho un any abans de la data en què fineixi l'any agrícola.

Segon.- A quedar compromès a conrear la terra directament, per un terme de sis anys, o pel del contracte prorrogat, si és de menor durada.

Si el propietari no compleix l'obligació establerta en el paràgraf anterior, el conreador podrà reivindicar el conreu de la terra de què fou privat, i retornar-hi en les mateixes condicions del contracte primitiu.

El conreador podrà reclamar al propietari, llevat el cas que aquest no hagi pogut complir el terme expressat en l'apartat segon d'aquest article per causa absolutament justificada, la indemnització dels danys i perjudicis que l'apartament de la terra li hagi ocasionat. En tot cas, la indemnització consistirà, almenys, en l'import del preu o quotapart que el darrer any va abonar al propietari.

Art. 17. El propietari no podrà fer ús de la facultat que li concedeix l'article anterior, quan es tracti de terres subjectes al dret d'adquisició, regulat en el cap. V d'aquesta Llei, fins que hagi transcorregut el terme de sis anys.

El propietari tampoc podrà exercitar aquest dret en els contractes a què fa referència l'art. 79.

Art. 18. Els efectes dels contractes de conreu, - subsisteixen durant el terme pactat, continuat o legalment prorrogat, encara que la propietat de la terra sigui tramesa a títol universal o singular, lucratiu o onerós, o que s'hi constitueixi un dret real.

Art. 19. El dret del conreador derivat dels contractes de conreu és susceptible de transmissió a títol universal o singular, onerós o lucratiu, i els seus adquirents quedan - subrogats activament i passivament en llur posició jurídica.

L'alienació d'aquest dret feta en acte entre vius a títol onerós, sempre, o a títol lucratiu que no sigui atorgada a favor dels descendents o ascendents o fills adoptius de dret o de fet del conreador, o dels descendents d'aquest que convisquin amb ell, sols podrà tenir efecte amb l'assentiment del propietari, amb aplicació del que disposa l'art. 79.

Els adquirents del dret, per causa de mort del conreador, podran donar per finit el contracte, avisant-ho al propietari, dins dels tres mesos següents a la mort del causant; però hauran de continuar el conreu fins a l'acabament de l'any agrícola en curs.

Art. 20. El dret del conreador, derivat d'un contracte de conreu, no pot ésser embargat.

Els fruits que li pertanyin sols podran ésser-ho en la manera que ho permeti la llei.

Art. 21. En endavant queden suprimits els subarrendaments i, en general, tot contracte de conreu que tingui per objecte el dret derivat d'un altre contracte d'igual naturalesa; però seran permesos els relatius a aprofitaments parcials dels productes obtinguts i que, per a millor benefici, exigeixin la intervenció d'altri.

Per excepció, el conreador, per malaltia, vellesa o impossibilitat física, els representants legals dels seus hereus menors d'edat, i la vídua que hagi adquirit del marit el dret de conreu, podran subarrendar. Aquests subarrendaments -sols subsistiran mentre concorrin les expressades circumstàncies en els respectius subarrendadors.

També s'exceptuaran de la prohibició els subarrendaments quan els arrendataris aportin a l'explotació de la finca arrendada el seu treball o una cinquena part del capital d'explotació.

Art. 22. L'incompliment, per un dels interessats, -d'obligacions contractuals o legals, del contracte de conreu, donarà dret a l'altre que hagi complert les que li corresponguin, a demanar la resolució del contracte.

Saran casos d'incompliment, per part del conreador, a més dels altres que puguin ocórrer, els següents:

- 1<sup>r</sup>. Destinar la terra al cultiu d'espècies diferents de les específicament pactades com objecte de conreu principal.
- 2<sup>n</sup>. Deixar de conrear la terra per abandó o per destinàr-la a ús distint del conreu.
- 3<sup>r</sup>. Malmetre o esgotar greument la terra, destruir les seves produccions o deteriorar les edificacions existents.
- 4<sup>t</sup>. Faltar greument a la consideració i respecte deguts al propietari o al seu representant.

Aquesta circumstància és d'aplicació reciproca a la conducta del propietari, o el seu representant, envers el conreador.

5<sup>e</sup>. Que provoqui conflictes repetidament als conreadors de la mateixa finca o als propietaris o conreadors de finques properes, pertorbant l'ús normal dels drets derivats de les servituds de pas, d'aigües o altres de semblants.

6<sup>e</sup>. La infidelitat en el càlcul de la quotapart que pertoca al propietari, en els contractes a parts.

7<sup>e</sup>. L'abús greu de confiança per part del masover en la comesa de les funcions que, junt amb les de conreu, són peculiars de la masoveria.

No s'entendrà com incompliment l'adopció, pel conreador, de noves fòrmules, procediments o elements que tendaixin a intensificar o millorar la producció agrícola, sense minva de la fertilitat natural de la terra.

8<sup>e</sup>. Subarrendar la terra, llevat del que disposa el paràgraf segon de l'article 21.

Art. 23. El propietari podrà donar per resolt el contracte de conreu que afecti parcel·les quant a la porció de terreny necessàris en què pretengui edificar o que hagi venut amb aquest objecte; però haurà de respectar l'any - agrícola en curs, i reduir proporcionalment el preu del contracte de conreu, cas d'ésser fix.

El propietari haurà de començar les obres dins els sis mesos següents a la data en què el conreador hagi deixat lliure el terreny expressat.

Si no ho fa, el conreador podrà reivindicar el conreu del terreny i reclamar al propietari o comprador l'import del preu o quotapart que, en la quantia proporcional al dit terreny, hagués abonat el darrer any, o aquella major indemnització - dels danys i perjudicis soferts.

Art. 24. El propietari sols podrà exercitar directament l'acció de desnonament quan el conreador deixi de pagar - el preu o de lliurar la quotapart de fruits.

Aquesta acció de desnonament s'exercitarà davant els - Jutges i Tribunals de la jurisdicció ordinària, segons els tràmits determinats per la Llei processal civil de la República.

El conreador podrà evitar el desnonament consignant judicialment el preu o la part de fruits, a disposició del propietari, dins el termini de deu dies, comptadors des del següent - al de la citació.

Si el propietari admet la consignació, quedarà complerta l'obligació del conreador i se sobresseirà el judici.

267

De les costes causades per l'actor, en serà responsable aquest, si es prova que en temps oportú se li havia ofert el pagament del preu o el lliurament de la quotapart; o el conreador, si queda provat que anteriorment havia estat requerit expressament pel propietari als dits efectes. En respondran - tots dos per meitat, quan cap d'aquestes circumstàncies no sigui provada.

Art. 25. La infracció, per part del propietari o del conreador, de les obligacions legals o contractuals, donarà - dret, a la part que les hagi complert, a demandar la resolució del contracte amb la indemnització dels danys i perjudicis soferts, o sols aquesta indemnització si es deixa el contracte - subsistent.

Encara que procedeixi la resolució del contracte de conreu instada pel propietari, la Comissió arbitral, o la Junta - de concòrdia i arbitratge si entén del cas plantejat, podran - discrecionalment, ateses les circumstàncies del fet, o les personals del conreador, substituir la resolució del contracte - per l'abonament dels danys i perjudicis causats al propietari, que haurà de fixar numèricament o condicionar la dita resolució a la conducta futura del conreador en el terme que estimi convenient.

Art. 26. El propietari podrà exercitar l'acció de - resolució en els casos expressats en els arts. 16 i 23 i la d'expiració de contracte en els casos a què fa referència l'art. 8.

Art. 27. Les accions de resolució o expiració del contracte hauran d'exercitar-se de conformitat al que és estatut en el cap. VII d'aquesta Llei.

La declaració de resolució o expiració dictada contra el conreador portarà com a conseqüència el seu llançament de la terra dins els termes fixats per la llei processal civil de la República; però se li permetrà el que sigui necessari per a recollir i aprofitar els fruits pendents.

### CAPÍTOL III

#### Millores

Art. 28. Extingit per qualsevulla causa el contracte de conreu amb les seves continuacions i pròrrogues, si s'escau, el conreador podrà reclamar al propietari l'abonament de les despeses necessàries i millores útils fetes per aquell en la terra, sempre que les hagués consentit expressament o tàcitament i que subsisteixin en deixar la finca.

Sols es presumirà el consentiment tàcit del propietari si es tracta de millores útils, quan les hagués realitzat el conreador amb la cura que hom posa en el millorament de cosa pròpia, dins dels límits de les possibilitats productives de la terra i, per tant, amb tota absència d'afany de lucre.

La prova de les millores realitzades corresindrà al conreador.

Art. 29. En endavant, per ésser abonables les millores útils, caldrà, que, abans d'efectuar-les, el conreador ho posi a coneixement del propietari.

A falta d'accord, si es tracta de contractes de conreu de termini pactat superior a dos anys, serà necessari, - perquè siguin abonables, que el conreador hagi acudit a la Comissió arbitral, o a la Junta de concòrdia i arbitratge, - si s'escau provant la conveniència de la millora a fer, i que aquestes, escoltant el propietari i amb els assessoraments - que estimin oportuns, i tenint en compte el temps que resti de duració del contracte, haguessin autoritzar el conreador per a realitzar-les.

Art. 30. Quan el propietari doni per finit el contracte o posi fi a les seves pròrrogues legals de conformitat amb els arts. 8 i 16, el conreador no podrà reclamar l'abonament de les despeses i millores realitzades durant els dotze darrers mesos de la vigència del contracte de conreu.

Art. 31. El propietari podrà abonar les millores - reintegrant l'import de les inversions o aportacions fetes pel conreador, o satisfent la quantitat representativa de l'increment produït en el valor de la terra, en la part subsistent - al moment de deixar-la el conreador.

Art. 32. Per excepció, si es tracta de reparacions extraordinàries, la necessitat de les quals hagués estat avisada al propietari oportunament, i que per no haver-les efectuades aquest, el conreador les hagués realitzat pel seu compte podrà reclamar la quantitat esmerçada.

El propietari podrà exigir que el conreador es reembossi del seu import resquitant-lo del preu o quotapart que ha d'abonar o lliurar.

Art. 33. La rompuda de terres, les explanacions, - plantacions, construccions i altres obres anàlogues efectuades pel conreador en compliment d'obligacions contractuals no hauran d'ésser abonades pel propietari, quan el contracte de conreu hagi subsistit durant el terme de vigència estipulat.

Malgrat això, si el contracte s'extingeix abans del - terme pactat, sense culpa del conreador, aquest podrà reclamar del propietari la part proporcional, no amortitzada, de l'import d'aquells treballs i obres, en relació al temps que falti transcorrer de la duració pactada.

Art. 34. No seran abonables en cap cas al conreador les despeses necessàries o millores útils, ni els treballs i obres a què fa referència l'article anterior, quan abandoni - injustificadament el conreu de la terra o quan provoqui intencionalment la resolució del contracte o el desnonament per falta de pagament, amb el propòsit de gaudir-se'n.

Art. 35. L'acció de millores haurà d'exercitar-la el conreador per pròpia iniciativa, o en defecte d'aquesta, per indicació de la Junta o de la Comissió arbitral, en el mateix judici en què es plantegi la resolució del contracte.

En cas d'expiració del contracte, el conreador podrà exercitar la dita acció un cop donat l'avís que regula aquesta Llei. El seu import se li farà efectiu en abandonar la terra si la resolució ja hagués estat dictada, amb anterioritat.

Art. 36. L'abonament de millores al conreador serà compensable amb les quantitats que aquest degui al propietari per danys o deteriorament de la terra de què en sigui responsable, o per preu no satisfet o quotapart no lliurada, sempre que hi concorrin els requisits exigits per a la compensació.

Art. 37. El conreador podrà retirar les millores - útils que puguin separar-se sense detriment de la terra.

#### CAPÍTOL IV

##### Revisions

Art. 38. Els contractes de conreu agrícola subsistents en ésser promulgada aquesta Llei, o que d'ara endavant s'atorquin, quan per si mateixos o pél canvi de circumstàncies no resultin equitatius quant als avantatges econòmics que se'n deriven per als interessats, podran ésser sotmesos a revisió, a instància del conreador o del propietari, amb sujecció a les

normes establertes en els següents articles, al sol efecte de la reducció o augment del preu o de la quotapart de fruits a percebre pel propietari, o de l'alteració de les prestacions o aportacions que, si s'escau, hagin de fer, respectivament, els contractants, sense destruir les obligacions fonamentals del contracte.

Art. 39. Les revisions establertes en l'article anterior que siguin instades pel conreador s'acomodaran a les normes següents:

Primera.- Si es tracta de contractes de conreu a preu fix, el seu import s'ajustarà a la diferència que resulti de deduir del valor de la producció integral de la terra respectiva, el cost de les despeses de l'explotació agrícola, després de practicar sobre aquella diferència les rectificacions procedents, de conformitat amb les regles següents:

a) La producció íntegra o rendiment brut de la terra amb referència al quinquenni anterior a la revisió, es valorarà en relació al preu mitjà que hagin tingut els productes respectius en la localitat o mercat més pròxim, durant l'express sat quinquenii.

b) Les despeses de l'explotació agrícola amb referència al quinquenni anterior, hi figuraran amb el cost efectivament satisfet. Els jornals del conreador o dels seus, i els productes de la mateixa terra esmerçats en el conreu, es valoraran de conformitat amb el que disposa la regla anterior. Figuraran també com a despeses les extraordinàries, periòdiques o no, o siguin plantacions, reparacions productives, millors i altres, que seran computades per anualitats d'amortització.

c) Constituirà el rendiment net la quantitat que resulti de deduir del valor de la producció integral l'import de les despeses de l'explotació agrícola.

Aquest rendiment es distribuirà entre el propietari i el conreador en la forma que la Comissió arbitral determini. No obstant, es prendrà com a normes de distribució que amb aquest objecte es faci en els contractes tipus, les quals hauran d'inspirar-se en el principi de què el percentatge de distribució del rendiment net es calculi amb un augment progressiu pel que toca a la proporció corresponent al conreador, a mesura que augmentin els beneficis de l'explotació.

d) La quantitat atribuïda a renda del capital-terra, s'incrementarà en l'import de les despeses expressades a la regla b, satisfet pel propietari, i els avantatges a què fa referència la norma 4<sup>a</sup> d'aquest article.

La quantitat que resulti d'aquestes operacions constituirà el preu legal del contracte de conreu a percebre pel propietari, racionalitzat de conformitat amb l'art. 40.

Segona.- Quan el preu fix es pagui en fruits, per a determinar la renda neta, aquests es valoraran en relació al preu mitjà que hagin obtingut en la localitat o mercat més pròxim durant el quinquenni anterior.

Tercera.- En els contractes de conreu a parts, la revisió s'efectuarà a base que les quotaparts dels fruits corresponents al conreador i al propietari s'ajustin proporcionalment a la participació en què cadascú concorri en les despeses de l'explotació agrícola, estimades en la següent forma:

- a) L'aportació del propietari pel capital-terra es - calcularà a ratí de l'interès del 4 per 100 anual del seu valor en venda, prescindint de l'increment estrany a la seva producció agrícola, provocat per la proximitat a nuclis urbanitzats o obres importants.
- b) Quan les plantacions que constitueixin l'objecte principal del contracte de conreu s'hagin realitzat pel conreador, pel propietari o conjuntament per ambdós, el capital-terra es valorarà prescindint de la plus valua que hi hagin - provocat. En aquest cas, s'imputaran com a aportació del conreador, del propietari, o d'ambdós proporcionalment, les anualitats d'amortització de les plantacions, calculades prudencialment segons el temps de productivitat de les espècies. En la mateixa forma s'estimaran les despeses necessàries i les millores útils reproductives.
- c) Es considerarà com a aportació a favor de l'interessat corresponent, la quantitat necessària per a l'entreteniment de les màquines, carros, estris i altres elements necessaris per a l'explotació agrícola, i també les anualitats corresponents per a l'amortització del seu cost.

- d) S'imputaran com a despeses de conreu a l'interés-sat que les aboni, les quantitats corresponents per contribucions, tributs i taxes anexes, arbitrís i altres imposicions fiscals que afectin la terra o el conreu.
- e) Figurarà com a aportació a favor de la part que les suporti, les quantitats que corresponguin per tota mena d'assegurances relacionades amb el conreu.
- f) El treball i les altres prestacions o aportacions per les necessitats del conreu, s'imputaran pel valor mitjà - que tinguin en la localitat els jornals, força animal utilitzada, llevors, adobs, anticriptogàmics i altres elements, en referència al quinquenni anterior.
- g) Figurarà, si s'escau, com a aportació del conreador l'interès, al 5 per 100 anual, de la quantitat que en concepte d'entrada hagués satisfet al propietari.

Quarta.- Tant en els contractes a preu fix com a parts es tindran en compte les prestacions i aportacions que facin - el conreador i el propietari, i especialment l'ús de dependències per habitació del conreador i dels seus, i la utilització per aquest d'horts, cellers i altres elements i accessoris de l'explotació agrícola, així com l'apropiació íntegra de fruits dels cultius que no constitueixin l'explotació principal de la terra i els altres avantatges i compensacions materials relacionats amb el contracte.

Cinquena.- En els contractes de conreu a parts en què resulti procedent la revisió instada pel conreador, es podrà acordar, simultàniament o separadament, la reducció de la quotapart de fruits a percebre pel propietari o la imposició a aquest de l'obligació d'efectuar noves aportacions o d'incrementar les pactades, combinant-ho, si cal, amb l'exoneració del tot o part de les que estaven a càrrec del conreador, amb una mutuació de prestacions entre ells.

En la revisió es procurarà estar a la voluntat de les parts oportunament manifestada; i, si fos precís, es sostindrà o augmentarà la quotapart contractual quan el volum de les aportacions o prestacions imposades al propietari ho exigeixi.

Sisena.- Als contractes de conreu a preu fix, la revisió dels quals hagi estat instada pel conreador i resulti procedent, s'aplicaran les normes expressades en el número anterior, adaptant-les convenientment; si bé serà aplicada amb preferència la reducció del preu, combinada, si cal, amb l'exoneració al propietari de prestacions o aportacions pactades, sempre que no siguin de caràcter tributari.

Setena.- El límit màxim de reducció de renda serà el 50 per 100 de la renda mitjana neta que pel contracte de conreu revisat hagi obtingut el propietari durant el quinquenni anterior. La revisió no podrà provocar, de primer antuvi, cap perjudici econòmic al conreador.

Vuitena.- Si el propietari, amb tot, s'adhereix a la revisió, aquesta s'entindrà entaulada en totes les seves conseqüències, i s'estendrà a la comprovació integral de l'equitat del contracte, sense limitar-se a apreciar les pretensions de millorament deduïdes pel conreador i fent aplicació de les regles d'aquest article.

En aquest cas, si procedeix un augment de renda, s'aplicaran les normes establertes en els apartats cinquè i sisè, adaptant-les als efectes de determinar l'augment, o sosteniment del preu o quotapart, o exoneració, imposició o mutuació de prestacions.

No regirà, per tant, en aquest cas, la limitació preceptuada en el paràgraf segon de la norma setena d'aquest article, per bé que l'augment de renda no podrà excedir del 50 per 100 de la renda mitjana neta que hagi percebut el propietari durant el quinquenni anterior.

Novena.- Aprovats que siguin els contractes tipus de conreu de la comarca respectiva, a què fa referència l'art. 46, les revisions s'acomodaran al tipus de contracte que més s'emmotlli amb el que sigui objecte de revisió i amb les modificacions que procedeixin.

Art. 40. Seran circumstàncies racionalitzadores d'apreciació discrecional en totes les revisions regulades en els articles anteriors, les següents:

a) En pro del propietari

Primerà.- La d'ésser menor d'edat, incapac, absent, dona soltera o vídua o institució benèfica o docent.

Segona.- La bona situació econòmica del conreador - en tot cas, i l'avantatjosa en relació a la del propietari de potencialitat econòmica migrada.

Tercera.- Què el propietari ocupant-se d'una manera especial de l'explotació agrícola de les terres, procuri el millorament de la seva producció amb qualificades orientacions tècniques o pràctiques o amb millores al seu càrrec.

b) En pro del conreador

Primerà.- La seva mala situació econòmica o qualsevulla circumstància personal o familiar que el faci mereixedor de consideració especial.

Segona.- La bona situació econòmica del propietari en tot cas, i l'avantatjosa en relació a la del conreador de potencialitat econòmica migrada.

Tercera.- La inhibició del propietari quant a la conservació i cultiu de la terra, i especialment en els contractes a llarg terme, i la falta de les aportacions necessàries per a la producció agrícola.

Quarta.- Quan, essent abusiu el contracte de conreu en dany del conreador, pugui considerar-se contracte o sostingut per aquest per la seva situació anguniosa, inexperiència o limitació de facultats mentals.

Art. 41. Les circumstàncies regulades en l'article anterior en pro del propietari o del conreador, es tindran en compte per a moderar l'augment o disminució que correspongui, respectivament, a la revisió, amb una reducció o incrementació discrecional, que com a màxim podrà ésser del 10 per 100 de l'augment o disminució que procedeixi, fora de les circumstàncies terceres en pro del propietari o del conreador, en els quals casos podrà ésser del 20 per 100.

Art. 42. Els conreadors que sistemàticament deixin de conrear la terra personalment o per mitjà de persones de llur família o convivència, no podran demanar revisió.

Art. 43. Quan un contracte de conreu hagués estat objecte de la revisió regulada en els articles anteriors, - instada pel conreador i resolta al seu favor, el propietari podrà sol·licitar que sigui novament sotmès a revisió, un cop hagin transcorregut cinc anys.

En aquest cas, s'estarà al que disposa l'art. 39, quan el propietari s'adhereix a la revisió, i seran també aplicables les disposicions consignades en els arts. 40 i 41.

Art. 44. El propietari podrà instar la revisió del contracte de conreu en qualsevol moment, des que quedi legalment prorrogat.

Malgrat això, si abans hagués ja estat objecte de revisió instada per ell o pel conreador, sols podrà demanar-la novament, al cap de cinc anys, qualsevol que hagi estat el seu resultat.

Aquesta revisió es farà d'acord amb el que preceptua el paràgraf segon de l'article anterior.

Art. 45. Les revisions estableertes en l'article 38 sols podrà iniciar-les el conreador i quan el contracte de conreu o les modificacions estipulades, tinguin cinc anys agrícoles d'efectivitat.

El conreador no podrà sol·licitar una nova revisió fins transcorreguts cinc anys agrícoles des de la primera, i així successivament.

Si el propietari hagués instat la revisió en qualsevol dels dos casos en què ho pot fer, segons els arts. 43 i 44, el conreador no podrà sol·licitar una nova revisió fins al cap de cinc anys.

Art. 46. Les Comissions arbitrals, amb l'assessorament dels serveis agronòmics de la Generalitat i els altres que creguin oportú reclamar, formularan acomodant-se a les normes expressades en l'art. 39, uns contractes tipus de conreu, per comarques, els quals serviran de pauta en les revisions, un cop aprovats pel Govern de la Generalitat.

Art. 47. Així mateix, les Comissions arbitrals estableiran els diversos procediments que segons els tipus de contractes de parceria existents calgui adoptar per anar a la substitució de la parceria per a l'arrendament a preu fix.

Art. 48. En els contractes de conreu a preu fix, el conreador podrà reclamar la revisió al sol efecte d'obtenir - una rebaixa proporcional del preu, quan per efecte d'accidents o calamitats extraordinàries hagués disminuït, en més de la tercera part, la productivitat habitual de la terra o s'hagués perdut més de la tercera part dels fruits mentre aquests no s'haguessin posat normalment en resguard.

No procedirà aquesta revisió quan el conreador hagués quedat cobert del dany esdevingut, per una assegurança contracuada per ell, ni tampoc quan els interessats ja tingueren en compte l'eventualitat dels dits accidents o calamitats en determinar el preu del contracte de conreu.

Art. 49. Les revisions de l'article anterior quedarán limitades a una rebaixa en el preu, proporcionada a la disminució de la producció habitual de la terra, o a la pèrdua de fruits soferta.

Es tindran en compte, per a compensar-ho, la collita o collites notablement abundoses dels cinc anys anteriors.

Art. 50. Quan durant un contracte de conreu a preu fix desaparegui una part de la terra, o quedí aquesta afectada d'expropiació forçosa per obres públiques, o resulti d'imposible conreu, o hagi de destinar-se a un altre cultiu de molt inferior rendiment al que s'efectuava al temps d'atorgar-se - el conreador podrà demanar la revisió, al sol efecte d'obtenir una reducció proporcional del preu, llevat que opti per la resolució del contracte, si és procedent, d'acord amb el que disposa l'art. 10.

La part de terra que quedí sense conrear una vegada efectuada la revisió, s'entendrà exclosa del contracte.

Art. 51. Quan durant un contracte de conreu a preu fix, el propietari faci en la finca reparacions necessàries, de caràcter urgent, que provoquin una disminució apreciable en la producció de la terra, el conreador podrà demanar la revisió del contracte, al sol efecte d'obtenir una reducció del preu, proporcionada a la disminució de fruita soferta a conseqüència de les dites reparacions, llevat que opti, si és procedent, per la resolució del contracte, d'acord amb el que disposa l'art. 10.

Art. 52. Les revisions regulades en els arts. 48, 50 i 51 sols podran instar-se dins els sis mesos següents a la data en la qual acabin totalment de produir-se els fets que provoquin la revisió.

Art. 53. Els efectes dels acords oficials de revisió s'aplicaran sola a l'any agrícola en curs en ésser iniciada, i als successius mentre no quedin afectes a noves revisions. Però, si es tracta de revisions d'acord amb el que disposen - els arts. 48, 50 i 51, quan la disminució de fruits afecti la collita d'un o més anys determinats, la reducció, si procedeix, es limitarà a aquests.

En tot cas, quan, per aplicació del que disposa el paràgraf anterior, un dels interessats hagi percebut un excés - de valor del que li correspongui, quedará obligat a retornar-lo a l'altre.

Art. 54. La sol·licitud de revisió no dispensa a cap dels interessats del compliment de les obligacions del contracte de conreu.

El conreador que instí la revisió haurà de provar necessàriament, si el propietari ho reclama, que està al corrent del pagament del preu o lliurament de la quotapart de fruits a què ve obligat.

Art. 55. El dret de revisió en els diferents casos - regulats en aquest capítol, correspondrà a l'arrendatari o al subarrendatari, independentment.

Si no l'insten junts, la revisió demandada per un, haurà de notificar-se a l'altre, perquè pugui comparèixer en el procediment.

La revisió obtinguda per qualsevol d'ells, afectarà a l'altre.

## CAPITOL V

### Dret d'adquisició

#### Secció primera

##### Dret d'adquisició en general

Art. 56. La Llei atribueix al conreador de terres, a títol de contracte agrícola, el dret d'adquisició del seu domini, mitjançant l'abonament del seu valor en venda al propietari, i el compliment dels preceptes d'aquesta secció.

Art. 57. Aquest dret d'adquisició és àffladament - irrenunciable i inalienable. No és susceptible de gravamen ni d'embargament. No pot ésser exercit per creditors, en virtut d'accio subrogatòria.

Art. 58. Aquest dret no requereix la seva inscripció en el Registre de la Propietat per a la seva efectivitat.

Art. 59. Per a l'exercici del dret d'adquisició, - és necessària la concorrència conjunta dels requisits següents:

Primer.- Que es tracti de terra conreada, en virtut de contracte exclusivament d'explotació agrícola vigent el I<sup>r</sup>. de gener del 1932, i que subsisteixi al moment d'exercitarse el dret d'adquisició.

Segon.- Que els dits contractes s'hagin mantingut per un període de més de vint anys, ja sigui per haver-se pactat una duració més gran, com per derivar-se així de la vida normal de l'espècie a conrear, o per haver estat tacitament continuats, durant un període de més de vint anys, contractes de menor durada.

Tercer.- Que el conreador, en virtut de les terres que pretengui adquirir per mitjà del dret d'adquisició, per si soles, o unides amb les que ja eren de la seva propietat el dia I<sup>r</sup>. de gener del 1932, pugui arribar a formar un patrimoni de conreu, no superior en valor en venda a 40,000 ptes.

Aquest dret d'adquisició no podrà exercitar-se respecte a terres el valor de les quals sigui inferior a 2,500 ptes.

Quart.- Que els contractes o les renovacions no s'hagin atorgat o consentit pels representants legals del propietari menor d'edat, incapç o absent, o pel marit, si es tracta de terra aportada en dot inestimat o parafernals administrats per ell.

Cinquè.- Que el conreador estigui al corrent de pagament del preu o lliurament de fruits a què vingui obligat, segons el contracte, en el moment d'exercitar el dret d'adquisició.

Art. 60. El dret d'adquisició s'estén a les edificacions i millores dominicals que hi hagi en la terra adquirible, sempre que, segons el contracte de conreu, correspongui íntegrament el seu ús al conreador i que hi concorrials altres requisits exigits per aquesta Llei.

Art. 61. Les terres adquirides pel conreador i les que restin al propietari hauran de suportar reciprocament les servituds de pas, d'aigües i, en general, les establecetes i a establir pel bon regiment d'unes i altres.

Art. 62. Correspon el dret d'adquisició al conreador que fou part en el contracte i als seus dret-havents a títol universal o singular, lucratiu o onerós, sempre que continui el conreu de les terres amb el mateix caràcter que aquell.

Art. 63. El propietari pot apartar del dret d'adquisició, terres susceptibles d'ésser adquirides fins al límit màxim de la meitat del valor de totes elles, i sempre fins un valor de 40,000 ptes., encara que la dita meitat fos inferior a aquesta quantitat.

Art. 64. El dret d'adquisició pot ésser exercit no sols contra el propietari contractant, sinó també contra els seus dret-havents que ho siguin per títol universal o singular, lucratiu o onerós.

Quan per l'exercici d'accions hipotecàries o altres reals o personals es provoqui la realització de terres objecte de contractes regulats en aquest títol, sense fer cas del respectiu ordre de prelació, quedarà l'adquirent subrogat en la mateixa situació que l'anterior propietari, pel que es refereix al dret d'adquisició.

Art. 65. Ateses les situacions jurídiques en què es trobi la propietat de les terres afectes al dret d'adquisició en el moment d'exercitar-se, regiran les normes següents:

Primera.- Quan estigui sotmesa a cens o establiment, el conreador, en adquirir-la, quedarà subrogat en la situació jurídica de l'anterior titular, i no es requerirà l'aprovació del censalista, ni procedirà percepció de lluïsme, ni fadiga o retracte.

La responsabilitat de l'adquirent per la dita subrogació quedarà limitada a la quantitat que resulti de capitalitzar la pensió al 3 per 100, més les pensions endarrerides en adquirir, fins al màxim representat pel valor en venda de la terra en el moment de l'adquisició.

Segona.- Si està en situació de copropietat, el dret d'adquisició haurà d'exercitar-se conjuntament respecte a totes les participacions indivises.

Tercera.- Si la propietat de les terres estigués afecte a hipoteques, servituds o altres càrregues reals, el conreador que adquiereixi quedarà subrogat en la responsabilitat real que se'n derivi, fins a la quantitat màxima representada pel seu valor en venda en el moment de l'adquisició.

Quarta.- Si la propietat està sotmesa a un usufruct o es troba afectada a substitució fideicomissària pura o condicional, a reserva o a altres condicions resolutòries, el conreador adquirirà el domini lliure de l'usufruct, fideicomis, reserva o condició, i el valor en venda quedarà esmerçat en valors públics de la Generalitat, dipositats en establiment bancari oficial, o en un Banc o banquer inscrit en la Comissaria de la Banca privada, i afectat a la situació jurídica usufructuària, fideicomissària, de reserva o condicional.

Cinquena.- En els béns venuts a carta de gràcia o empenyorament, l'import de la indemnització s'aplicarà primàriament a satisfer al propietari el preu de la carta de gràcia, i el sobrant, si n'hi ha, al titular del dret de lluir o quitar, el qual dret quedarà extingit.

Sisena.- No procedirà el retracte legal de confinants, respecte les adquisicions del conreador, en virtut del dret regulat en aquest capítol.

Art. 66. Per exercitar el dret d'adquisició, es requereix capacitat per a contractar. Pels que no en gaudeixen, actuaran llurs representants legals.

El tutor necessitarà l'autorització corresponent.

La dona casada no necessitarà llicència marital ni - habilitació judicial.

Art. 67. No podrà exercitar-se el dret d'adquisició mentre el dret derivat del contracte de conreu es trobi en situació d'usdefruit.

En els casos de subarrendament no prohibits per aquesta Llei, el dret d'adquisició sols correspon al primer arrendatari.

Art. 68. Quan les alienacions d'immobles siguin conseqüència del dret d'adquisició i el propietari no tingui la capacitat deguda, s'observaran les regles següents:

Si l'alienació es realitza en virtut de conveni, o del que es preveu en l'extrem 8<sup>è</sup>. de l'art. 70, es compliran els requisits que exigeixi la llei per a la dita classe d'alienacions, exclusió feta de la subhasta en els casos de tutela.

Si l'alienació es fa com a resultat del laude o sentència judicial dictats en els procediments que regula aquesta Llei, sols serà necessari que s'adoptin les garanties que es creguin convenientes per a la inversió del preu de la venda.

La dona casada no necessitarà llicència marital ni habilitació judicial.

Si el propietari és menor d'edat, incapacitat o absent, i per qualsevol causa no tingués representant legal, el jutge del seu domicili li nomenarà un defensor.

Art. 69. A falta d'acord entre les parts, la determinació del preu s'efectuarà de conformitat amb les regles següents:

Primera.- Consistirà en el valor en venda de la terra objecte de l'adquisició, atès al preu corrent que en la mateixa localitat, i amb referència als cinc anys anteriors a la valoració, s'hagués pagat en compra-vendes de terres - de circumstàncies anàlogues, amb les deduccions que en aquest article es determinen.

Segona.- Se'n deduirà l'import de les despeses necessàries i millores útils fetes pel conreador amb l'assentiment express o tacít del propietari i atès l'increment de valor provocat per elles en la terra, en la part subsistent en el moment en què s'efectuï la valoració.

Tercera.- També es deduirà el valor de les càrregues que gravin les terres.

L'import líquid del preu s'abonarà en diners, pagat - al comptat o en els lliuraments parcials que el propietari - accepti.

Art. 70. A falta d'acord entre les parts, el dret d'adquisició haurà d'exercitarse en la forma següent:

Primer.- Tot conreador que pretengui fer ús del dret d'adquisició, haurà de requerir notarialment el propietari - de la terra sobre la qual tracti d'exercitar-la, perquè dintre del termini establert en el número següent comparegui - davant del propi Notari a manifestar si s'avé o no a alienar-la.

En el requeriment s'especificarà la terra sobre la - qual el conreador pretengui el dret d'adquisició i el valor en venda que li atribueixi.

Segon.-- Serà competent qualsevol Notari amb residència dintre del partit judicial on radiqui la terra, el qual, dintre els tres dies hàbils, haurà de notificar-ho als interessats, assenyalant dia i hora per a la compareixença, dintre d'un termini no menor de deu dies hàbils ni major de vint, a comptar des del dia següent. El Notari podrà fer les notificacions que siguin fora del lloc on radiqui, per mitjà de carta certificada amb nota d'haver-la rebut, tramesa per - l'Oficina de Correus.

Tercer.- Si no compareix el propietari al primer requeriment, se n'hi farà un altre dins d'un termini igual a l'abans establert.

Quart.- El propietari podrà comparèixer per mandatari, el mandat del qual consti en escriptura pública o en carta, amb firma legitimada notarialment.

Cinquè.- La incompareixença del propietari a siques ta segona citació, donarà dret al conreador per procedir - per la via judicial pels tràmits dels incidents.

Sisè.- Si el conreador no compareix, sense causa jus tificada, s'entendrà que ha desistit, quedarà caducat el seu dret d'adquisició i seran del seu càrrec les despeses causades.

Setè.- Quan compareguin ambdós interessats i no hi hagi acord, el Notari aixecarà acta de la compareixença i donarà fe de les manifestacions del conreador i del propietari, les quals constituiran els extrems que haurà de resoldre l'amigable composició.

Vuitè.- Cas que el propietari s'avingui a la petició del requerent, o ambdós interessats arribin, davant del Notari, a un acord definitiu, aquesta conformitat serà la que donarà lloc a l'atorgament de l'escriptura d'adquisició. Aquesta escriptura s'atorgarà el dia que convinguin les parts; i a falta d'acord, el que determini el Notari dintre els vuit dies següents.

Novè.- Si els interessats no arriben a un acord, - hauran de nomenar en aquell mateix acte un amigable componedor cadascú i el seu substitut, i de comú acord un tercer. Si no hi ha acord respecte aquest tercer, ho serà el Jutge de primera instància d'on radiqui la terra.

El Jutge nomenarà l'amigable componedor que deixi de designar qualsevulla de les parts.

Desè.- Els amigables componedors hauran de dictar el laude davant del Notari corresponent, dintre el termini màxim de trenta dies hàbils, prorrogables per altres - quinze, a comptar des del següent al que acceptin la seva comesa.

Onzè.- L'amigable composició serà forçosa per amb-dues parts, llevat que en la compareixença notarial la rebutgin de comú acord, en el qual cas l'exercici del dret d'adquisició se substanciarà davant la jurisdicció ordinària - pels tràmits dels incidents.

Dotzè.- El Notari que hagi intervenint en el primer requeriment serà el competent per altres actes de l'amigable composició, àdhuc per a l'autorització de l'escriptura - d'adquisició.

Tretzè.- Els honoraris del Notari per l'autorització de tots els documents i diligències d'aquest procediment queden fixats en el 50 per 100 dels que li correspondría - percebre segons l'aranzel, sense que puguin excedir, en conjunt, de 80 ptes.

Els honoraris per l'autorització de l'escriptura no podran excedir tampoc del 50 per 100.

Els amigables componedors només tindran dret a percebre les despeses pels viatges que ocasioni l'amigable composició, i una remuneració pel seu treball, a cadascú, que no - podrà excedir de 75 pessetes, si la quantitat a satisfer per a l'adquisició no és superior a 15,000 pessetes, i de 150 ptes. si és superior.

Catorzè.- Per a iniciar l'exercici del dret d'adquisició serà requisit indispensable que el conreador justifiqui haver dipositat a una Caixa d'estalvis, o en Banca inscrita en la Comissaria de la Banca privada, o en poder del Notari, si aquest ho admet, o del Jutge, si s'escau, el 10 per 100 del valor que atribueixi a les terres que tracti d'adquirir.

Quinzè.- Si el valor atribuït pel conreador a les terres que tracti d'adquirir és inferior en més de la meitat al que determini el laude, el conreador haurà de satisfer la totalitat de les despeses originades en l'amigable composició.

Art. 71. L'adquisició es formalitzarà sempre en escriptura pública.

Si havent recaigut sentència o laude favorable al conreador, i en el període d'execució el propietari no atorgués la corresponent escriptura dintre d'un termini de cinc dies, el Jutge l'atorgarà d'ofici en nom del rebel.

Art. 72. Contra els laudes dels amigables compondereis o les sentències dels Jutges de primera instància, sols hi cabrà el recurs d'apel·lació davant el Tribunal de Cassació de Catalunya, contra la sentència del qual no es donarà cap altre recurs.

## S e c c i ó s e g o n a

### Dret d'adquisició aplicat a terres subjectes a contractes de caràcter emfiteutic - temporal

Art. 73. En els contractes que, ultra els requisits expressats en l'art. 59, tinguin caràcter emfiteutic temporal, com els de rabassa morta i altres d'igual condició jurídica, encara que no tinguin per objecte el cultiu de la vinya, en virtut dels quals el propietari d'un terreny el cedeix temporalment a una persona per a l'explotació agrícola, quedant aquesta obligada a rompre'l, i plantar-lo o sembrar-lo, a expenses seves, abonant al propietari un cens o preu anual, el dret d'adquisició s'exercitarà, de conformitat al que disposa la secció primera d'aquest capítol amb les modificacions següents:

Primera.- El propietari no podrà fer ús de la facultat d'apartar les terres del dret d'adquisició que li atribaix l'art. 63.

Segona.- La quantitat a abonar serà el 80 per 100 del preu líquid que resulti, segons l'art. 69.

Tercera.- Aquesta quantitat podrà ésser satisfeta per l'adquirent en quinze anualitats iguals. En aquest cas haurà de pagar interessos de les anualitats pendents a rat del 4 per 100 anual.

Art. 74. En l'escritura d'adquisició haurà de constar expressament, quan el preu quedi pendent, que l'alienant podrà exercitar l'acció resolutòria per falta de pagament de qualsevol dels termes concedits, un cop transcorreguts seixanta dies naturals des del requeriment notarial de pagament.

## CAPÍTOL VI

### Drets de tanteig, retracte i rescat

Art. 75. En les alienacions de terres subjectes a contractes de conreu que reuneixin la naturalesa i circumstàncies expressades en l'art. 73, el conreador tindrà el dret de prelació i el de retracte de la terra objecte de l'alienació, excepte en els casos següents:

Primer.- Quan l'alienació sigui feta a favor del propietari d'una part indivisa.

Segon.- En cas d'alienació a favor d'un parent consanguini fins al segon grau o d'un fill adoptiu de dret o de fet del propietari, o dels descendents d'aquest, sempre que l'adoptat visqui en companyia de l'adoptant.

Tercer.- Quan la terra hagi estat aportada en dot inestimat.

Quart.- Quan l'alienació no ha estat feta a títol onerosos.

Cinquè.- En les permutes o en les retrovendes, o en les transaccions quan no intervé dineri, o intervenint n'hi el que es lliura no equival al just preu de la cosa, o en les alienacions en les quals no sigui possible una subrogació exacta del conreador en les condicions substancials pactades en el contracte d'alienació.

Sisè.- En els casos d'expropiació forçosa per causa d'utilitat pública.

Art. 76.- Aquest retracte prevaldrà a tots els altres retractes legals.

Art. 77. Quan es tracti d'alienacions afectes al dret expressat en l'art. 75, si el propietari notifica al conreador la seva decisió d'alienar, i li expressa el preu definitiu ofert o el que pretengui, aquest, dins del termini de trenta dies següents al de l'avís, podrà fer ús del dret de tanteig, pagant o consignant el preu.

Art. 78. Si el propietari no donés l'avís preceptuat en l'article anterior, o atorgués alienació a favor de tercer abans dels trenta dies, o després de finit aquest termini alienés per preu o condicions substancials diferents de les comunicades al conreador, aquest podrà exercitar el retracte, dins els trenta dies naturals següents a l'assentament d'inscripció de l'alienació en el Registre de la Propietat, o des que hagi tingut coneixement de la venda.

Art. 79. En les alienacions del dret derivat de tot contracte de conreu, quan segons el que disposa l'art. 19 — sigui precis l'assentiment del propietari per a efectuar-les, aquest podrà rescatar el dret objecte d'alienació, adquirint-lo del conreador, dins els trenta dies naturals següents d'aquell en què hagi rebut la notificació.

El propietari podrà usar del dret de rescata, pagant o consignant el preu.

Si el conreador atorgués l'alienació sense la previa notificació deguda, o en condicions diferents de les anuncades, serà nul·la, i el propietari podrà demanar la resolució del contracte de conreu.

Art. 80. Realitzat el dret d'adquisició per part del conreador, el propietari tindrà el dret de retracte legal durant els dos anys següents en totes les alienacions que no siguin — de les exceptuades en l'art. 75.

Art. 81. Les accions derivades dels drets regulats en aquest article hauran d'exercitar-se davant la jurisdicció ordinària i pels tràmits dels incidents.

## CAPITOL VII

### Concòrdia i arbitratge

#### Secció primera

##### Juntes de concòrdia i arbitratge

Art. 82. L'estament conreador i l'estament propietari podran acordar la creació d'un organisme permanent d'arbitratge que, sota la denominació de Junta de concòrdia i arbitratge — agrícola, resolgui les qüestions que se suscitin entre conreadors i propietaris amb motiu dels contractes de conreu.

Per a la constitució d'aquest organisme serà necessari que hi concorrin, almenys, deu conreadors i deu propietaris.

Art. 83. Aquest organisme podrà entendre:

- a) De les revisions regulades en el cap. IV.
- b) De les resolucions i expiració de contractes de conreu a què es refereix el cap. II.
- c) De les qüestions referents a les pròrrogues legals establertes en el cap. II.
- d) De l'abonament de millores al conreador i de l'autorització establerta en l'art. 29.
- e) De les altres qüestions que la Llei li atribueixi.

Art. 84. També actuaran com a organismes de conciliació i concòrdia quan els interessats s'hi sotmetin voluntàriament, per a la resolució d'altres qüestions derivades del contracte de conreu.

Art. 85. La constitució d'aquesta Junta i la submissió dels interessats i les seves resolucions hauran de consignar-se en escriptura pública, en la qual constarà:

Primer.- La composició i funcionament de la Junta.

Segon.- Lloc de la seva residència i terres a què s'estengui la seva comesa.

Tercer.- Règim econòmic de l'organisme.

Quart.- Qüestions atribuïdes al seu coneixement,  
que podran ésser de les expressades en els arts. 83 i 84.

Cinquè.- Normes de procediment.

Sisè.- Sancions que pot imposar la Junta, amb determinació dels casos.

Setè.- Acord exprés de submissió dels atorgants a l'actuació i laudes de la Junta.

Vuitè.- Duració del pacte, que no podrà excedir de cinc anys, i regulació de les pròrrogues, quan es pactin.

Novè.- Els altres extrems que estimin oportuns els interessats.

Art. 86. El President de la Junta haurà de presentar còpia autèntica de l'escriptura al Govern de la Generalitat. El Govern l'aprovarà o desaprovarà:

Si l'aprova, la Junta de concòrdia i arbitratge quedarà investida de jurisdicció dins de la seva competència.

Si no l'aprova, indicarà les modificacions que han d'introduir-s'hi. Modificada convenientment l'escriptura, haurà de presentar-se al Govern, per a la seva aprovació.

Art. 87. Les Junes de concòrdia i arbitratge reconegudes pel Govern quedaran sota la seva protecció i inspecció.

El Govern, per causes motivades, i donant-ne compte al Parlament, les podrà suspendre i dissoldre.

Art. 88. Els propietaris i conreadors que no hagin concorregut a l'atorgament de l'escriptura, s'hi podran adherir mitjançant escriptura pública, unilateralment atorgada, en la qual sols s'haurà de fer breu referència a la de constitució.

El Notari que l'autoritzi comunicarà l'adhesió per mitjà d'ofici a la Junta, i estendrà nota d'aquesta comunicació en l'escriptura matriu.

L'adherit es considerarà incorporat a l'arbitratge des d'aquest moment.

Art. 89. L'acord d'expulsió dels sotmesos o adherits haurà d'ésser pres pels vots de la meitat més un dels membres de la Junta.

Art. 90. Els honoraris dels Notaris, en aquestes actuacions i autoritzacions, no podran excedir del 50 per 100 dels fixats a l'Arancel. Tampoc no podran excedir de la meitat del tipus aranzelari corresponent a les actes, els que acreditin per l'autorització de les adhesions.

Art. 91. Els laudes que dictin les Junes de concòrdia i arbitratge podran ésser apel.lats davant el Tribunal de Cassació de Catalunya, contra la decisió del qual no hi cabrà cap altre recurs. En aquest cas regiran els arts. 112 i 113 d'aquesta Llei.

Art. 92. L'execució dels laudes, un cop ferms, o de les resolucions definitives del Tribunal de Cassació, - corresponderà al Jutge de primera instància del lloc de la Junta, i es procedirà, a petició de part, en la forma estableta en la Llei processal civil de la República, per a l'execució de sentències.

#### Secció segona

##### Comissions arbitrals

Art. 93. S'organitzarà en les localitats que determini el Govern de la Generalitat, una Comissió arbitral agrícola, la qual, en arbitratge forçós, coneixerà privativament de totes les qüestions a què fa referència l'art. 83 d'aquesta Llei, sens perjudici de la competència de les Junes de concòrdia i arbitratge que regula la secció primera d'aquest capítol, respecte als que s'hi hagin sotmès.

També podran actuar com a organismes de conciliació i concòrdia segons el que és estatutí en l'art. 84.

Art. 94. La seu i jurisdicció territorial de cada Comissió arbitral seran les que determini el Decret de la seva creació, i la jurisdicció es podrà estendre al territori d'un o més partits judicials limítrofs.

Art. 95. Les Comissions arbitrals agrícoles es componaran d'un President, quatre Vocals i quatre Suplents. Actuarà de Secretari, a falta de designació especial, el que ho sigui del Jutjat de primera instància.

Art. 96. La Generalitat de Catalunya constituirà un Cos de funcionaris lletrats nomenats per oposició o concurs, entre els quals seran elegits els Presidents de les Comissions arbitrals agrícoles, mentre el Cos de lletrats no pugui entrar en funcions. Actuarà de President el Jutge de primera instància del cap del partit on radiqui la Comissió arbitral.

Art. 97. En el Decret de la Generalitat que ordenarà la constitució d'una Comissió arbitral agrícola s'obrirà un període de quinze dies, durant el qual els propietaris i els conreadors podran inscriure's en els Ajuntaments respectius per a la formació dels censos dels dos estaments de la jurisdicció territorial.

Art. 98. Aprovats els censos de cada un dels dos estaments en la forma que determinarà el Reglament, la Generalitat convocarà eleccions entre els inscrits per al nomenament dels Vocals i Suplents de la Comissió, la meitat per cada un dels dos estaments. Seran elegibles els que reuneixin les circumstàncies d'idoneïtat següents:

Primerà.- Saber llegir i escriure.

Segona.- Tenir plena capacitat civil.

Tercera.- Residir en el territori jurisdiccional respectiu en ésser designat, i durant els quatre anys anteriors.

Quarta.- No haver estat condemnat per delicto comú.

Art. 99. El càrrec de Membre de la Comissió arbitral agrícola és obligatori i no durarà més de dos anys.

Només podran excusar-se'n els designats per justa causa, apreciada pel President de la Comissió.

El Membre que degudament convocat no acudi a exercir les seves funcions, sense causa justificada, podrà ésser sancionat pel President amb una multa de 10 a 50 ptes.

Art. 100. El càrrec de Membre de la Comissió és - gratuit. Però els conreadors tindran dret que se'ls abonin - les despeses de viatge i estada, si s'escau, i els jornals que deixin de percebre.

Art. 101. El Govern de la Generalitat podrà acordar la suspensió o la supressió d'una o més de les Comissions arbitrals, per causa que estimi justificada, donant-ne compte al Parlament.

Art. 102. La competència de les Comissions arbitrals en el coneixement de les qüestions en què entenen – segons aquesta Llei, es determinarà exclusivament, per la situació de les terres objecte del contracte de conreu, – salvada la submissió expressament pactada.

La incompetència de la Comissió haurà de declarar-la d'ofici el President, quan procedeixi.

Si no ho fa, i és estimada definitivament la incompetència pel Tribunal de Cassació en resoldre l'apel.lació, se li podran imposar les costes.

Art. 103. Per a prendre acord es requerirà la presència del President i un dels Membres, almenys, dels designats per cada estament.

Els acords es prendran per majoria. El President tindrà vot de qualitat en els empats.

Art. 104. La Comissió arbitral podrà reclamar als serveis agrònoms de la Generalitat o a altres persones o entitats els assessoraments que cregui oportuns.

Art. 105. Les Comissions arbitrals en qualsevol moment de la tramitació podran incitar als interessats a l'avinença.

També procuraran indicar-los qualsevulla falta o omission soferta en el plantejament i defensa de les qüestions, per tal que puguin subsanar-les.

Art. 106. Les parts, en qualsevol moment de la tramitació, podran demanar al President, de comú acord, que resolgui per si sol la qüestió plantejada, prescindint de la intervenció dels Membres de la Comissió.

Art. 107. El propietari que utilitzi el dret que li concedeix el paràgraf 2<sup>n</sup>. de l'art. 54, perquè el conreador justifiqui que està al corrent de pagament, haurà d'allegar-ho en contestar la demanda. En aquest cas, el President concedirà al conreador un termini de cinc a deu dies perquè aporti els justificants corresponents.

Art. 108. Les Comissions arbitrals podran acordar, d'ofici, la pràctica de totes aquelles proves que estimin necessàries pel perfecte esclariment de les qüestions plantejades i, especialment, la d'inspecció ocular.

Art. 109. Un cop acabat el judici arbitral, la Comissió dictarà laude dintre els tres dies següents, en el qual haurà de resoldre totes les qüestions plantejades.

Art. 110. Contra els laudes de les Comissions arbitrals hi cabrà apel.lació davant el Tribunal de Cassació de Catalunya, sense cap altre recurs.

Art. 111. El recurs d'apel.lació haurà d'interposar-se davant del President de la Comissió, dintre els deu dies següents al de la notificació del laude, expressant, en forma concreta, les al.legacions que s'estimin procedents.

D'aquest escrit es donarà vista a la part apel.lada, la qual podrà rebatre'l dins el termini de deu dies.

Transcorregut aquest termini s'elevaran els autes - al Tribunal de Cassació de Catalunya.

Art. 112. La Sala corresponent del Tribunal de Cassació podrà obrir un període perquè les parts puguin practicar les proves que siguin procedents, i acordar, si ho estima necessari, la celebració d'una compareixença.

Art. 113. Després d'aquests tràmits, o sense ells si no els creu necessaris, la Sala dictarà la resolució definitiva.

Art. 114. L'execució dels laudes dictats per les Comissions arbitrals agrícoles, un cop ferms, o de les resolucions definitives del Tribunal de Cassació, correspondrà - al Jutge de primera instància en lloc de la Comissió, i es procedirà, a petició de part, en la forma estableguda per a les execucions de la sentència.

Art. 115. Mentre no es constitueixi i funcioni en qualsevol comarca una Comissió arbitral agrícola, el Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya podrà disposar que - entengui en les qüestions de què és competent la Comissió, el Jutge de primera instància del partit judicial corresponent.

En aquests casos, el Jutge assumirà íntegrament, i en la forma regulada en els articles anteriors, les funcions que la present Llei atribueix a les Comissions arbitrals.

Art. 116. Per a formular els contractes tipus de conreu comarcal segons allò que estatueix l'article 46 d'aquesta Llei, les Comissions arbitrals agrícoles es constituiran juntament amb els Vocals suplents, i funcionaran assistides dels elements de caràcter tècnic que el Govern de la Generalitat cregui oportú designar.

#### DISPOSICIONS TRANSITORIES

Primera.- La pròrroga estableguda en l'art II d'aquesta Llei, té aplicació retroactiva respecte als contractes expressats en aquell article, encara que al I<sup>r</sup>, de gener del 1932 o al temps de promulgar-se aquesta Llei, es trobin subsistents per expressa o tàcita reconducció, o hagués expirat el termini pactat durant el temps comprès entre les dites dues dates.

En aquests casos, la manifestació del conreador que opti per la pròrroga que estableix l'art. 12, haurà de fer-se dins dels sis mesos següents a la data de promulgar-se aquesta Llei.

Quan en promulgar-se aquesta Llei, no excedís d'un any el temps que manqui per a finir el termini pactat de duració del contracte, el conreador haurà de fer la manifestació establerta en l'art. 12, dins dels sis mesos següents a la data de la promulgació dita.

Segona.- La Generalitat de Catalunya organitzarà o facilitarà la creació d'Institucions de Crèdit agrícola a l'efecte d'anticipar als conreadors, econòmicament necessitats, les quantitats precises per a l'efectivitat del dret d'adquisició.

També procurarà que es dictin les disposicions oportunas per a obtenir l'exemció de l'impost de Drets reals i de l'impost del Timbre, i una reducció en els honoraris dels Registradors de la Propietat en les adquisicions derivades de l'exercici del dret d'adquisició.

#### DISPOSICIONS FINALS

Primera.- Els beneficis establerts per aquesta Llei a favor del conreador no són anticipadament renunciables.

Segona.- Resten sense aplicació a Catalunya les disposicions emanades de l'Estat espanyol en el que s'oposin al que preceptua aquesta Llei, i derogades les pròpies Lleis de Catalunya en el que també s'hi oposin.

Tercera.- Un Reglament desenrotllarà els preceptes d'aquesta Llei.

Quarta.- Aquesta Llei regirà des del dia següent al de la seva publicació al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

Barcelona, 20 d'abril del 1933.

El Conseller Delegat,

CARLES PI I SUNYER

El Conseller de Justícia i Dret,

PERE COROMINES

27.0

DICTAMEN EMES PEL TRIBUNAL DE CASSACIÓ

DE CATALUNYA

Honorble senyor:

Els Magistrats que avui formen el Tribunal de la meva Presidència s'han reunit amb mi, per tal d'emetre informe respecte de la qüestió de competència plantejada pel Govern de la República, en escrit que porta la data del 4 del corrent, complimentant així el que la V. II. va interessar, previ acord pres a l'efecte pel Consell Executiu de la Generalitat.

Estudiats amb tota cura l'escrit on s'entaula la competència legislativa del dia i els informes accompanyats, respectivament - emesos pel Consell d'Estat i la Sala de Govern del Tribunal Suprem, - el 4 de maig corrent -la mateixa data que porta l'escrit del Govern de la República- tenim l'honor d'informar com segueix:

Abans d'entrar en el fons de la qüestió, o sigui del que és matèria de la competència legislativa, vist que la Llei atacada -la de Contractes de Conreu, aprovada pel Parlament de Catalunya- la va publicar el Butlletí Oficial de la Generalitat el dia 12 d'abril darrer, i que la qüestió de competència l'entaula el Govern de la República en escrit del 4 de maig següent, hem de fer la declaració prèvia que entenem que la dita qüestió ha estat proposada fora de termini, extemporàniament.

En el títol V de la Llei relativa al Tribunal de Garanties Constitucionals, del 14 de juny del 1933, que s'ocupa "De los conflictos entre el Estado y las Regiones autónomas y de éstas entre sí" hi ha el capítol primer -"Cuestiones de competencia legislativa"- i s'hi troba l'art. 56, que diu: "Las cuestiones de competencia se deberán plantear dentro de los veinte días siguientes a la publicación de dichas disposiciones (les legislatives de l'Estat o de la Regió autònoma, que es creguin afectades d'incompetència) en la Gaceta de Madrid, o en los respectivos periódicos oficiales de las Regiones autónomas."

Ara bé : que del 13 d'abril d'enguany, dia immediat al de la publicació al Butlletí Oficial de la Generalitat de la Llei de Contractes de Conreu, al 4 de maig, data que porta l'escrit entaulant la competència legislativa, objecte del present informe, han transcorregut més de vint dies, és evident : són vint-i-dos dies, els que - separen una data de l'altra. I no ens sembla dubtós, que els vint dies següents al de la publicació a la Gaceta, o al diari oficial de la Regió autònoma, segons s'escaigui, de què parla l'art. 56 de la Llei del Tribunal de Garanties Constitucionals, són dies naturals.

Segons l'art. 7<sup>è</sup>. del Codi Civil, si en les lleis es parla de mesos, dies o nits, s'entendrà que els mesos són de trenta dies (llevat que es determinin pel seu nom); els dies, de vint-i-quatre hores, i les nits, des que es pon fins que surt el sol.

Per tant, com que la Llei relativa al Tribunal de Garanties Constitucionals diu, en el seu art. 56, que les qüestions de competència hauran d'ésser plantejades dintre els vint dies següents al de la publicació, en els diaris oficials corresponents, de les disposicions recorregudes, apareix clar, davant del text de l'art. 7<sup>è</sup>. del Codi Civil, que aquells vint dies, precisament següents al de la publicació de les disposicions legislatives atacades per raó d'incompetència, són vint dies naturals.

Altrament, l'esmentat termini de vint dies, no és de creure que el legislador el fixés d'una manera arbitrària i capriciosa; no es tracta, al nostre entendre, d'un assenyalament fet empíricament, abandonant-lo a la casualitat, ans l'estimem homologat amb un altre precepte legal, prou clar i força conegut.

Ens referim a l'article 1r. del Codi Civil. Diu aquest precepte, que les Lleis obligaran a la Península, Illes adjacents, Canàries i territoris d'Africa, subjectes a la legislació peninsular, als vint dies de la seva promulgació, si en aquelles no es disposa altra cosa; i afegeix, que la promulgació s'entén feta el dia que acaba la inserció de la Llei a la Gaceta.

L'art. 36 de l'Estatut Interior de Catalunya casa exactament amb l'art. 1r. del Codi Civil. És segur que el legislador català també va tenir present la conveniència que el termini assenyalat perquè les Lleis adquireixin força d'obligar, fos concordant en les legislacions de la República i de la Regió autònoma, atesos els reflexos que aquest fet pot tenir en les relacions i conflictes entre el Govern de la República i el de Catalunya, anomenat, en l'Estatut, Consell Executiu.

El nexe que establim entre els arts. 1r. del Codi Civil, 36 de l'Estatut de Catalunya i 56 de la Llei del Tribunal de Garanties Constitucionals, és conseqüència d'un raonament elemental de lògica i, per tant, norma adequada de bona interpretació jurídica. No hem vist mai sostingut per ningú, que els vint dies de que parla l'art. 1r. del Codi Civil no siguin naturals; no sabem que ni tan sols s'ha propugnat a favor que els dits vint dies són hàbils, és a dir, descartats els festius.

Doncs, bé : si així és, i no pot negar-se, és lògic i jurídic, repetim, que el legislador, en l'art. 56 de la Llei del Tribunal de Garanties Constitucionals, fixés el termini a què aquell es refereix, d'acord amb l'art. 1r. del Codi Civil -vint dies naturals-, tota

vegada que produint les qüestions de competència legislativa, si — prosperen, l'efecte d'anul·lar les disposicions legals atacades i tots els seus actes d'execució (art. 59 de la Llei del 14 de juny del 1933) seria pertorbador, cercar i obtenir els tals efectes, — quan la Llei titllada d'incompetència ha estat ja legitimament posada en vigor, per haver transcorregut el termini de vint dies, — passat el qual a Catalunya, com als altres territoris de la Repùblica, les lleis són obligatòries, segons els textos legals que — hem estudiat.

Si els preceptes adduits no fossin prou, i la lletra mateixa de l'art. 56 de la Llei del 14 de juny del 1933, no confirmés, en dir "dentro de los veinte días siguientes a la publicación ...", que es tracta de dies naturals, el fet que no s'hi faci la més lleu al·lusió a dies hàbils o inhàbils, barra el pas a una tal distinció, del tot estranya als arts. 7<sup>è</sup>. i 1r. del Codi Civil, i el seu abast.

El descompte dels dies inhàbils en els termes, és cosa — de l'art. 304 de la Llei d'Enjudiciament civil; és privatiu dels terminis processals, els quals solament afecten els assumptes que — es troben en tràmit davant de la jurisdicció judicial, si els tals terminis tenen per punt de partida un emplaçament, una notificació o bé una citació.

Ho diu ben clar l'art. 303 de la Llei d'Enjudiciament civil, i ho han ratificat, declarant que ni l'article 303 ni el 304 — que mana descomptar, dels terminis judiciais assenyalats per dies, els que no són hàbils per a les actuacions judiciales— són aplicables, si no hi ha hagut emplaçament, notificació o citació, les sentències del Tribunal Suprem del 24 de març del 1893 i 8 d'abril del 1920.

Perquè d'un termini no judicial, fixat per dies, es descomptin els inhàbils, cal que la mateixa Llei que dóna el termini, ho digui expressament. Si la Llei no crea l'excepció, els dies d'un termini no judicial, són dies naturals.

En les sentències que havem citat, ho declarà el Tribunal Suprem referint-se als terminis fixats en els arts. 1524 i 1637 del Codi Civil i 1062 de la Llei de Procediment.

Ens semblaria tasca molt superior a les nostres modestes forces, defensar que els terminis de l'art. 1524 del Codi Civil per exercitar el dret de retracte (dins nou dies a comptar de la inscripció en el Registre) i de l'art. 1637 del mateix Codi, per fer ús - del dret de tempteig (dins dels vint dies següents al de l'avis) i - de l'art. 1062 de la Llei Processal, per a intervenir judicialment un patrimoni subjecte a testamentaria (fins als trenta dies següents a la mort del testador) són terminis de dies naturals, i que l'assegnyat en l'art. 56 de la Llei del Tribunal de Garanties Constitucionals, és de dies hàbils, es a dir, descomptant els festius.

Per a sostener-ho, hauriem de tancar els ulls al legislat amb caràcter general, o bé trobar en la Llei del 14 de juny del 1933 quelcom especial que justifiqués l'excepció.

I amb aquesta Llei passa tot el contrari. No hi ha res que hi permeti albirar una tal excepció. Ni tan sols les disposicions - de la Llei d'Enjudiciament civil -que tampoc no ens servirien en - aquest cas- són declarades supletòries. I a fe que, quan la Llei del 14 de juny del 1933 vol admetre com a supletori algun text legal, no comprès entre els que regulen la seva vida, ho consigna expressament. Així, en l'art. 100, diu que el que no és previst en el títol VIII - (sobre procediment per a exigir responsabilitat criminal en els casos que ha de conèixer el Tribunal de Garanties) serà regulat per la Llei d'Enjudiciament criminal, i en l'art. 12 del Reglament del 8 de desembre del 1933, són declarats supletoris de la Llei i del Reglament, pel que toca a la celebració de vistes, els arts. 649 i 666 de la - Llei Orgànica del Poder Judicial. Ultra això, cal subratllar, encara, que quan el Reglament, que és el que fixa la tramitació dels afers, vol, excepcionalment, que un terme o termini no sigui de dies naturals, ho declara amb precisió; tal, per exemple, l'art. 18, on es

diu que les Seccions o el Tribunal poden aclarir algun punt de les sentències, dins dels tres dies hàbils següents a la notificació.

Ens sembla que això dit és prou per a donar per acabat - l'estudi de l'excepció prèvia, que mata l'acció exercitada pel Govern de la República en l'escript que motiva el present Informe.

Suscitat i resolt, segons el nostre judici, el problema - previ de l'extemporaneitat, que afecta a la qüestió de competència entaulada pel Govern de la República contra la Llei del Parlament - de Catalunya, sobre Contractes de Conreu, entrarem a l'estudi de - fons, tenint en compte que l'informe que se'ns ha demanat ho ha estat, en termes generals, respecte de la qüestió de competència plantejada.

El primer que sorprèn en llegir l'escript entaulant la qüestió de competència, és la timidesa amb què es formula. No es diu, - d'una manera concreta, que l'anomenada Llei de Contractes de Conreu infringeixi, en tal punt i per tal raó, l'art. 15, núm. 1r. de la Constitució de la República, i els 11 i 12 de l'Estatut, sino que, copiant a la lletra el primer dels esmentats preceptes, i afegint - que els arts. 11 i 12 de l'Estatut subordinen les facultats legislatives de la Generalitat, al repetit art. 15, es limita a dir, en termes generals "que les disposicions del Parlament Català, en regular els contractes de cultiu, en les seves diverses modalitats, i en el seu triple aspecte civil, social i processal, determinant noves bases de contractació, establint els efectes dels contractes, creant Junes Arbitrals, amb procediment especial davant d'elles, regulant el que anomena "dret d'adquisició", creant un Registre especial dels dits contractes, i una anotació preventiva en el Registre de la Propietat, amb efectes tan singulars que modifica l'ordenació hipotecària de l'Estat, pot estimar-se que estan en oposició amb les normes que, segons els articles abans citats, fixen les respectives competències de l'Estat i de la Regió autònoma."

Aquesta timidesa, en dret processal estricta, constitueix una falla de la demanda, perquè hi manquen la claredat i precisió - que han d'acompanyar-la i perquè són omeses les conclusions que el demandant ha de fixar per tal que la seva acció prosperi. És el que ja en el procediment per fòrmules del dret romà integrava la intenció, respecte la qual devia pronunciar-se el Jutge, dictant la sentència qua actor desiderium suum concludit.

Si, com diu el Govern de la República en el fet segon de l'escrit que examinem, l'ha induït a interposar el recurs que utilitzà la circumstància d'estimar que alguns dels preceptes continguts en la Llei de Contractes de Conreu podien excedir de les atribucions legislatives de la Regió autònoma, semblava obligat que hagués acompañat la dita, de precisions, que servissin per a orientar seriosament la discussió i resolució del conflicte i, sobretot, que expressés clarament els articles de la Llei atacada, que determinen noves bases de contractació: acusació aquesta la més greu de totes les formulades, car dir que una Llei regulant contractes especials "estableix els efectes dels contractes", és una gran veritat, desproposita, però, de tota conseqüència per a la resolució de la qüestió de competència, perquè si se'n té per a regular un contracte, ha de tenir-se'n també per a establir els seus efectes, i res no hi ha -seria absurd- en l'art. 15 de la Constitució, ni en els arts. 11 i 12 de l'Estatut, que ho posin en dubte.

Cal situar el problema en el seu veritable punt de realitat; fugir de divagacions i subtilitats. Fent-ho així, hem de començar proclamant allò que s'omet en l'escrit del Govern de la República: que el nom no fa la cosa, i l'anomenada Llei de Contractes de Conreu, bo i que hi siguin tractats l'arrendament, parceria, masoveria i rabassa morta, és una Llei reguladora de la propietat de la terra. Aquesta veritat, cal dir-la i no oblidar-la, perquè l'art. 15, núm. 1r. de la Constitució, que reivindica, per a l'Estat espanyol, la legislació exclusiva de diferents matèries, no inclou, entre les reservades, les Lleis reguladores de la propietat de la terra, i l'art. 11 de l'Estatut de Catalunya, no posa a la legislació exclusiva civil, - atribuïda a la Generalitat, un altre límit que el derivat del núm. -

1r. de l'art. 15 de la Constitució, sense que pugui tampoc passar-se per alt que l'apartat b de l'art. 12 del mateix Estatut reconeix, a favor de la Generalitat, la legislació exclusiva i l'execució directa en matèria de política i acció social agrària, exceptuat el règim miner i les bases mínimes de monts, agricultura i ramaderia, en allò que afecti la riquesa i coordinació de l'economia nacional.

És, per tant, de tota evidència, examini's la qüestió com es vulgui i tantes vegades com es vulgui, fins fent-ho amb el prejudiци de trobar allò que es cerca, que d'acord amb els articles citats i, a més, el 16 de la mateixa Constitució, que diu que en les matèries no compreses en els arts. 14 i 15 correspondrà a les Regions autònombes la legislació exclusiva i l'execució directa, segons disposin els Estatuts aprovats per les Corts, que per a Catalunya, el règim de propietat no és intangible, car, involucrat com es troba dintre de la legislació civil i la política i acció social agrària, les quals li han estat atribuïdes per l'Estatut, pot Catalunya dictar, regulant tal matèria, totes les Lleis especials que el seu Parlament estimi convenientes a les necessitats de la Regió autònoma.

No és possible a l'hora d'ara, legislar sobre la propietat de la terra, prescindint dels corrents moderns que assenyalen unes directrius a la política i acció social agrària, defensades per homes de dret, però imposades moltes vegades com a mesura urgent d'ordre públic. A tot el món s'ha fet, i ho han practicat copiosament els Govern de la República. No havia d'ésser una excepció el Govern de la Generalitat de Catalunya.

L'anomenada crisi del dret civil, que tanta literatura jurídica ha produït, té per causa destacada, d'una part, la situació econòmica del món, en estat de desequilibri, després de la gran guerra; d'altra, la fallida, parcial, si es vol, però fallida a la fi, del jus privatum romà, fundat en la utilitas singulorum, del Codi de Napoleó, del qual s'ha dit que ignorava els obrers, i, en fi, del descrèdit en què ha caigut, mentre es cerquen noves fórmules de justícia, la teoria de l'autodeterminació, base dels contractes, segons la doctrina clàssica.

En una paraula : la tendència moderna, bona o dolenta, - però que és una realitat, a la qual ningú no es pot substraure, va a socialitzar el dret; la propietat passa de dret subjectiu a funció social; el propietari que no compleixi la funció, serà substituït per qui estigui en millors condicions per a dur a terme la finalitat jurídico-econòmica que la nova concepció propugna. (De què aquesta tendència ha estat forta a Espanya, en donen fe els arts. 43, 44, 45 i 47 de la Constitució i les Bases de la Llei de Reforma Agrària, a les quals més tard haurem de referir-nos de nou).

Tot això és tan cert, que els civilistes més destacats - desitgen anar, com més aviat millor, a la reforma del Codi Civil, "per a infondre-li un esperit nou i impregnar les institucions civils d'hàbit social". (José Castán, Hacia un nuevo Derecho Civil, pág. 68).

El dret civil té, doncs, una zona que limita, avui, amb el dret social; però aquest dret no és, tractant-se de regular la propietat de la terra, el que està comprès en la "legislació social" - de què parla el núm. 1r. de l'art. 15 de la Constitució, perquè aquella "legislación social" és l'anomenada així per antonomàsia, o sigui el dret del treball o dret industrial i obrer. El dret civil - sobre regulació de la propietat de la terra, influït necessàriament per les exigències de la política i acció social agrària (ambdues de la competència de la Generalitat), no són la legislació social que es va reservar l'Estat en el núm. 1r. de l'art. 15 de la Constitució de la República.

Ho va entendre així, amb tota la raó, la Secció de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, encarregada d'elaborar el projecte de Llei de Contractes de Conreu, com es pot veure en l'exposició que la precedeix. Els seus autors -juristes de reconeguda valua i de sentit conservador acusat, la majoria d'ells- diuen, en l'esmentada exposició, el que copiem: "La Secció especial es troba plantejada com a primera qüestió, la de determinar l'àrea que en la matèria - a regular corresponia a la competència legislativa de Catalunya, a l'efecte de salvar, en determinades zones extremes, les limitacions que imposen l'Estatut del 15 de setembre del 1932 i la Constitució de la República." 200

"L'art. II de l'Estatut reconeix a Catalunya la legislació exclusiva en matèria civil, exceptuant allò que disposa l'art. 15, núm. 1r. de la Constitució; i entre les excepcions que conté -que, com a tals, són d'interpretació restrictiva- no hi entren els contractes de conreu. L'art. 12 de l'Estatut disposa que correspon a la Generalitat la legislació exclusiva i l'execució directa, en el que es refereix a política i acció social agrària, encara que exceptuant la legislació social, de conformitat amb el paràgraf primer de l'art. 15 de la Constitució. La Secció especial, per tant, ha pogut actuar en un sector d'ampla competència, ja que el dret social, que té per finalitat específica regular el desenvolupament del contracte de treball o de prestació de serveis, no afecta els contractes de conreu, o sigui d'arrendament de cosees."

Sostingué criteri substancialment idèntic la Sala primera de la nostra Audiència Territorial, en informar, per ordre del Tribunal Suprem, el recurs entaulat pel senyor Josep Vergés, al·legant la inconstitucionalitat de la Llei que per a solucionar els conflictes derivats dels contractes de conreu dictà el Parlament de Catalunya a 26 de juny del 1933. Aquest informe, i els elements documentals de justificació que amb el mateix es produïren, els suposem a poder del Tribunal de Garanties Constitucionals; si no hi fossin, entenem que valdria la pena de reproduir-los, per a major il·lustració d'aquell Alt Tribunal.

Però, suposem per un moment, aclucant els ulls, com hem dit, que l'anomenada Llei de Contractes de Conreu no és una Llei destinada a regular la propietat de la terra, amb normes de política social - agrària, què el Parlament de Catalunya ha cregut adients per a l'ordenació de l'ús de la terra i per a assegurar la pau del camp. Admetem, als efectes de la discussió, que la dita Llei no és més que una disposició legal, reguladora de tots els contractes afectats per ella, o sigui, com expressa l'art. 1r. els de rabassa morta, parceria, masoveria, arrendament de terra i, en general, tots els actes i contractes, qualsevulla que sigui llur denominació, pels quals es cedeix onerosament l'aprofitament d'una finca rústica a persona diferent del propietari, sempre que sigui l'explotació de naturalesa agrícola. 26 !

Queda admès. Però, per ventura l'arrendament de finques - rústiques, l'aparceria, la masoveria i la rabassa morta, no són i han estat sempre tinguts per contractes de naturalesa civil i, per tant, compresos, sense cap mena de dubte, en la competència legislativa atribuïda a la Generalitat en l'art. II, en relació amb el 12, lletra b de l'Estatut de Catalunya, d'acord amb el núm. 1r. de l'art. 15 de la Constitució?

Segurs estem que aquesta pregunta no la contestaria negativament cap home de dret. Són civils els esmentats contractes, i el Codi del 1889 i la jurisprudència del Tribunal Suprem en donen abundant fe.

D'aquí ve que l'atac a la Llei de Contractes de Conreu no es faci de ple, sinó de biaix. La Llei ha estat dictada amb incompetència -diu l'escrit demanda del Govern de la República- perquè atempta "les bases de les obligacions contractuals", que es va reservar l'Estat en el núm. 1r. de l'art. 15 de la Constitució, tants cops citat.

Per molt afany que es tingui d'estendre les facultats de l'Estat en matèria legislativa, i de retallar les atribucions de la Regió autònoma, no és possible confondre els contractes amb les bases contractuals, perquè si s'establís tal confusió, desapareixeria d'arrel l'autonomia en l'ordre legislatiu, i l'art. II de l'Estatut seria, senzillament, una mofa sarcàstica. Si això pogués ésser, Catalunya, amb règim autonòmic, tindria el seu dret en un estat de desemparament molt superior a aquell en què es trobà, essent vigent l'art. 12 del Codi Civil, que va produir, al seu dia, debats tan aferriats i que tantes esmoixades hagué de sofrir després, en interpretar-se judicialment el seu abast.

Podrà discutir-se si dins del clos de les bases de les obligacions contractuals hi està comprès tot el que contenen els títols I i II del llibre IV del Codi Civil, o si només poden encabir-s'hi uns quants principis fonamentals, que és el que va sosténir l'eminent ci-vilista senyor Sánchez Roman, gens suspicós, atesa la seva competència i la posició adoptada, contrària a l'art. II de l'Estatut, en discutir-se aquest en les sessions del 16 i 17 d'agost del 1932. 262

Digué en aquella ocasió el senyor Sánchez Roman, que les bases generals de les obligacions contractuals "son así como cuatro o cinco reglas cardinales, y lo demás ya no son bases generales de la contratación ..." "la vida contractual concreta, los tipos de negocio, todo eso, no está entregado a las bases generales de la contratación, sino a la variedad específica de cada una de estas legislaciones privativas ..."

Sigui, però, el que es vulgui, mitja dotzena de regles cardinals, com amb encert notori digué el senyor Sánchez Roman, o sencers els títols I i II del llibre IV del Codi Civil, com creuen altres, no cal ara escatir-ho, perquè la Llei de Contractes de Conreu no conté, en bona veritat, altra base d'obligació contractual que la que es formula en l'art. 2<sup>n</sup>. en dir que els contractes de conreu han de complir-se de conformitat a l'ús i a la bona fe, segons els pactes convinguts, sempre que no estiguin en contradicció amb els preceptes de la Llei; base, aquesta, que no és pas una novetat, ans pot dir-se que és reproducció gairebé literal de la continguda en l'art. 1258, que és un dels compresos en el títol II del llibre IV del Codi Civil.

Es parla també, en l'escrit-demanda del Govern de la República, traient-ho de l'informe del Consell d'Estat, i s'assenyala com a tara d'incompetència, que en la Llei de Contractes de Conreu es regula l'anomenat "dret d'adquisició". No diuen, però, ni el Govern, ni el Consell d'Estat, perquè puguin creure que la regulació del dret d'adquisició, del que s'ocupen els arts. 14, 43 i següents de la Llei i la segona de les seves disposicions transitòries, constitueix una invasió legislativa; ni en quin precepte de la Constitució o de l'Estatut ve compresa la dita invasió; ni per què no formulen càrrec anàleg contra la regulació del dret de redempció (arts. 57 i 58) i del dret de reserva (articles 12 a 15 i 32) que la mateixa Llei consagra. I així no és possible discutir, perquè falta base de raconament que ho permeti.

La competència legislativa del Parlament català per a la regulació de la propietat de la terra, i especialment dels contractes que cita l'art. 1r. de la Llei -sotmesa avui al judici del Tribunal de Garanties Constitucionals-, en els seus aspectes civil i de política i acció social agrària, la tenim prou raonada i és balder d'insistir-hi. Cap, però, recordar, encara, que el Codi Civil admés el dret de redimir tots els censos, en l'art. 1608; que el de redimir l'emfitètic, l'affirma també en l'art. 1651; que el cens - emfitètic, té remarcables analogies amb alguns dels contractes regulats en la Llei de Conreus; que el dret d'adquirir, res no té de particular que substancialment impedeixi comparar-lo amb la redempció dels censos; que el mateix comis el trobem relacionat amb la - redempcio, en l'art. 165 del citat Codi; i, per últim, que el vell dret civil, en un dels aspectes que més gros esborranc ha sofert, - és en general, en matèria d'arrendament.

Les bases fonamentals d'aquest contracte -preu cert i temps determinat, segons l'art. 1543 del Codi Civil- està en fallida. Avui tenim vives la pròrroga forçosa, la fixesa del preu dintre una escala gradual, les prerrogatives de la propietat denominada mercantil, damunt dels locals destinats al comerç, etcètera, etc. D'aquí que fer a Espanya l'espantat o el sorprès, davant del dret d'adquisició de què parla la Llei de Contractes de Conreu, alhora que s'invoquen - també, com a motiu d'incompetència, les Bases de la Reforma Agrària del 15 de setembre del 1932, és una cosa insòlita, que desorienta - però no convenc.

Una altra objecció fa, a la Llei de Contractes de Conreu, per raó d'incompetència, l'escrit del Govern de la República que - venim estudiant, juntament amb els seus suports : els informes del Consell d'Estat i de la Sala de Govern del Tribunal Suprem. En el fonament de dret quart es diu que la creació d'un Registre especial dels contractes de conreu i l'anotació preventiva en el Registre de la Propietat, amb tan singulars efectes que modifiquen l'ordenació hipotecària de l'Estat, pot estimar-se que pugnen amb les normes que l'art. 15 de la Constitució i els II i 12 de l'Estatut assenyalen, - en fixar les respectives competències legislatives de l'Estat i de

No podem capir, és superior a les nostres llums, com i per què l'existència del Registre especial a què es contrau l'art 9<sup>è</sup>. - de la Llei impugnada -Registre que ha de crear la Generalitat i en el qual hauran d'ésser inscrits els contractes de conreu atorgats en document privat- envaeix les atribucions legislatives de l'Estat. Ni l'art. 15 de la Constitució reserva a l'Estat l'ordenació d'altres - Registres que els existents i afectes a la Direcció General de Registres i del Notariat, com ho confirma la regla 10<sup>a</sup>. de les del traspàs de serveis relatius a l'administració de Justícia; ni l'art. II de l'Estatut, que atribueix a la Generalitat competència legislativa exclusiva en matèria civil, exceptuat allò que disposa l'esmentat art. 15 de la Constitució, ha estat depassat; ni, per fi, és una novetat legislativa a Espanya l'enregistrament dels contractes d'arrendament sense que, fins ara, hagués pensat ningú que uns tals Registres havien de dependre de la Direcció General de Registres i del Notariat, a la qual es refereix, específicament, la ja esmentada norma 10<sup>a</sup>. del traspàs dels serveis de Justícia.

Pensar que la Generalitat no pot ni tan sols crear un Registre, on s'anotin els contractes de conreu, és una cosa tan esquifida, que ens portaria a creure que ha estat un somni l'existència de l'Estatut de Catalunya i fins de la Generalitat, integrada, segons l'art. 14, pel Parlament, el President i el Consell Executiu.

Quant a l'ordenació hipotecària de l'Estat, la Llei de Contractes de Conreu solament parla del Registre de la Propietat en els arts. 43, 48 i 59, establint, en el primer, que el dret d'adquisició és inscribable, si bé la seva inscripció no és indispensable per a la seva efectivitat; en el segon, que la inscripció es practicarà - per anotació preventiva, després del pagament del primer termini per l'arrendatari, convertint-se en inscripció definitiva, en tenir lloc el del darrer termini, i, en el tercer, atorgant les mateixes anotació i inscripció al rabasser que utilitza el dret de redempció.

Aquests preceptes no són més que una lògica aplicació -  
dels arts. 1r., 2n, i 42, darrer incís, de la Llei Hipotecària; per  
tant, ningú que estudii, sense prejudici, els esmentats articles -  
de la Llei de Contractes de Conreu, no podrà arribar, serenament,  
a la conclusió que, amb ells, s'envaeix d'ordenació dels registres  
i hipoteques, que el número 1r. de l'art. 15 de la Constitució re-  
serva a la legislació de l'Estat.

Si el criteri que ara expressa, en aquest punt, l'escri-  
demanda del Govern de la República, fos realment el legal, i per tal,  
legítim, no es comprendria que el mateix Govern hagués traspassat al  
Tribunal de Cassació de Catalunya (Norma 8<sup>a</sup> de les del traspàs dels  
serveis de Justícia, abans al.ludit) el coneixement "dels recursos -  
sobre qualificació de documents referents al dret privatiu català; -  
que hagin de motivar inscripció en els Registres de la Propietat; -  
perquè aquest traspàs, té molt a veure amb els arts. 66 de la Llei  
Hipotecària i 121 a 136 del seu Reglament, i és clar que pot afectar  
més a l'"ordenació dels registres i hipoteques", que no pas la sim-  
ple anotació preventiva d'un dret real i la seva conversió en inscrip-  
ció definitiva, d'acord amb les regles generales de la dita ordenació.

Tot això fa pensar que per la precipitació amb què foren -  
evacuades les consultes, que amb caràcter urgent formulà el Govern,  
no es pogué meditar sobre la qüestió sotmesa, amb el deteniment que  
la importància de l'assumpte exigia, com ho diu, excusant-se'n a la  
bestreta, en començar el seu informe, el Consell d'Estat. Si els su-  
periors organismes consultats, el prestigi i la vàlua dels quals no  
cal enaltir, ho haguessin pogut fer, em sembla segur que no haurien  
pas donat a les paraules "ordenación de los registros e hipotecas",  
una interpretació i un abast tan extensiu, perquè és notori que no  
el tenen, com ho va reconèixer en les sessions de les Constituents  
dels dies 16 i 17 d'agost del 1932, un jurisconsult i civilista de  
tanta autoritat com el senyor Sánchez Roman, ja citat abans, en dir  
el que copiem: "La Ley Hipotecaria, que por lo visto es una de las  
leyes que se aplican con mejor provecho y con mayor exactitud en  
Cataluña, es una ley, sin embargo, que no está en su totalidad sal-  
vada con la excepción constitucional, porque lo que no sea ordena-

ción de registros e hipotecas, es decir, cuanto toque al resto de la propiedad inmueble, eso queda de vuestra competencia (de Catalunya) con el dictamen de la Comisión."

L'informe de la Sala de Govern del Tribunal Suprem, diu - que aquest Tribunal ha d'ajustar la seva tasca al disposat en el número 3r. de l'art. 616 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, els termes del qual li permeten d'evacuar, a instància del Govern, informes relatius a l'Administració de Justícia, a l'organització i règim dels Tribunals, i als seus assumptes governatius i econòmics.

Amb aquest punt de vista, vol estudiar el Tribunal Suprem, exclusivament, els efectes que els preceptes de la Llei catalana sobre Contractes de Conreu poden irradiar damunt de l'Administració de Justícia i règim dels Tribunals; i després d'indicar, com de passada, que el contingut de la Llei avui sub judice, podria estimar-se que modifica el disposat en les lleis generals de l'Estat espanyol, en matèria social i processal, i en les bases de les obligacions contractuals, cita els arts. 8<sup>è</sup>. i 38 a 40 de la repetida Llei, aprovada pel Parlament de Catalunya, afirmando, del primer, que el seu contingut accentua, més encara, el dubte respecte l'eficàcia de la Llei d'Enjudiciament Civil, i dels altres, que podria també entendre's que ha estat desconeguda l'eficàcia de la legislació de l'Estat, pel que toca a la competència per a decidir sobre revisió dels contractes.

Observem que l'esmentat art. 8<sup>è</sup>. de la Llei de Contractes de Conreu no fa més que determinar la competència de les Junes Arbitrals, en un dels casos que la Llei regula, i també que, ultra aquest article, s'ocupen de les Junes Arbitrals els arts. 3, 12, - 19, 23, 27, 28, 29, 38, 39, 40, 42, 47, 52, 53, 54, 56, 58, 61 i 72, tot el cap. IX de la Llei, dedicat precisament a les Junes Arbitrals, i les disposicions transitòries tercera, cinquena i sisena. Podia, doncs, el Tribunal Suprem, haver citat tots els preceptes esmentats, amb la mateixa raó que invocà els arts. 8<sup>è</sup>. i 38 a 40, puix que en tots ells s'estableix la competència, en els diferents casos que regulen, de les Junes Arbitrals.

El que resulta més difícil, és demostrar, com algú ha dit, que les tals Junes vulneren l'art. 51 de la Llei d'Enjudiciament Civil, perquè substrauen de la competència de la jurisdicció ordinària uns negocis de naturalesa civil, suscitats en el territori espanyol.

Cert que això no ho diu el Tribunal Suprem, ni podria dir-ho tenint en compte que l'art. 487 de la Llei Processal admet el principi que tota diferència litigiosa entre parts pot ésser sotmesa al judici arbitral o d'amigable composició, que són cosa diferent de la jurisdicció ordinària; però, també ho és, que insinua, mal sigui en forma dubitativa, que tal vegada podria estimar-se afeblida l'eficàcia de la Llei d'Enjudiciament Civil pel contingut dels articles de la de Contractes de Conreu, que creen i regulen les Junes Arbitrals. I això ho creiem equivocat.

Quan una Regió autònoma té competència exclusiva en matèria civil per a regular tals i tals institucions, en té també per a dotar-les i revestir-les de totes les modalitats que la concepció jurídica, guiatge del legislador, aconselli. I si aquesta concepció no s'adiu amb les normes processals generals de l'Estat, haurà de prescindir-ne i crear-ne d'altres extrajudiciales, precisament perquè no pot modificar les judicials preestablertes.

Una Llei civil catalana, dictada pel Parlament de Catalunya, amb competència, pot perfectament prescindir, per exemple, per a determinades infraccions i diferències entre arrendadors i arrendataris, del judici de desnonament, sempre que, en fer-ho, assenyali, preceptivament, un camí per a resoldre el conflicte derivat de la infracció o diferència; el que no pot fer és admetre el desnonament com a via-processual pertinent al cas, i al mateix temps regular-lo altrament de com ho fa la Llei de l'Estat.

Això ens sembla elemental, perquè, de no ésser així, la competència legislativa civil de la Regió autònoma fóra un engany; se la privaria d'instaurar qualsevulla novetat, per encertada i convenient que fos, si no s'adeia amb els procediments fressats per la Llei d'Enjudiciament Civil. Si la regulació rituària d'aquesta Llei no servia i no es podia substituir per una altra filla de l'engany, o fruit de l'experiència, ¿què podria fer la Regió autònoma per a renovar la seva legislació civil i posar-la d'acord amb el món? ¿Hauria d'esperar que l'Estat volgués modernitzar la seva Llei adjectiva, antiquada? Llavors, ¿de què serviria la competència legislativa en matèria civil?

Heus ací el que ha passat amb la Llei de Contractes de Conreu. El legislador català ha volgut prescindir, en alguns aspectes, del procediment judicial. Ha cregut oportú acudir a una mena de conciliació o arbitratge previ, i acollint-se al que no és cap novetat a l'estranger ni a Espanya, ha creat unes Junes Arbitrals, que coneixen de determinades qüestions civils, de la mateixa manera que els Tribunals industrials i els Jurats Mixtos —que tampoc són jurisdicció ordinària— coneixen de veritables qüestions civils, anàlogues, si no idèntiques, a les que la Llei de Contractes de Conreu atribueix a la competència de les Junes Arbitrals. Com el Govern de la República va encomanar, per Decret de l'II de juliol del 1931, als Jurats Mixtos de la Propietat Rústica, i no a la jurisdicció ordinària, el coneixement dels judicis de revisió, a què fan referència els arts. 38 a 40 de la Llei de Contractes de Conreu, citats pel Tribunal Suprem com a possibles infractors de la legislació processal de l'Estat espanyol, pel que fa a la competència per a decidir sobre revisió de contractes.

Si el Govern de la Repùblica pogué prescindir de la legislació processal de l'Estat, creant, per Decret de l'II de juliol del 1931, uns Jurats Mixtos, que havien de conèixer dels judicis de revisió en matèria de propietat rústica, bé pot haver fet el mateix la Generalitat, mitjançant la Llei d'II d'abril d'enguany, que té més solemnitats i garanties que no pas un Decret; màxim quan, contra les resolucions de les Junes Arbitrals, ha concedit el recurs d'apel·lació davant del Tribunal de Cassació de Catalunya, segons resulta dels arts. 56, 81 i 85 a 87 de l'esmentada Llei de Contractes de Conreu.

Catalunya no pot variar els termes adjectius de la tramitació dels judicis davant dels Tribunals, però pot, el mateix que l'Estat, eliminar els procediments judicials quan cregui, en dictar lleis de la seva competència, que és més convenient, pels interessos de la Regió autònoma, fugir d'una litis i acollir-se a altres normes regulars i regulades, estranyes a la jurisdicció ordinària.

No s'oblidi que la Generalitat, ultra la competència legislativa exclusiva en matèria civil, exceptuat allò que disposa l'art. 15, núm. 1r. de la Constitució, i la legislació exclusiva i l'excepció directa en matèria de política i acció social agrària (arts. II i 12 de l'Estatut) té traspassades les facultats executives del Govern de la Repùblica, per a l'aplicació, al territori de Catalunya, de les Lleis orgàniques i processals de l'Estat, en matèria d'Administració de Justícia. (Norma 3<sup>a</sup>. per al traspàs dels serveis relatius a l'Administració de Justícia : Decret del 25 d'octubre del 1933).

Es diu, per òltim, en l'escrit del Govern de la Repùblica -cinquè fonament de dret- que si prosperés la validesa de la Llei catalana impugnada, s'arribaria a produir una duplicitat de normes, en gran part contradictòries, vist que la base segona de la Llei de Reforma Agrària estén els seus efectes a tot el territori de la Repùblica, i que fa el mateix un projecte d'arrendament de finques rústiques presentat a les Corts.

El Govern es recolza, doncs, per a impugnar la Llei de Contractes de Conreu, en unes bases de Reforma Agrària que no sembla pas per ara que es vulguin aplicar massa de pressa a tot el territori de la República -a Catalunya no s'apliquen, ni s'adiuen, en general, amb la distribució de la propietat de la terra i amb el règim d'explotació d'aquesta- i en un Projecte de Llei que encara no ha començat a discutir-se; i tot això recolzat en una possible dualitat legislativa. Es evident que si l'argument fos viable, el que sobraria no fóra pas la Llei de Contractes de Conreu, sinó tot el règim autonòmic, pel qual Catalunya tant havia maldat i que va aconseguir, amb l'adveniment de la República, d'accord amb l'art. II i omplint tots els requisits de l'art. 12, ambdós de la Constitució del 9 de desembre del 1931.

Altrament, sense voler entrar a discutir ara si la Llei de Reforma Agrària, de la mateixa data que l'Estatut, és d'aplicació a Catalunya, ni si és legalment possible que les Corts de la República, prescindint de l'art. 18 de l'Estatut, només posant en una Llei qualsevulla, que serà d'aplicació general a tota Espanya, deixin sense efecte els preceptes estatutaris -preceptes que, un cop aprovats, integren, segons l'art. II de la Constitució, l'organització política-administrativa de la Regió autònoma, reconeguda i emparada per l'Estat espanyol, com a part integrant del seu ordenament jurídic-; deixant de banda aquest problema interessant, en torn del qual molt podrà dir-se, hem de fixar-nos que l'anomenada Llei de Reforma Agrària no és més que una Llei de Bases, i que entre les 24 que conté, solament n'hi ha una -la 22- que es refereix a Catalunya, i a la qual pot atribuir-se el caire de base d'obligació contractual. Aquesta base diu que la "rabassa morta" es considerarà com un cens, i serà redimit a voluntat del rabassero o rabassaire.

I bé : aquesta base ha estat fidelment respectada pel Parlament de Catalunya; l'art. 57 de la Llei de Contractes de Conreu n'es prova fefaent.

No ens sembla del cas donar a les observacions i raonaments que procedeixen, una extensió major. Hem refutat amb l'amplitud devida tots els fonaments invocats, amb imprecisió i vaguetat, i en ben poques ratlles, en els informes del Consell d'Estat i Sala de Govern del Tribunal Suprem i en l'escrit-demanda del Govern de la República. Sinceralment creiem que de la lectura de les al·legacions respectives sorgeix, amb claredat diàfana, que la qüestió de competència plantejada pot servir per agrupar, en torn del Govern que l'ha entaulat, estimulat per determinats sectors d'opinió i dels que la impugnen, idearis o interessos contradictoris, que ataquen i es defensen aferrissadament; però també, i amb la mateixa diafanitat, se'n desprèn, examinant les coses amb serenor de judici, que no hi ha raó, ni fonament jurídic seriós, que permeti d'estimar la qüestió de competència plantejada en l'escrit del Govern de la República, que se'ns va trametre amb els documents adjunts i que motiva el present informe.

Així, per acord de tots els reunits, tinc l'honor de posar-ho a coneixement de la V.II., en compliment del prec contingut en la comunicació alludida al començament del present informe.

Barcelona, 17 de maig del 1934.

El President del Tribunal de Cassació de Catalunya, - - -  
SANTIAGO GUBERN (signat).

INFORME DE LA SALA PRIMERA DEL CIVIL DE  
L'AUDIÈNCIA TERRITORIAL DE BARCELONA

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, por auto de fecha 20 del actual mes, ha ordenado a esta Sala primera de lo Civil de esta Audiencia Territorial de Barcelona que emita nuevo informe al elevar el testimonio de la alegación de inconstitucionalidad de la Ley que "para la solución de los conflictos derivados de los contratos de cultivo" fué promulgada por el Parlamento de Cataluña en - 26 de junio de 1933; alegación hecha por la representación de don - José Vergés Vallmajor en recurso de apelación promovido contra auto del Juzgado de primera Instancia de Granollers, en ejecución de sentencia dictada en un juicio de desahucio.

Según el acuerdo de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, este informe "debe recoger y razonar cuantos elementos de juicio sean precisos para el criterio explícito en orden al contenido jurídico de la cuestión propuesta", adoptando "una actitud crítica" que sirva, en su día, como antecedente autorizado del dictamen de la Sala del Supremo.

Respetuosa esta Sala informante de lo que se le ordena, y procurando desempeñar su cometido de la mejor manera posible, ha de comenzar diciendo que los "conflictos derivados de los contratos de cultivo", a que se refiere la Ley tachada de anticonstitucional, no son una invención de ésta, son una realidad a la que la Sala de Gobierno de esta Audiencia Territorial, en 18 de julio de 1932, dedicó extenso informe que elevó al Gobierno de la República, y en el que

se recopilaban los elementos de juicio que para facilitar el estudio del problema llamado vulgarmente de los rabassaires habían proporcionado en sus Memorias los trece jueces especiales que intervinieron en la tramitación y fallo de cerca de tres mil juicios de revisión, promovidos al amparo de los Decretos de II de juliol, 6 de agosto y 31 de octubre de 1931; se consignaban los datos estadísticos relativos a esos juicios, en relación con cada una de las que fueron provincias catalanas; se hacían consideraciones sobre la situación agrícola y modalidades de su contratación en Cataluña; se explicaba la "génesis del conflicto", apuntando sus causas ocasionales y las reales; se exponía el "proceso histórico del conflicto" y la tramitación que judicialmente se había dado a éste, y se proponían los remedios posibles; indicándose al final del informe de la Sala de Gobierno, que "la resolución de las cuestiones apuntadas debería corresponder al mismo territorio catalán, si éste ha de constituir y regular su propio derecho civil".

Así lo entendió también la Sección especial de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de la Generalidad de Cataluña al presentar, para su discusión en el Parlamento, un Proyecto de Ley sobre Contratos de cultivo, en cuya exposición de motivos, fechada en abril de 1933, se dedicaba uno de los primeros párrafos a razonar la competencia legislativa de Cataluña en esta materia, basada en las prescripciones de los arts. 15 de la Constitución de la República y II y 12 del Estatuto de Cataluña; manifestándose en el penúltimo párrafo que la Sección especial citada había estimado conveniente no consignar entre las disposiciones transitorias de su Proyecto de Ley sobre los Contratos de cultivo las normas solucionadoras de los conflictos jurídicos provocados por hechos ocurridos durante estos últimos tiempos en algunas comarcas, porque consideró que no era oportuno involucrar en una Ley que se propone la regulación definitiva de los contratos de cultivo (Ley que aun está siendo objeto de discusión) —

"preceptos circunstanciales que en el fondo constituyen una medida de Gobierno y acusan el rastro o estela (ròssec) de hechos pretéritos"; por lo que prefirió desglosar esos preceptos englobándolos en un texto legal especial, que, discutido y reformado por el Parlamento de Cataluña, constituye hoy la Ley de 26 de junio de 1933, cuya inconstitucionalidad se alega.

Se dice que en la alegación a que se refiere este informe que la Ley combatida ha alterado hasta límites inconcebibles las buenas relaciones que deben existir entre terratenientes y cultivadores, ha roto en el agro toda paz social, ha desvalorizado la propiedad rústica, con el consiguiente quebranto para la pública economía, y está llamada a producir graves trastornos cuya inminencia se columbra.

No siendo el objeto de este informe averiguar si esa Ley — que "para la solución de los conflictos derivados de los contratos de cultivo" (per a la solució dels conflictes derivats dels contractes de conreu) fué dictada ha originado mayores males que los que trató de remediar, sino indagar si tal Ley es inconstitucional, debemos hacer constar que en la alegación a que nos referimos se invocan las dos causas de inconstitucionalidad que para las Leyes regionales expresa en su último párrafo el art. 29 de la Ley relativa al Tribunal de Garantías Constitucionales de 14 de junio de 1933; infracción de preceptos de la Constitución de la República, e infracción de preceptos del respectivo Estatuto.

En primer término, invoca la alegación como infringidos los mismos arts. 15 de la Constitución y II del Estatuto de Cataluña, que la Comisión Jurídica Asesora que formuló el proyecto de la Ley censurada y el relativo a los contratos de cultivo señalada como base de la competencia del Parlamento catalán para legislar sobre estas materias.

Se citan después, en la alegación a que nos referimos, - como infringidos los arts. 18, 20 y 21 de la Constitución, y se dice que la Ley censurada "ha legislado sobre derecho social y procesal, y en el orden civil ha alterado las bases de las obligaciones contractuales establecidas entre propietarios, arrendadores, arrendatarios, rabassaires, colonos, aparceros, cultivadores y obreros del campo"; expresándose en otros párrafos de la alegación; que esa Ley del Parlamento de Cataluña de 26 de junio de 1933 "altera las normas procesales, manda archivar autos y procedimientos en curso, - y en vía de apremio deja sin valor ni efecto sentencias firmes, priva a los litigantes de toda medida de aseguramiento de sus derechos, cancela de oficio embargos y retenciones, enerva las actuaciones judiciales, el libre acceso de los ciudadanos a los Tribunales de Justicia, substria de la competencia de los Tribunales ordinarios asuntos que les están atribuidos por las Leyes de Enjuiciamiento, impide la ejecución de fallos investidos de la santidad de cosa juzgada, - algunos de los cuales contienen condena de costas que por el archivo de los autos se puedan hacerse efectivas, etc. etc."; que dicha Ley "es igualmente inconstitucional porque altera las bases de las obligaciones contractuales civiles, que son las disposiciones del tit. - II del lib. IV del Código civil, que comprende desde el art. 1264 al 1315 de este texto legal, disposiciones que consagran la teoría general de que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y que desde entonces obligan no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la Ley"; que este principio básico de la contratación sólo es alterable por la legislación del Estado, y, sin embargo, "el Poder regional ha pretendido dejar sin efecto las estipulaciones civiles agrarias, enervando la eficacia de los contratos legítima y válidamente formalizados, algunos en instrumento público y la mayoría debidamente registrados, todo ello sin poder hacerlo por precepto expreso de la Constitución y de su propio Estatuto, que el Parlamento catalán debería ser el primero en respetar".

Para saber si todo esto que se dice en la alegación es cierto, es forzoso hacer un análisis de la Ley impugnada, con ella a la vista, ya que la reproducción de cada uno de sus preceptos en este informe sería enojosa y estéril; pero el más ligero examen de dicha Ley sugiere inmediatamente la idea de que si se la tacha de haber invadido el derecho social y procesal y haber alterado las bases de las obligaciones contractuales celebradas entre propietarios de las tierras y colonos, aparceros o arrendatarios de ellas, porque para solucionar los conflictos, entre ellos promovidos durante la época que taxativamente marca la Ley, se dispone en ésta, en los casos en que no ha habido acuerdo entre los partícipes, el abono de la mitad de las rentas o de la cuarta parte establecida con anterioridad al 14 de abril de 1931, se regula que los daños ocasionados en las fincas sean únicamente reclamables por su importe, se deja sin efecto las reclamaciones con este objeto presentadas ante los Tribunales de Justicia que estuvieron pendientes de resolución, se prohíbe la interposición ante éstos, por actos constitutivos de los conflictos a que se refiere la Ley, de acciones resolutorias o de desahucio, y se ordena la caducidad de las reclamaciones en tramitación y que los embargos y retenciones decretados quedan sin efecto, reservando a los demandantes el derecho a reproducir sus reclamaciones ante las Comisiones Arbitrales (especie de Jurados Mixtos) que la Ley crea a tal efecto, la misma tacha y las mismas acusaciones deben lanzarse contra el Decreto del Gobierno de la República de II de julio de 1931, que dispuso que en los contratos de arrendamiento de fincas rústicas de precio hasta 15.000 ptas. anuales, los arrendatarios pudieran pedir la revisión del contrato, al objeto de la reducción del precio del arrendamiento, ordenando que ésta tendría lugar siempre que dicho precio fuese superior a la renta que corresponda a la finca arrendada, conforme al avance catastral, o al líquido imponible que figura en el amillaramiento, decretando que de la revisión

entendieran, no los Tribunales de Justicia ordinarios, sino los Jurados Mixtos de la Propiedad rústica, dejando en suspenso la tramitación de los desahucios por falta de pago desde que se acredite haber solicitado la revisión, y facultando a los Jurados Mixtos para acordar, a petición de los arrendatarios, el aplazamiento o escalonamiento del pago de las rentas pendientes; contra el Decreto de 6 de agosto del mismo año, que aplicó las disposiciones del anterior a todos los contratos de arrendamiento, cualquiera que fuese su precio, facultando a los Jueces de primera Instancia, donde no existieran Jurados Mixtos, para que conocieran de los juicios de revisión, cuya interposición paralizaría la tramitación de los desahucios o de cualesquiera otro procedimiento judicial incoado por falta de pago; contra el Decreto de 31 de octubre del propio año 1931, que prorrogó obligatoriamente por un año los arrendamientos de fincas rústicas en explotación agrícola o pecuaria que hubiesen vencido o que vencieren antes del 2 de marzo de 1932, facultando de nuevo a los arrendatarios para pedir la revisión de los contratos a los efectos de la reducción de la renta o participación, que había de ajustarse a las normas que el Decreto establecía, con suspensión de la tramitación de los desahucios y cualesquiera otro procedimiento incoado por falta de pago o por vencimiento del término del contrato, y regulando minuciosamente la tramitación de los juicios de revisión en forma distinta a la señalada en la Ley de Enjuiciamiento Civil, que sólo había de aplicarse como supletoria de lo dispuesto en el Decreto; contra el de 26 - de marzo de 1932, que estableció una jurisdicción especial para conocer de los juicios de revisión y contra los de 19 de abril y 5 de mayo del mismo año, que regularon esa jurisdicción y la forma en - que habían de tramitarse los juicios.

Absurdo sería suponer que mientras el Poder ejecutivo de la nación acudía con esas disposiciones excepcionales al remedio de los conflictos originados por los contratos de cultivo, la Generalidad de Cataluña y el Parlamento catalán debieran ver impasibles y con los brazos cruzados esos conflictos que llegaron a ser de orden público y de urgente resolución.

En busca de ésta, la Generalidad practicó las oportunas gestiones, que dieron como resultado el llamado "Pacto de la Generalidad", de 21 de septiembre de 1931, en el que, ante el honorable señor Presidente de ella, y con asistencia del gobernador civil de la provincia de Barcelona y de varios parlamentarios; el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, en representación del estamento propietario, y la Unión de Rabassaires, en representación del estamento de rabassaires y aparceros, acordaron lo que allí se expresa; y el Parlamento de Cataluña, que aun sigue discutiendo y formulando una Ley reguladora de los Contratos de cultivo, promulgó la de 26 de junio de 1933, cuya inconstitucionalidad se alega.

Como queda dicho, se funda esencialmente tal alegación en la supuesta infracción del art. 15, nº. Iº. de la Constitución de la República, y en el art. II del Estatuto de Cataluña, que son, precisamente, los preceptos legales que la Comisión Jurídica Asesora de la Generalidad invoca para justificar la competencia del Parlamento de Cataluña en la regulación de los contratos de cultivo.

Es, a juicio de esta Sala informante, indudable que al reservar el precepto constitucional citado al Estado español, en materia de legislación civil, tan sólo "la forma del matrimonio, la ordenación de los registros e hipotecas, las bases de las obligaciones contractuales y la regulación de los estatutos personal, real y formal para coordinar la aplicación y resolver los conflictos entre las distintas legislaciones civiles de España"; y al determinar, categórica y rotundamente, el art. II del Estatuto de Cataluña, que a la Generalidad corresponde la legislación exclusiva en materia civil, — exceptuando lo dispuesto en el art. 15, nº Iº., de la Constitución citada, vinieron a reconocer y sancionar que la regulación de las

diversas obligaciones contractuales que no afecte a las bases de éstas, y entre ellas la relativa a los contratos de cultivo, de tan marcadas características especiales en esta región, incumbe a la Generalidad.

Y si esto parece indudable, lo es más aún que en la solución de los conflictos que se susciten con motivo de los contratos de cultivo que saliendo de la órbita de la esfera privada vengan a producir, por su volumen y trascendencia, una alteración en el orden público, la intervención de la Generalidad de Cataluña no es ya una facultad, sino un deber, por tratarse, como decía con acierto la Comisión Asesora Jurídica de aquélla, de una medida de buen gobierno, comprendida de lleno en la "política de acción social agraria", que el art. 12 del Estatuto de Cataluña, en su párrafo b, atribuye a la Generalidad de Cataluña en su legislación exclusiva y ejecución directa; debiendo advertirse que esa medida de buen gobierno que para remediar los males causados por los conflictos pasados y poner término a ellos adoptó la Generalidad, siguiendo la pauta de Decretos anteriores del Poder ejecutivo de la República, no la adoptó por acuerdo del Consejo Ejecutivo de la Generalidad ni por Decreto de su Presidente, sino en virtud de Ley votada y promulgada por el Parlamento catalán, es decir, con mayores solemnidades y más plena autoridad que las disposiciones emanadas del Gobierno de la República, cuyas facultades ejecutivas para la aplicación en el territorio de Cataluña de las Leyes orgánicas y procesales del Estado, en materia de Administración de Justicia, han quedado traspasadas a la Generalidad por la norma tercera de las hasta ahora decretadas en virtud de propuesta de la Comisión Mixta de Traspaso de servicios de la Administración de Justicia (Gaceta de Madrid de 26 de octubre de 1933), siendo ésta la mejor interpretación que del Estatuto han podido realizarse en relación con las medidas de la Ley impugnada de 14 de junio de 1933, que afectan a la Administración de Justicia.

Todas estas razones, que la Sala primera de lo Civil de esta Audiencia Territorial omitió en su anterior informe por temor a invadir la esfera de atribuciones que a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo confiere el art. 31 de la Ley de 14 de junio de 1933, las tuvieron sin duda en cuenta las dos Salas de lo Civil de esta - Audiencia al aplicar (sin vacilación alguna y sin pensar siquiera en acudir a la consulta que establece el art. 100 de la Constitución y el 30 y el 32 de la Ley antes citada) la Ley del Parlamento de Cataluña, de 26 de junio de 1933, en múltiples casos procedentes de diversos Juzgados de primera Instancia de este territorio; pues, según notas facilitadas por las seis Secretarías de Sala de esta Audiencia, dicha Ley ha sido aplicada en doce casos tramitados por la Secretaría de don Juan Farratjes, tres procedentes de los Juzgados de Valls, La Bisbal y Cervera; por la Secretaría de don José Usera, dos, el que motiva este informe, procedente del Juzgado de Granollers, y otro del Juzgado de Lérida; por la Secretaría de don Alejandro Rey-Stolle, uno, procedente del Juzgado de Vich; por la de don Jesús de Lezcano, otro, procedente de Figueras, por la de don Fernando Serrano, dos, procedentes de los Juzgados de Arenys de Mar y Tortosa, y por la Secretaría de don Emilio Oppelt, tres, procedentes de los Juzgados de Tortosa y Mataró (dos), sin que se hubiera alegado la inconstitucionalidad de la Ley aplicada más que en el caso a que este informe se refiere.

Para facilitar el estudio de esto se elevan (juntamente con el testimonio de la alegación de inconstitucionalidad anteriormente remitido, y devuelto por el Tribunal Supremo) un ejemplar del Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya, correspondiente al 27 de junio de 1933, que inserta la Ley impugnada en sus texto catalán y castellano y los vols. Iº. y 2º. publicados por el Departamento de Justicia y Derecho de la Generalidad, que insertan: el primero, - en sus págs. 179 y sucesivas, los anteproyectos de la Ley de Contratos de Cultivo y solución de los conflictos por éstos provocados, redactados por la Sección especial de la Comisión Asesora Jurídica, y pre-

cedidos de la Exposición de motivos a que este informe alude; y el segundo, el informe de la Sala de Gobierno de esta Audiencia, a que también se refiere el presente (págs. 119 a 154 del volumen); los Decretos del Gobierno de la República de II de julio (pág. -- 447), 6 de agosto (pág. 449) y 31 de octubre de 1931 (página 159) y 26 de marzo (pág. 181), 19 de abril (pág. 183) y 5 de mayo de 1932 (pág. 196), también mencionados en este informe, más el llamado "Pacto de la Generalidad" (pág. 90), de que también aquí se habla.

Tal es el informe que, procurando acomodarlo a los fundamentos del auto de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de fecha 20 del actual, tiene el honor de emitir esta Sala primera de lo Civil de esta Audiencia Territorial de Barcelona, que si desconfía del acierto de sus indicaciones, tiene la satisfacción de haberlas realizado con una sincera y buena voluntad de cumplir el mandato que se le dió.

Barcelona, 27 de febrero de 1934. = Víctor G. de Echávarri.

= Francisco de P. Caplín. = Buenaventura Sánchez Cañete. = Alejandro de Paz. = Ignacio de Lecea.

INFORME DEL COMISSARI DE LA GENERALITAT,

SENYOR AMADEU HURTADO

UN SALUDO EN NOMBRE DE CATALUÑA

Señores Magistrados: Al empezar mi informe yo no puedo - olvidar que ésta es la primera actuación pública del Tribunal de Garantías y las circunstancias han querido que sea mi voz, bien modesta por cierto, la primera voz de la calle que llegue hasta aquí para saludarlos, con todo el respeto que merece la alta función que os está encomendada y la autoridad de vuestros prestigios personales -saludo que me complazco en hacer extensivo al ilustre Fiscal - general de la República, que con tanta brillantez ha hablado en nombre del Gobierno- y al propio tiempo expresaros la confianza del pueblo en la serenidad y en la imparcialidad de vuestros fallos.

Pero este honor, que indudablemente lo es, de asistir y participar en la inauguración de vuestras tareas públicas, hubiese querido que fuese debido a otro motivo. Vengo a hablar en nombre - de Cataluña, del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, contestando a una cuestión de competencia planteada por el Gobierno de la - República, cuestión que, según los términos de vuestra Ley Orgánica, constituye un conflicto entre el Gobierno de la República y el Gobierno de la Generalidad.

Cuando contribuí modestamente, pero con gran entusiasmo, a elaborar y votar el Estatuto de Cataluña y la Constitución que - os dió vida, no podía sospechar que nuestro primer encuentro fuese para resolver un conflicto derivado del Estatuto. Un conflicto ... Yo había soñado en una concordia más que duradera permanente; pero se conoce que estas concordias, por lo que tienen de paradisíacas, son cosas de sueños únicamente. Ahora depende de vosotros -yo así lo espero- que también este conflicto no sea en definitiva nada más que un sueño.

#### UN RECURSO QUE EN REALIDAD SÓLO ES UNA CONSULTA

La verdad es que el Gobierno ha andado más de la mitad del camino para llegar a este resultado, porque cuando ha formulado este recurso lo ha hecho en tales términos (a los cuales aludía el ilustre representante del Ministerio Fiscal) que puede decirse que no - hay recurso.

La cuestión de competencia significa que el Gobierno se considera agraviado porque otro Gobierno ha invadido sus atribuciones. Contra este agravio viene el Tribunal de Garantías a decir que hay - que repararlo restableciendo el derecho que ha sido vulnerado. Pero no dice nada de esto el escrito que ha presentado el Gobierno, ni la glosa elocuente que de él ha hecho mi distinguido compañero el representante del Ministerio Fiscal. Se dice sólo que hay en la Ley de Contratos de Cultivo del Parlamento de Cataluña, objeto de este recurso, algunas disposiciones que pueden no estar dentro de las atribuciones legislativas de la Región autónoma, y que pueden estimarse que están en oposición con las normas de otros artículos constitucionales. De modo que en rigor viene aquí el Gobierno a formular, ante el Tribunal de Garantías, una consulta. Esto no es el recurso de incompetencia. No solamente no lo es, sino que ni el Gobierno puede dirigir a este Tribunal su consulta, ni el Tribunal puede evacuarla. No hay

en la Constitución más que un sólo caso, que yo recuerde, el del art. 19, según el cual, aun en materia legislativa reservada a las Regiones autónomas, puede el Gobierno preguntar al Tribunal si es justo o es conveniente hacer alguna Ley de Bases que haga referencia a alguna materia concreta de la competencia legislativa de la Región autónoma. Fuera de esto yo no recuerdo que haya posibilidad de otra consulta al Tribunal. Quizá la haya. De lo que sí estoy seguro es de que no la hay en materia de competencia.

#### EL PLAZO HÁBIL PARA EL RECURSO HABÍA EXPIRADO

Aquí sólo puede existir un agravio del cual se queje el Gobierno, y vosotros debéis repararlo, o no existe agravio ni queja y entonces este recurso está de más. Seguramente el Gobierno no ha sentido tal agravio. La prueba es que no solamente lo ha formulado en los términos que acabo de decir, sino que lo ha hecho fuera de tiempo, no teniendo la menor idea el Gobierno de la República de que el Parlamento catalán hubiese invadido sus atribuciones. Porque no tenía ninguna idea dejó transcurrir el plazo que la Ley le da para que pudiese meditar y preparar este recurso. Y así ha venido en una forma extemporánea. Este es el segundo motivo de nuestra oposición al recurso. El primero acabo de formularlo ahora al decir que este recurso no tiene las condiciones legales para considerarlo recurso. El razonamiento sobre este segundo motivo de oposición es muy sencillo. La cuestión es extremadamente simple. Según el art. 56 de la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías, las cuestiones de competencia se deberán plantear dentro de los veinte días siguientes a la publicación de las disposiciones regionales en los periódicos oficiales de las regiones autónomas.

Esta Ley de Contratos de Cultivo se publicó en el Boletín de la Generalidad el día 12 de abril; contando hasta veinte con los dedos de la mano, terminaban los días el 2 de mayo. El Gobierno presentó su recurso el 4. Por lo tanto, estaba fuera de término. Ahora dice el Gobierno, y dice hoy su ilustre representante : ¡ah! es que hemos descontado los días inhábiles que había dentro de este plazo y el día 4 de mayo, fecha del recurso, está dentro del plazo descontando los inhábiles. Parece un poco difícil que ni este Gobierno ni ningún otro admita que alguien, una vez publicada una Ley en la Gaceta de Madrid, se excuse de cumplirla, el día 21 de su publicación con el pretexto de que dentro de los veinte días transcurridos había uno que era inhábil. Este caso no se ha presentado hasta ahora a ningún Gobierno. Si se presentase al actual, no toleraría como motivo de incumplimiento de la Ley el haber un día inhábil en los veinte siguientes de su publicación. No lo toleraría porque lo impide el Código Civil, que fija concretamente el plazo de veinte días desde la publicación de una Ley para que empiece a ser obligatoria, y ante este precepto terminante no se puede admitir la posibilidad de descontar un día inhábil, y no cabe duda que el Gobierno el día 21 de la publicación de la Ley, la consideraría exigible. Sobre este extremo algo se dice, bastante se dice, en el escrito presentado en nombre del Presidente de la Generalidad de Cataluña, que tengo el honor de hacerme propia aunque debo declarar que no es debido a mi iniciativa. Hace honor a la competencia de los juristas que han intervenido en su redacción. Obedece a un informe facilitado al Presidente de la Generalidad por el actual Tribunal de Casación de Cataluña, y a los juristas que forman este Tribunal se debe este escrito que subscrito por entero. Pero he de añadir algo más, siquiera para contestar a las palabras brillantes del Ministerio Fiscal. Ya el Fiscal ha anticipado mi argumento. Según el art. 7º. del Código Civil, los días deben contarse de veinticuatro horas y únicamente se descuentan los inhábiles y se prescinde de contarlos en los procedimientos judiciales

o administrativos regulados por alguna Ley que expresamente mande - descontarlos de los plazos a términos en ella señalados. En vuestra Ley Orgánica, señores Vocales, no hay ningún precepto que diga que no son días contables, dentro de los plazos que esta Ley fija, los días inhábiles. Yo no necesito saber nada más que esto para hacer la afirmación categórica de que los días que tiene el Gobierno para formular su recurso, deben contarse como días naturales.

UNA TESIS DEL TRIBUNAL SUPREMO  
CONFIRMA LA TESIS DE LA CADUCIDAD DEL PLAZO

Hay una jurisprudencia del Tribunal Supremo que confirma mi opinión, a la cual ha aludido también el señor Fiscal, y de la cual se habla en el escrito del Presidente de la Generalidad antes referido. Y esta jurisprudencia del Supremo, en resumen se reduce a decir que se descuentan los días inhábiles cuando se trata de términos judiciales o sea concedidos en procedimientos judiciales en curso. ¿Todo esto es un capricho? ¿Esta distinción de términos, según la cual se cuentan o no se cuentan los días inhábiles, es un capricho? ¿Ha sido uno de tantos medios para complicarnos la existencia? No. Esto responde a un criterio lógico que está explicado y definido - en el artículo 304 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que ha citado ya en su brillante informe el señor Fiscal. En ningún término señalado por días, dice este artículo, se contarán aquellos en que no - puedan tener lugar actuaciones judiciales. Esta es la explicación. Los días son inhábiles, porque lo son para la administración pública, sea judicial, sea administrativa, porque a los dos aspectos de la administración se refieren las Leyes del procedimiento que regulan los términos de que hablamos.

Los días inhábiles se establecen por la Administración y para la Administración; son para cuando ella no puede actuar, para cuando se suspende su actuación; pero no para los ciudadanos o sujetos de derecho; para nosotros, ¿qué razón puede influir en que los días de los términos que se nos conceden sean hábiles o inhábiles?

Yo existo el día laborable exactamente igual que el día festivo. Los términos se me conceden para que medite y para que prepare el ejercicio del derecho y sea o no sea día festivo, porque puedo continuar meditando y preparando lo necesario. Cuando no puedo hacerlo es cuando ese derecho hay que ejercitarlo en méritos de un término que se me concede en procedimiento judicial. ¿Por qué? Porque si bien es verdad que en los días festivos continúo con mi capacidad para preparar un recurso, aquellos días la Administración no actúa, y, por tanto, es lícito que se me suspenda un término durante los días en que no se actúa por ser día festivo. Y esta es toda la explicación; explicación perfectamente lógica, contra la cual no cabe ninguna clase de teorías. Porque la Administración no actúa los días inhábiles tendrán éstos que serme descontados. Pero si se refieren a un término que se me da para uso de un derecho independiente de la actuación de la Administración pública, no hay que descontar los días inhábiles. Porque, repito, para mí son todos hábiles.

Lo que le ha pasado al Gobierno es que de esta facultad de meditar y de preparar el recurso, para la cual se le conceden veinte días, no usó. Tan no usó de ella que se llegó al día 3 de mayo sin que el Gobierno supiera aún que el Parlamento de la Generalidad había votado esta Ley y que el Gobierno, al publicarla, le había agraviado, invadiendo sus atribuciones. Se entera el día 3, y entonces manda una comunicación al Consejo de Estado y otra a la Sala segunda del Tribunal Supremo de Justicia para que le informen. ¡El día 3, - cuando ya había pasado más del tiempo de la meditación y de la preparación! Y el mismo día 3 se ven obligadas aquellas dos instituciones a formular su informe, que entregan el día 4. Y el día 4 el Gobierno se decide a presentar su recurso.

De modo que, en definitiva, se trata de un caso de abandono

no de derecho por parte del Gobierno, para ejercitar el cual tenía un plazo, no solamente legal, sino suficiente, para que pudiese - formar concepto sobre su conveniencia y sobre la extensión de tal derecho.

#### EL GOBIERNO HA OBRADO BAJO PRESIONES POLÍTICAS

Y esto es todo. ¿Hay que hacer algún cargo al Gobierno? No. Con toda seguridad el Gobierno está hoy exactamente igual a como estaba el día 3 de mayo. Sin saber, sin querer decidirse a saber, si esta Ley de Contratos de Cultivo invade o no invade sus - atribuciones. Todos lo sabemos. Al fin y al cabo, por ajenos que estamos a las luchas políticas del país, todos sabemos a qué obedecen los actos políticos del Gobierno, y todos sabemos, por tanto, que alguien ha inducido al Gobierno, con un interés exclusivamente político, a que se sintiese agraviado ante vosotros por una supuesta invasión de atribuciones del Gobierno de la Generalidad.

Yo creo que, tomado el asunto en este aspecto, no es ningún problema difícil para el Tribunal de Garantías. Puede perfectamente decir que aquí no hay recurso porque no está formulado en forma, y que, además, si estuviera formulado en forma, no hay recurso porque ha llegado fuera de término. Y ni el Gobierno ni nadie se lamentaría de esta resolución del Tribunal de Garantías, porque la actitud del Gobierno -repito- no obedece al sentimiento íntimo de haber sido agraviados por el acto del Parlamento catalán y del Gobierno de la Generalidad.

Si en este procedimiento hubiese el periodo de admisión - del recurso, aquí podría dar por terminado mi informe. El recurso no es admisible ; ni viene en forma, ni viene en tiempo. Pero como que no existe el trámite legal de admisión, no hay otro remedio que

entrar en el fondo del asunto, porque el Tribunal de Garantías no puede resolver sobre estos dos puntos (que son los dos primeros motivos de mi oposición) hasta el momento del fallo definitivo. Y esto me obliga, no a dar por terminado el informe, sino precisamente a empezarlo ahora.

El problema que, concretamente, se somete a la resolución del Tribunal de Garantías Constitucionales es contestar, en concreto, a esta pregunta : ¿Puede el Parlamento catalán dictar una Ley regulando los contratos de cultivo de la tierra? Este es todo el problema; pero, claro, detrás de este problema asoma una pluralidad de cuestiones, porque se hace depender la contestación a la pregunta del contenido de la ley, a pretexto de que algunos artículos rozan, infringen o alteran otras disposiciones de la Constitución y del Estatuto y aun de otras Leyes vigentes. Y entonces no tenemos otro remedio que entrar en el fondo del asunto, examinando el contenido de la Ley y hablando del problema que ha motivado el que está Ley se promulgase.

Algunos esperan que el fallo del Tribunal de Garantías Constitucionales cercene la libertad legislativa reconocida a la Generalidad por el Estatuto de Cataluña. Otros, esperan que el Tribunal de Garantías anule la Ley de Contratos de Cultivo, no por razón de competencia, sino por razón de su contenido. Y en esto hay que andar con mucha cautela, incluso para la autoridad y los prestigios del Tribunal de Garantías Constitucionales, porque entiendo necesario no dar la sensación de que la obra legislativa de los Parlamentos de la República es cosa interina, sometida a una revisión de fondo y a la repulsa de los fallos de este Tribunal.

#### EL RESPETO A LAS LEYES

El Tribunal de Garantías es, como su nombre dice, una garantía de que serán respetadas las Leyes constitucionales de la República por todo el mundo, incluso por los Parlamentos. Pero si estos preceptos constitucionales son interpretados por los Parlamentos

de la República atendiendo a una necesidad social del país, con el cual la institución parlamentaria está en íntimo contacto, puede ser imprudente, muy imprudente, desmentir la interpretación del Parlamento, sólo por escrúpulos legalistas que obliguen a restablecer un criterio estrictamente jurídico.

Por lo que hace referencia a nuestro debate, para mí esta Ley del Parlamento catalán, y espero que también para vosotros, tiene, por encima de todo, una virtud : la virtud de ser una Ley que inclina, sólo por ser Ley, a que sea respetada. Significa que unos hombres, la mayoría de los representantes legítimos de un pueblo, han coincidido en una fórmula de derecho que recoge, a su juicio, todas las ansias, todos los anhelos de un estamento social que pesa sobre la vida del país. Y esto, que ellos lo han apreciado y que lo han resuelto en esta forma, cuando viene a vuestro conocimiento no puede ser alterado más que con grandes precauciones y conviene mucho pensar en lo que se hace, antes de poner nuestra mano, que puede ser sacrilega, en una obra que, de cara a las necesidades sociales de esta hora, ha sido votada por un Parlamento o por los representantes de un pueblo.

#### TODAVÍA NO SE PUEDE JUZGAR DEL ACIERTO

#### O ERROR DE LA LEY

Y, al fin y al cabo, ¿qué sabemos nosotros de lo que haya de error o de acierto en esta Ley? Los hombres de lucha pueden creer, y seguramente creen, que esta Ley es acertada porque, en todo o en parte, realiza una ilusión; pero nosotros, hombres de derecho, que conocemos la frecuencia con que las Leyes desmienten la ilusión que las ha creado, no sabemos nada de los aciertos probables de una Ley. Estos son el secreto que revelará el mañana, y lo que tenga de dura-

dero y permanente esta Ley vivirá por encima de todo; lo que haya nacido muerto quedará en el papel. ¿Cómo vamos a destruir ahora - una obra popular si no podemos substituirla por otra, si no sabemos si existe otra mejor que pueda substituirla?

Y es por eso por lo que yo quiero y espero que el Tribunal de Garantías no se disponga a juzgar este asunto con un criterio rigurosa y estrictamente jurídico, ni que obedezca a escrupulos legalistas, sino que tenga en cuenta la realidad del problema que quiere resolver.

Cuando leía esta Ley, tan minuciosa, tan casuística a veces, pensaba en la buena fe de los juristas que la elaboraron y en el esfuerzo con que habían procurado conciliar una aspiración social expresada tumultuosamente con unos principios jurídicos que habían querido salvar para apaciguar odios y rebeldías; pero al mismo tiempo no podía substraerme al recuerdo de una conversación que tuve - hace algún tiempo y que me impresionó, como me impresiona hoy todavía por lo que tuvo de profética. Permitid que hoy me valga de ella para esbozar muy rápidamente el problema que ha motivado esta Ley del Parlamento catalán.

Era un amigo mío que ha viajado y ha residido en casi todos los pueblos del planeta. Estábamos en los últimos tiempos de la Presidencia Coolidge, o en los primeros días de la Presidencia -- Hoover; de todos modos en aquellos tiempos en que la gran República americana se levantaba como un ejemplo ante todos los pueblos del mundo un poco retadora, viviendo bajo el signo de la prosperidad. Y aquel amigo me decía : los Estados Unidos están en quiebra. Y a un movimiento de asombro por mi parte, él contestaba : no tardará mucho tiempo en hacerse pública la quiebra; en cambio, Rusia se salvará. Yo creí que se trataba del clisé que la propaganda comunista que la época había puesto de moda, pero no era esto. Los Estados Unidos -- quiebran --decía-- porque han industrializado todas sus tierras, y la tierra se venga de un trato que no es el suyo.

Pero en Rusia -me permití insinuar- el Estado capitalista se dispone a hacer lo mismo. En el papel, sí -me replicó-. Industrializa las grandes propiedades; pero lo que salvará a Rusia es - una fuerte tradición rural, de la que carece Norte América; lo que le salvará es la imposibilidad material de industrializar la enorme extensión de su tierra cultivable. Centenares de miles de familias continúan viviendo pegadas a la tierra, como formando parte - de la tierra, trabajándola, como cumpliendo una necesidad física - que excluye todas las demás. Y este trabajo disperso, aparentemente inorgánico, que nutre a sus hombres y deja un pequeño sobrante en cada célula de la gran colmena, es la base de la estructura social de un país, que le permite vivir y ante la cual ceden todas las doctrinas y se inclinan todos los poderes. Hasta ahora nadie ha penetrado todavía el misterio que ordena, sin norma y sin ley, el régimen obscuro de esta labor de la tierra. Las teorías dicen : la tierra es del hombre que la trabaja; y el misterio de la naturaleza - parece ser que es la tierra la que quiere hacerse dueña del hombre que la trabaja.

Yo no sé lo que puede haber de cierto en esta visión, nos falta una suficiente información de lo que ocurre en Rusia, donde, como en todo el Oriente, la literatura es más densa que la realidad; pero algo debe haber de cierto en esto, cuando en todos los pueblos del Próximo Oriente, salidos o engrandecidos con desprendimientos - de la antigua Rusia zarista se ha planteado el problema agrario y, con ligeras modificaciones locales, todos responden al mismo pensamiento: el de convertir en propietarios y aun en pequeños propietarios a los cultivadores del campo. Y algo debe haber de verdad en - esta visión del problema cuando las nuevas escuelas socialistas, prescindiendo de los viejos dogmas, dicen y proclaman, como en el plan - de trabajo socialista de Henri de Man, que allí donde existe en las diferentes ramas de la actividad económica la unidad de una propiedad y de la utilización de los medios para ponerla en valor, como en los cultivadores del campo y en los pequeños propietarios, hay que proteger esta propiedad. Esta es ahora la corriente. 295

De la verdad de todo esto no sabemos nada; pero refiriéndome a aquella conversación, con la cual he iniciado esta parte - del informe, lo que sí sabemos es que Norte América ha quebrado y que la fase más aguda de la quiebra, su causa inmediata para muchos, ha sido la caída vertical de la riqueza agrícola, precisamente por exceso de industrialización de sus tierras.

#### LA INDUSTRIALIZACIÓN AGRÍCOLA

#### LA APETENCIA DE TIERRA

Millones de hombres producían en el sur de la República norteamericana nada más que algodón; en el centro producían nada más que trigo; los terratenientes eran hombres de negocios; se especulaba con las tierras y con participaciones en las propiedades de las tierras como con los títulos de la Bolsa; se ensanchaban las producciones a fuerza de hipotecas con la misma facilidad con que una empresa industrial emite sus obligaciones, y faltaba esa clase de cultivadores que vive de la tierra y para la tierra y que de la tierra saca lo necesario para su sustento. Esta clase que no existe en Norte América, existe en otros países, en los que permitidme que incluya - en primer término, porque de ella hablo, a Cataluña. Ahora se ha tratado de remediar este grave problema agrícola en Norte América. ¿Cómo? Entre otras medidas que no hacen al caso, reduciendo las superficies que pueden sembrarse y dedicando las que no se siembran al cultivo de legumbres para la alimentación de los que viven en las haciendas o a la cría de ganado. Se restablece la propiedad pequeña, no industrial. Como dice un autor francés : esta gran reforma no ha tenido más objeto que éste, porque hay en la conciencia de los hombres la convicción de que no hay organismo humano posible sin células vivien-

tes. Estas células no sé si se podrán crear donde no existan; son fruto de la tradición, de un proceso lento y largo. En Cataluña — permitidme una vez más que hable de ella porque en su nombre hablo y por ella estoy aquí— estas células vivientes tienen una existencia secular. En los países de latifundios se pueden intentar asentamientos, colectivizaciones, industrializaciones porque se dice — que los hombres, los campesinos que trabajan la tierra, amantes pasajeros de la tierra que la propia tierra desdena, no apetecen tierras, apetecen jornales y apetecen trabajo; pero en países como el mío sí: apetecen tierras. ¿En plena propiedad? Quizás sí, Algunas veces lo dudo; pero de lo que estoy seguro es de que apetecen la plena posesión de la tierra, con garantías tales de estabilidad que les aseguren de una manera duradera una posición jurídica firme. Y éste es uno de los objetos de la Ley que ha votado el Parlamento catalán, — o sea : estabilidad en la posesión de la tierra, traducida en la seguridad de que cuantas mejoras hagan los cultivadores en ella no serán perdidas, sino que les serán restituídas; y, en segundo lugar, acceso fácil a la propiedad de la tierra.

#### LA RENTA JUSTA

Pero esto, con ser una parte muy substancial de esta Ley, no es, a mi juicio, la parte más viva. Lo más vivo es la necesidad y la reclamación de que las rentas sean justas, y éste es el otro motivo en que se funda la Ley del Parlamento catalán.

Este problema, en definitiva, no es nuevo. Antes que en el campo, en nuestro país, se presentó en la ciudad contra las rentas abusivas de la propiedad urbana. Por decreto, los Gobiernos han regulado las rentas de la propiedad urbana, porque los ciudadanos — las creían excesivas y por decreto continúa todavía regulada esta — materia.

¿Hubo injusticias? ¿Se causaron perjuicios? Indudablemente, sí; pero la protesta —vosotros la recordáis— no fué cosa mayor y los decretos se han incorporado ya de una manera tranquila a nuestras costumbres públicas y a nuestras costumbres jurídicas.

Pero trasplantado este problema al campo, se tropieza con una dificultad, que es el exceso de literatura que pesa sobre la propiedad de la tierra agrícola. Nadie ha escrito ningún poema sobre las delicias de vivir en un piso de una casa de Madrid; pero se ha escrito por todos los poetas, por todos los literatos, por todos —los sociólogos, infinidad de libros y de poemas sobre la propiedad de la tierra.

Descartando toda esta literatura, nos encontramos con el hecho sencillo de un hombre que, detrás de un arado, trabaja una tierra. Y si nos acercamos a este hombre y le preguntamos : ¿Vives y puedes vivir de tu trabajo? El hombre contesta que no, y lo mismo dice otro que está en el campo de al lado, y se va repitiendo como un eco por todo el ámbito de la tierra que descubre nuestra vista hasta formar clamor. Entonces, señores del Tribunal, ¿qué hay que hacer? ¿Oír este clamor con la misma impasibilidad que un concierto? Lo menos que puede hacerse es lo que ha hecho la Ley del Parlamento catalán, y es poner las cosas de modo que pueda realmente aclararse si es verdad la queja de que los hombres que cultivan la tierra no pueden vivir de su trabajo y se encuentre la manera de poner remedio a la queja, si es fundada. Esto es todo lo que quiere esta Ley del Parlamento catalán.

#### ANTECEDENTES POLÍTICOS DE LA LEY

Como veis, el Parlamento de Cataluña no ha inventado nada, si es que algo se puede inventar en esta materia. Comparada esta Ley

con todas las Leyes agrarias de la postguerra, sorprende por su moderación. Si algún antecedente jurídico hubiese de buscarse lo encontrariamos seguramente en las Leyes agrarias de Irlanda, que se fundan en lo que se llamaba las tres efes, porque con "f" empiezan las palabras inglesas que definen cada uno de los tres principios : justicia de la renta, estabilidad en la posesión de la tierra con derecho a mejoras, acceso a la propiedad. Y estas Leyes de Irlanda están sangrando en la historia de aquel país, porque cada una de ellas marca un paso difícil en este proceso de evolución del Derecho que ha necesitado para llegar a su estado actual cerca de un siglo.

Y ahora nosotros, que en la Ley del Parlamento catalán vemos recogidos en fórmulas simples estos mismos principios, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a decir que no sirve? ¿Por qué ...?

¡Ah! Porque, según se dice, por el Gobierno y por el Ministerio fiscal se repite aquí, roza, infringe o altera alguna disposición tan importante, por ejemplo, como unos artículos de la Ley Hipotecaria. Ante una Ley de esta envergadura, ante un problema social de esta magnitud, ¿es posible que el Tribunal de Garantías de la República, salido de la Constitución, tropiece ante los escrupulos legales de que no se infrinja o no se interprete abusivamente un artículo de la Ley Hipotecaria? Yo lo someto a vuestro juicio, — porque tengo un concepto mucho más alto de las funciones que os están encomendadas.

#### EL PODER AUTÓNOMO ES COMPETENTE

Pero al fin el problema está planteado y aquí hay que discutirlo tal como lo plantea el Gobierno.

Primera cuestión, primer reparo legal. Según el artículo 15 de la Constitución y el art. II del Estatuto, el Parlamento catalán

puede legislar en materia civil, excepto en las bases de las obligaciones contractuales, que son de la competencia exclusiva del Estado. Y dice el Gobierno : al promulgar esta Ley se ha infringido este precepto, porque se legisla sobre materia civil, sin tener en cuenta la limitación que aquellos artículos suponen.

Las bases de las obligaciones contractuales, Yo, que tuve el honor de contribuir a la redacción de este artículo, no puedo tener la pretensión de venir ante vosotros a daros una interpretación auténtica, pero sí puedo exponeros las razones de buen sentido que determinaron la redacción de aquella frase. Se partió en la Constitución del hecho de una diversidad de legislaciones regionales en materia civil y se creía con razón que, gracias a esta diversidad, — gracias a la libertad legislativa que se concedía a las regiones se iba normalmente, por una evolución natural del Derecho, hacia la unificación. Pero hay una parte del Derecho en la cual el pensamiento universal coincide y, por lo tanto, se creyó que convenía decir ya, desde luego, en la Constitución que había este punto de coincidencia; o sea que pensamos exactamente lo mismo todos los ciudadanos de la República, pertenezcamos a la región que se quiera, respecto de los principios fundamentales del Derecho contractual. Esto es lo mismo que ha dado motivo a que en Suiza, por ejemplo, se hiciera como primer Código civil, aprobado por todos los cantones, un Código de obligaciones. A esto obedece aquella frase : la libertad legislativa puede determinar variaciones debidas a circunstancias locales; pero en lo fundamental coincidimos. Estas variedades locales se desenvolverán dentro del marco de unas fases generales del Derecho contractual. Esto es muy sencillo y no representa ningún problema.

Lo que hay que demostrar ahora es que en la Ley del Parlamento catalán se han infringido estas bases del Derecho contractual, éstas, sobre las cuales se afirma desde ahora nuestra común coincidencia. En el escrito del Gobierno no se dice nada de esto. En el

brillante informe del señor Fiscal se dice que estas bases pueden considerarse infringidas principalmente por un motivo y es que - en las limitaciones que establece esta Ley respecto a los contratos de arrendamiento se desconoce la libertad de contratación. Las bases actuales pueden ser, y son seguramente, los títulos I y II - del libro IV del Código Civil, que definen las obligaciones, que - las clasifican y dicen la manera de probarlas y de ejercitarlas, - como establecen los requisitos esenciales para la validez de los - contratos. Es evidente que si los contratos requieren la libertad del consentimiento, hasta el punto de que este consentimiento queda viciado si le afecta el error, la violencia o el dolo, puede y debe decirse que es un principio jurídico el de la libertad de contratación. Con las limitaciones de la Ley de Cataluña, ¿se infringe esta base? No. Esto podía decirse antes, señor Fiscal, esto ahora en España no puede decirse, porque esta base lo fué del derecho de contratación, pero se ha transformado, y se transforma todos los días, por los órganos legislativos del Estado.

¿Cuántas Leyes se han dictado hasta ahora en las cuales no sólo se limita la libertad de contratación, sino que se niega - una libertad tan elemental como la de renunciar a un derecho que - uno no quiere?

Se dice en ellas que son nulos los pactos en los cuales alguna de las partes renuncia a los derechos y a los beneficios de la Ley. Esto que es general en la legislación, ha venido a alterar principalmente las bases del Derecho contractual en lo que hace referencia a los arrendamientos. En éstos, la alteración se ha hecho -permítasenos la frase- a "caño libre". Los decretos que desde el año 1921 regulan los contratos de arrendamiento, ¿cuántas limitaciones imponen a la libertad de contratación? ¿Son una herejía jurídica? No. El Ministerio Fiscal lo recordaba. Para que haya libertad de contratación, es necesario que haya igualdad entre los contratantes, y las limitaciones actuales tienen por objeto garantizar esa libertad.

## EL DERECHO CONTRACTUAL EN LA MATERIA AGRÍCOLA

Si es verdad que la libertad del consentimiento se viola por error, violencia o dolo, hay que tomar precauciones para que la distinta situación social de los contratantes no envuelva para cada uno de ellos algún vicio de su consentimiento libre. Y ésta es hoy la verdadera base del Derecho contractual español.

Si admitimos incluso como una de las bases de las obligaciones contractuales la definición de los distintos contratos —nunca la regulación específica de los contratos, la definición —solamente—, nos encontraremos respecto a los contratos de arrendamiento que hoy la definición del Código ya no sirve. Según éste, es el contrato en que uno permite a otro el goce de una cosa de su propiedad por un tiempo determinado y por un plazo fijo. Esto ya no rige en los contratos actuales. El tiempo lo determina la Ley, el precio está sujeto a revisión e incluso la rescisión de contrato —por causas legales da derecho a una indemnización a favor del que se considera perjudicado. Si esta es la legalidad actual de España, ¿cómo podrá decirse que continúa siendo base del Derecho contractual la libertad de contratación, sobre todo en materia de arrendamiento?

Pero es más. En este caso concreto hay una Ley de Bases para la Reforma Agraria. De bases se llama. Esta Ley de Bases no podría dictarse hoy sin antes pasar por la consulta del Tribunal de Garantías, porque así lo manda el art. 19 de la Constitución; pero en la fecha en que se dictó pudo dictarse porque el Tribunal de Garantías no existía y porque se aprobó y publicó el mismo día que el Estatuto de Cataluña. Vamos a tomarla, pues, como base del Derecho contractual en materia de contratos agrícolas. Y sobre éstos hay una base especial : la 22.

No hay más que ver lo que dice y cotejarla con esta Ley del Parlamento catalán. Dice (aquí lee la base 22 y la Ley del Parlamento catalán).

Este es el contenido de los arts. 57 al 61 de la Ley que se ha recurrido. Y continúa : En cuanto a arrendamientos y aparcerías se someterá a las reglas siguientes:

Regulación de rentas. Este es el contenido de los artículos 37 al 40 de la Ley que se recurre y del 66 al 73, por lo que hace referencia a la aparcería. Abono de mejoras útiles y necesarias al arrendatario; estos son los artículos 27 al 35 de la Ley que se recurre. Duración de largo plazo : arts. 10 al 26 de la Ley que se recurre. Derecho de retracto a favor del arrendatario en caso de venta de la finca : arts. 62 al 65 de la Ley del Parlamento de Cataluña. Causa de desahucio por falta de pago o abandono del cultivo : art. 22 de la Ley recurrida. Prohibición del subarriendo : art. 19 de la Ley recurrida. Considerar arrendamiento el contrato en que el propietario no aporte más que el uso de la tierra y menos del 20 por 100 del capital de la explotación : art. 66 de la Ley del Parlamento catalán.

Hemos examinado una Ley de Bases del Derecho contractual en materia de contratos de cultivo. Si algo ha hecho el Parlamento catalán es someterse estrictamente al texto de esa base, no ya al espíritu, sino a la letra. Y, además, el Parlamento catalán ha creado lo que llama un derecho de adquisición, el cual consiste en la facultad que se le da al cultivador al cabo de diez y ocho años de un arrendamiento de poder adquirir la propiedad de la finca, pagándole en quince anualidades, con abono del 5 por 100 de interés; pero exigiéndole tales condiciones y tales garantías -no sólo en el momento de hacer uso del derecho de adquisición, sino después de la adquisición de la finca- que pueda ser ésta la base de lo que se llama en la propia Ley el patrimonio familiar, el patrimonio de la familia

rural, que le permita vivir con sus propios medios. Y esto no hay precepto en ninguna Ley conocida que lo impida. Nadie lo ha podido citar. Puede perfectamente el Parlamento de Cataluña crear este derecho real. Lo ha creado, porque responde a una necesidad social sin que ninguna Ley se oponga; al contrario, en cuanto hace referencia al arrendamiento, este derecho de adquisición equivale al derecho de redención de censos que viene ordenado por la base 22 de la Reforma Agraria; y esto es todo lo que se ha dicho respecto al aspecto civil de esta Ley del Parlamento catalán, por parte del Gobierno y por parte del señor Fiscal.

#### LA CUESTIÓN NO ES SÓLO UN PROBLEMA DE DERECHO PROCESAL

Invito a los señores Magistrados a que mediten sobre estas consideraciones que me he permitido someterles para ver si es posible decir que la regulación específica de estos contratos de cultivo está substraída a la competencia del Parlamento y si tal como el Parlamento ha usado de esta facultad ha infringido las bases generales del Derecho contractual. Si el Gobierno hubiese querido en la Constitución limitar, en la regulación específica de los contratos, la facultad legislativa de la Generalidad, no hubiese dicho que se reservaba el legislar sobre bases de obligaciones contractuales; - hubiese dicho pura y simplemente que se reservaba la facultad de legislar sobre obligaciones contractuales. Y esto no lo dice la Constitución, ni lo dice el Estatuto.

Otro reparo importante del Ministerio Fiscal. Según el art. 15, ya citado, de la Constitución y el II del Estatuto, el Estado se reserva la facultad exclusiva de legislar en materia de Derecho procesal, y como que en esta Ley del Parlamento catalán se crean unas Juntas Arbitrales destinadas a resolver los conflictos que se derivan de la misma Ley de Contratos de Cultivo, se dice : Esto es legislar sobre Derecho procesal, porque como jurisdicción para resolver conflictos de intereses no hay más que la jurisdicción

ordinaria y, por tanto, a ella hay que someter todos estos conflictos. Si el Parlamento ordena algo en contra de ese precepto infringe la Constitución y se excede en sus atribuciones. Este es el argumento.

Si se tratara solamente de un problema exclusivo de Derecho procesal, mi razonamiento sería muy sencillo y es el siguiente : Según el art. II del Estatuto y según las disposiciones concordantes de la Constitución, el Gobierno de la República tiene competencia legislativa en materia procesal, pero puede ceder las facultades de ejecución a la Generalidad; y se dictó un Decreto trasladando los servicios de Justicia a la Generalidad, en el cual hay una norma, que es la tercera, que dice : "Se traspasan a la Generalidad las facultades ejecutivas del Gobierno de la República para la aplicación en el territorio de Cataluña de las Leyes orgánicas y procesales del Estado en materia de administración de justicia." De modo que hoy la Generalidad en cuanto a la ejecución de las Leyes procesales tiene las mismas atribuciones que el Estado. Exactamente las mismas, de acuerdo, no sólo con aquella norma, sino con el origen de la norma, que es el art. 15 de la Constitución. Supongo que los señores del Tribunal lo recuerdan; pero no hay inconveniente en verlo. Dice así : "Corresponde al Estado español la legislación y podrá corresponder a las Regiones autónomas la ejecución en la medida de su capacidad política, entre otras materias, en Leyes procesales." Estas facultades ejecutivas, según el Estatuto, se transmiten por el Gobierno previo acuerdo de una Comisión mixta.

#### ASPECTOS TÉCNICOS

¿Qué se cree ahora? ¿Que, al ejercer la Generalidad esas facultades de ejecución en materia de Derecho procesal, no ha cumplido bien? El hecho es que no ha alterado ninguna disposición de carácter procesal. Lo que ha hecho, al crear las Juntas Arbitrales,

ha sido prescindir de la jurisdicción ordinaria en cuanto hace referencia a la resolución de los conflictos que se deriven de la Ley, y entonces, si el Gobierno entiende que esto es cumplir mal las funciones ejecutivas que le han sido traspasadas a la Generalidad, con la misma extensión y la misma libertad que el Estado, no es este recurso el que debía venir aquí, sino el que dice el art. 6º. del Estatuto de Cataluña, en su párrafo segundo. Este art. 6º. habla concretamente del caso de aquellas Leyes de la República cuya ejecución esté encomendada a la Generalidad. Respecto de esto dice : "La Generalidad está obligada a subsanar, a requerimiento del Gobierno de la República, las deficiencias que se observen en la ejecución de aquellas Leyes; pero si la Generalidad estimase injustificada la reclamación, será sometida la divergencia al fallo del Tribunal de Garantías Constitucionales, de acuerdo con el art. 121 de la Constitución." De modo que, antes de venir aquí con este recurso, el Gobierno de la República debía decirle al Gobierno de la Generalidad : Subsaná este defecto en la ejecución de las Leyes procesales. Y el Gobierno de la Generalidad tenía derecho a contestarle : Creo que no debo subsanarlo, porque lo hecho responde a una necesidad política del país. Y si no se hubiesen puesto de acuerdo los dos Gobiernos, hubieran venido aquí, ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, a decidir la divergencia. Y ¿qué hubiera pasado? Pues que los Gobiernos se hubieran puesto de acuerdo, con toda seguridad, porque lo que hizo la Ley del Parlamento catalán fué cumplir las disposiciones del art. 487 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, según el cual no es únicamente la jurisdicción ordinaria la competente para resolver los conflictos de intereses, sino que también lo es la jurisdicción especial de los amigables componedores y de los árbitros. Se hubiesen puesto de acuerdo los dos Gobiernos en apreciar que es una necesidad pública la aplicación del art. 487, cumplido con tal escrupulo en el Parlamento catalán que incluso invoca expresamente la Ley de Enjuiciamiento Civil para encomendar a la jurisdicción ordinaria la ejecución de los laudos, tal como la misma ordena. Y no estaríamos ahora aquí porque el Gobierno, que ha sido

tan lento y cauto en agraviarse por una supuesta invasión de atribuciones por parte de la Generalidad, al darse cuenta de que tenía en las manos ese procedimiento del art. 6º. para llegar a un acuerdo con aquélla, se hubiese puesto realmente de acuerdo sobre cosa tan nimia como es la de si se puede o no someter a un procedimiento de conciliación y arbitraje un conflicto de intereses entre propietarios y cultivadores.

Pero lo cierto es que esto no es una cuestión de Derecho procesal. Es aquí, señor Fiscal; es aquí que hay que invocar la libertad legislativa de Cataluña en materia de política social agraria que es absoluta, según el art. 12 letra b del Estatuto de Cataluña, sin más limitación que la que el mismo señor Fiscal ha recordado, o sea, las Leyes sociales que hacen referencia a las relaciones entre los obreros y los patronos con motivo del trabajo industrial.

En todas las Leyes agrarias actuales, en todas las del mundo, sin faltar una, de lo primero que se han preocupado, al regular el régimen de las explotaciones agrícolas, ha sido como lo más elemental de evitar los conflictos entre los cultivadores y los propietarios y, si se presentan, de resolverlos rápidamente. Y en todas, absolutamente en todas, se crean estas Juntas Arbitrales; no en las Leyes de la postguerra, sino aun en aquellas Leyes de Irlanda a que me refería, ya existen las Juntas Arbitrales. ¡Cómo que no hay otro medio de resolver este problema! Entre vosotros hay juristas eminentes. ¿A cuál de vosotros se le puede ocurrir que un conflicto de esta magnitud de carácter social deba someterse a las lentitudes de un juicio ordinario de menor cuantía, o un juicio ordinario de mayor cuantía, según sea el importe de las rentas que se discutan? Es un absurdo en el que nadie absolutamente ha caído hasta ahora.

## EL ASPECTO SOCIAL DE LOS PROBLEMAS AGRARIOS

Lo urgente, lo inmediato, lo elemental en materia de política agraria, es impedir los conflictos del campo. Si se presentan, desgraciadamente, conjurarlos en la forma más rápida posible, y hasta ahora no se ha inventado otra que ésta : someterlos a un juicio rápido de conciliación y arbitraje. Ahora, ¿vosotros vais a decidir que esto es un abuso y habéis de resolver, frente a un problema social, que debe continuar en todas sus agravaciones para que no se infrinja un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en lo cual se dice que la jurisdicción para resolver los conflictos es la jurisdicción ordinaria? Pero, ¿va a haber algún señor de los que componen el Tribunal capaz de enfrentarse con este problema con un criterio de esta naturaleza? Estaba seguro, antes de llegar aquí, que no encontraría en este Tribunal nadie capaz de aceptar un criterio semejante, estaría en pugna, no ya con las razones de buen sentido que he expuesto, sino en pugna con toda la tradición de las Leyes agrarias que, como he dicho antes, vienen elaborándose de cerca de un siglo. Con esta seguridad quiero y debo yo insistir en que esta parte de la Ley no plantea un problema de Derecho procesal, sino un problema de política agraria, que es de la libre y absoluta competencia del Parlamento catalán.

Y decía el señor Fiscal, reproduciendo argumentos que en otra parte se han hecho : ¿Es posible presentar aquí una Ley en que se mezclan las materias de este modo, que unas son de Derecho civil y otras de Derecho procesal y otras de Derecho social y otras de política agraria? ¿Es que hay alguna disposición —me permito preguntar— o algún criterio jurídico que ordene que las Leyes sean compartimentos, estanco, para cada materia? Entonces llegaríamos a la siguiente conclusión : para que vosotros podáis resolver que el Parla-

mento catalán está dentro de sus atribuciones, de esta Ley hay que hacer dos; en la primera se regularían los contratos de cultivo, por ser materia de Derecho civil; y en la segunda como materia de política agraria, se regularía la solución de los conflictos derivados de la Ley de Contratos de Cultivo. Si todo se reduce a que de una Ley hagamos dos, no habrá inconveniente. Pero, al fin y al cabo, en todas partes estas materias se han confundido en una sola Ley, y ahora ya existe como una sola Ley la del Parlamento catalán.

No creo que sobre esto deba insistir ya más.

Podemos pasar a otro reparo.

#### LA LEY NO AFECTA A LA ORDENACIÓN DE LOS REGISTROS

Dice el Gobierno, hoy el Ministerio Fiscal. ¡Ah! En esta Ley se crea, se manda crear un Registro especial de contratos de arrendamiento y, según el art. 15 de la Constitución, esto es exclusivo del Estado. De modo que en esto también hay una infracción constitucional. Y, además, se da derecho al cultivador que está en condiciones de adquirir la propiedad a que obtenga anotación preventiva de su derecho en el Registro de la Propiedad cuando haya empezado a pagar el primer plazo; anotación preventiva que se convertirá en inscripción definitiva cuando haya pagado el último plazo, y esto infringe también el precepto constitucional que somete a la exclusiva competencia del Estado la ordenación de los registros e hipotecas.

En cuanto a lo primero, creación de un Registro especial para los contratos de cultivo, no hay discusión posible. Ya ha dicho

mi distinguido compañero el señor Fiscal, aludiendo al escrito - que presenta el Presidente de la Generalidad, que para nosotros los Registros de que habla la Constitución son los Registros que existían en la fecha de la Constitución : Registros de la Propiedad, Civil, de Ultimas Voluntades, etc., y otros que dependen todos de la Dirección General de los Registros y del Notariado. Pero dice que la Constitución no hace esta distinción; pero, ¿es que la Generalidad no puede ordenar que se inscriban los arrendamientos - agrícolas en un Registro creado por ella? Pues esta facultad no la tiene sólo la Generalidad. La tienen todos los Ayuntamientos de - España, sin dar ni siquiera conocimiento, a los Gobernadores civiles. En el Ayuntamiento de Barcelona hay un fichero casi completo, que va completándose cada día más, de todos los contratos de arrendamientos urbanos. Seguramente en el de Madrid lo tienen también. Lo han creído necesario por motivos de Estadística para conocer el movimiento de los alquileres, el movimiento de la población por los trasladados y por otras múltiples razones. Sin dificultad se ha ordenado crear este Registro que se llama fichero. ¿Es que vamos a discutir ahora si es o no competencia de la Generalidad crear - este Registro seguros de que la tendría si en vez de Registro se - hubiera llamado fichero. Pero, ¿es que pueden llegar estas cuestiones a cosa tan nimia? Me parece un poco impropio de la alta función del Tribunal de Garantías Constitucionales. Puede la Generalidad crear este Registro y otros Registros más; la Generalidad y todos los Ayuntamientos y Diputaciones de España. ¡No falta más - que tuviésemos que suspender toda facultad de formar todas las estadísticas que faltan para no afectar la gran función de crear un Registro!

Algo más importante parece el segundo problema. Pero en cuanto a este segundo problema la verdad es que el Parlamento catalán no ha ordenado nada sobre los Registros; ha observado estrictamente la Ley Hipotecaria. Dice la Ley Hipotecaria, en su art. 1º., que los Registros de la Propiedad tienen por objeto la inscripción o anotación de los actos o contrataciones relativas al dominio y demás derechos reales sobre inmuebles, y el segundo ordena la inscripción de toda clase de derechos reales; de modo que yo, un particular, puedo constituir sobre mi finca un derecho real, cualquiera, a favor de mi vecino; puedo reconocerle a mi vecino sobre mi finca este mismo derecho que ha creado el Parlamento catalán, o sea, el derecho a adquirirla al cabo de determinado número de años, pagando un precio en plazos anuales, con un tanto por ciento de interés; y como haya un contrato a su favor que establezca esto, lo lleva al Registro, y en cumplimiento de las disposiciones de la Ley Hipotecaria, se lo inscribe. La Generalidad no ha hecho más que esto: crear un derecho real y decir que ese derecho real es inscribible.

Por lo que hace referencia a la anotación preventiva, ahí tenéis el art. 42 de la Ley Hipotecaria que establece los distintos títulos que pueden ser objeto de ella, y en su número 10 dice "los que ordene ésta u otra Ley". Pues la Ley del Parlamento catalán es esa otra Ley a que se refiere dicho precepto.

¿Es que el Parlamento dice que la anotación preventiva se hará de manera distinta a como dispone la Ley Hipotecaria? No. ¿Es que impone a los Registradores para esto unas obligaciones especiales que antes no tenían? Tampoco. Pues si nada de esto está en la Ley, para nada ha infringido el precepto constitucional; pero esto justifica las palabras que decía al principio de que os vais a enfrentar con la resolución de un problema tan importante como el problema agrario con el escrúpulo de tropezar con una interpretación de un inciso del art. 42 de la Ley Hipotecaria.

Pero todos los argumentos del Fiscal, que se podía hacer contra todo el mundo, no se pueden hacer contra la Generalidad. ¿Por qué? Porque en el art. II del Estatuto se dice que el Tribunal de Casación de Cataluña tiene facultad, en última instancia y sin ulterior recurso, para declarar cuáles son los títulos inscribibles en el Registro de la Propiedad que se refieran a materia de Derecho civil en Cataluña. Y cuando se le traspasó este Derecho, en el Decreto que hemos recordado, según la norma 10, se reprodujo textualmente lo que se dice en el citado art. II : "Tiene el Tribunal de Casación la facultad de resolver -él, no la Dirección de los Registros, él, en última instancia y sin apelación- sobre la calificación de los títulos que deben inscribirse." Y la Generalidad, que se encuentra con un organismo de derecho creado por ella, el cual tiene la facultad de declarar o no inscribibles todos los títulos que creen algún derecho real, ¿va a cruzarse de brazos y admitir que lo que puede hacer su Tribunal de Casación - no puede ordenarlo su Parlamento? ¿No puede declarar inscribibles tales o cuales títulos en materia de Derecho civil cuando del juicio inapelable del Tribunal de Casación de Cataluña depende que - sean o no inscriptos? Si gustásemos de subterfugios, la manera de burlar este escrúpulo legal sería encomendar al Tribunal de Casación que declarase inscribibles todos los títulos en que se haya reconocido el derecho de adquisición de la Ley de Contratos de Cultivo.

¿Para qué subterfugios si este derecho del Tribunal de Casación, reconocido por la Constitución y el Estatuto, es una - consecuencia de la libertad legislativa del Parlamento catalán en materias de Derecho civil?

Vamos a otro punto. Dice el escrito del Gobierno, que recordaba ahora el señor Fiscal, que según la Ley Agraria, según aquella base 22, a la cual nos hemos referido, se va a dictar - una Ley general de Contratos de Cultivo. Está en proyecto y puede darse el caso de que, una vez dictada, haya una duplicidad de Leyes y se cree un conflicto.

Si de mi modesto consejo dependiese la acción futura - del Gobierno de la Generalidad, cuando esta Ley que está en proyecto (y que por estar en proyecto no puede ser objeto de discusión en este recurso) fuese Ley, la Generalidad no recurriría en competencia contra ella. Puede la Ley futura decir que es de aplicación a todo el territorio de la República sin ninguna dificultad, y no habrá conflicto ni habrá duplicidad de Leyes, porque - lo que habrá querido decir es que es de aplicación en todo el territorio de la República si no hay una Ley especial que con arreglo a la Carta constitucional del país autónomo regule la misma - materia.

Para que hubiese realmente conflicto sería necesario que la futura Ley dijese que se aplicará en todo el territorio de la República, incluso en las Regiones autónomas que tengan Ley especial, pero entonces entraría en juego el art. 19 de la Constitución.

Y esto es tan sencillo, que un pequeño ejemplo basta - para probarlo. Ahora se dicta esta Ley, por ejemplo, diciendo que rige en todo el territorio de la República, porque esto se puede - decir, y al cabo de un mes se reconoce un Estatuto a las provincias vascongadas dándoles las mismas facultades legislativas que ahora tiene el Parlamento de Cataluña. ¿Qué pasaría? Pasaría sencillamente que el Parlamento de Vasconia diría en una Ley lo que quiere - que rija en su país sobre contratos de cultivo, y cuando esta Ley

del Parlamento vascongado fuese realmente una Ley, no se aplicaría la otra Ley de carácter general. Para nosotros, los catalanes, esto no es ninguna situación excepcional; en esta situación hemos vivido siempre y continuamos viviendo ahora. Allí rigen todas las Leyes generales de España, porque todas regían hasta ahora en que no había Estatuto ni facultad legislativa. Todas rigen con preferencia; pero ahora, teniendo la libertad legislativa, a medida que el Parlamento de Cataluña va legislando, se van aplicando las Leyes del Parlamento catalán en materias de su competencia, que hasta ahora estaban regidas por las Leyes generales.

#### NO HAY DUPLICIDAD DE LEGISLACIÓN

Y en cuarto al Código Civil, que rige aún allí y continuará rigiendo como supletorio, a medida que el Parlamento catalán vaya supliendo lo que es necesario que se supla, irá dejando de aplicarse el Código Civil en lo que la Constitución no ha dejado subsistente. De modo que no hay absolutamente ninguna duplicidad de legislación, ni para nosotros, ningún conflicto, aun cuando la Ley que está ahora pendiente de discusión en el Parlamento de la República, llegue a ser declarada de aplicación a todo el territorio nacional. Regirá mientras no haya una Ley especial en el territorio autónomo que regule esta materia y podrá regir aun habiendo esta Ley especial, como supletoria en lo que la Ley regional no hubiese previsto.

Y me parece que con esto termino los reparos que se han opuesto a la Ley del Parlamento catalán en el orden legal.

LA VARIEDAD DEL DERECHO CIVIL Y  
LA LIBERTAD LEGISLATIVA

Es posible que entre los señores que con tanta benevolencia me han hecho el honor de escucharme se haya formulado algún otro reparo. Algunos pueden creer que es un mal para la República la diversidad de legislaciones civiles y la libertad legislativa de las Regiones autónomas y estimar honradamente que ha de hacer por su parte lo posible para conseguir la desaparición de tal diversidad y llegar a la unificación del Derecho.

Yo me permitiré decirles a los que así discurren que se sirvan recordar que, en cuanto a Cataluña, llevamos una experiencia de dos siglos que demuestra que este procedimiento es un mal procedimiento para lograr la unificación del Derecho. Lo que realmente sirve para unificar el Derecho es dar libertad a cada personalidad que la tenga propia, para que la evolución de su derecho se desarrolle normalmente, a fin de que coincidan todas juntas en una unidad superior. La unidad de la legislación surge en su momento por el influjo de algún pensamiento jurídico de carácter universal.

Yo tuve ocasión de decir en el Parlamento, precisamente - cuando se discutía este artículo, lo mismo que acabo de decir, y añado, además, que es muy posible que, siguiendo las corrientes del Derecho moderno, nuestras coincidencias sean tales, gracias a nuestra libertad legislativa, que dentro de poco nuestras variedades - en cuanto a la regulación del Derecho civil sean de orden secundario, porque hayamos coincidido en muchos puntos fundamentales. Dejad - libre esta facultad legislativa, en la absoluta seguridad de que - así se abre un camino único, el mismo que se ha seguido en todos los pueblos del mundo, para llegar a la unificación, que es algo muy distinto de la uniformidad impuesta por decretos del Poder.

## EL DERECHO DE PROPIEDAD

Otro reparo que se ha hecho en otras ocasiones y que - probablemente está en el espíritu de alguno de vosotros, es que con esta Ley se abre una brecha en el derecho de propiedad. En - interés de los que así piensan ha presentado en realidad el Gobierno este recurso. No saben bien lo que han hecho, porque un pueblo - que ha elaborado esta Ley que ahora discutimos y que con esta Ley se conforma, es evidente que no es ningún peligro para el derecho de propiedad. ¿No habéis visto, examinando cada uno de sus preceptos, cómo se afirma la aspiración de que los que ahora no son propietarios lleguen a serlo, porque entienden la propiedad igual que los otros? Yo lo dije ante una multitud reunida en una de las zonas más afectadas por este problema y lo repito aquí. El derecho de - propiedad, que es el más contingente y aleatorio de todos los derechos, necesita tener jurídicamente la condición de perpetuo. Si - alguien atenta contra esa perpetuidad, el derecho espontáneamente busca la base en que apoyarla y esta base la encuentra en algo - que el mundo considera realmente perpétuo, que es el Estado. ¡Ah! Yo me imagino a Cataluña, el pueblo que ha aceptado esta Ley, yo me la imagino el día en que en nombre del Estado alguien pretenda arrebatar a los que hoy se llaman trabajadores del campo la propiedad adquirida antes y después de esta Ley. Yo no diré como el profesor Roussell, cuando hablaba de los irlandeses: "Plomo fundido caerá sobre los emisarios del Estado que quieran incautarse de las propiedades, a costa de tantos afanes ganadas por los campesinos." Yo no diré esto porque la vida de los cultivadores de mi país es bastante dulce para no compararla con la vida miserable de los antiguos campesinos irlandeses y no son crueles, pero yo me imagino - levantarse sobre todo el campo de Cataluña una democracia campesina como se levantó en Finlandia, tan semejante en sus instituciones jurídicas, y el movimiento que se llama de Lapua, la pequeña

aldea finlandesa donde surgió la protesta contra la posibilidad de que las propiedades pasasen a serlo exclusivamente del Estado; será un movimiento igual que tomará el nombre de una aldea ignorada de Cataluña y, abrazados los nuevos propietarios con los antiguos, con los mismos que han inducido al Gobierno a presentar este recurso, veremos, no imponerse un dictador, porque mi tierra no es de dictadores, pero sí levantarse una masa campesina en la que cada uno formará un haz con los otros, para imponer a quien sea, como han hecho sus iguales de Finlandia, la voluntad inquebrantable de todos de mantener íntegra su posición jurídica sobre la tierra.

CONFIANZA EN LA JUSTICIA DEL FALLO  
LAS PASIONES POPULARES Y EL PRESTIGIO DEL TRIBUNAL

Estas son, señores, todas las consideraciones que debía someter a vuestro juicio. Yo espero que sean suficientes para que este recurso sea desestimado. Termino mi informe con la misma expresión de confianza con que lo he empezado en la serenidad y la imparcialidad de los fallos de ese Tribunal. Yo no sé, ni quiero saber, ni quiero mencionar las reacciones que en la opinión pública de Cataluña podría producir un fallo que anulase una Ley del Parlamento catalán. Esto es un problema de Gobierno que ni a vosotros corresponde -y a mí mucho menos- resolver. Lo que sí importa que vuestros fallos no entreguen la autoridad y los prestigios del Tribunal de Garantías a la voracidad de las pasiones populares. Esto es lo que a todos nos importa, y en defensa de esos prestigios, que nos son indispensables, me levanto a suplicar - que sea desestimado el recurso de competencia que se ha formulado en nombre del Gobierno de la República.

### RECTIFICACIÓN DEL SEÑOR FISCAL

En primer lugar, para rectificar la insinuación que se ha hecho por el representante de la Generalidad al decir que algunos elementos o algunas personas han visto en esta Ley un ataque al derecho de propiedad y que en nombre de esas personas ha obrado el Gobierno al interponer este recurso. El Gobierno ha interpuesto esta cuestión de competencia después de oír al Consejo de Estado y previo informe de la Sala del Tribunal Supremo. Y lo interpone en su propio nombre. Insinuar otra cosa es una suspicacia que podrá manejarse como arma en las luchas políticas, pero que no puede emplearse ante los Tribunales de Justicia.

Se ha dicho que el escrito en que la cuestión de competencia se formulaba era una simple consulta, no el planteamiento de una cuestión de competencia. En la súplica de ese escrito expresamente, terminantemente, categóricamente, se dice que se entabla una cuestión de competencia por haberse invadido por el Parlamento de Cataluña las funciones legislativas del Estado español en materia que ahí se señala.

Y no voy a rectificar otras muchas cosas que tengo aquí anotadas en atención a lo avanzado de la hora. Pero sí he de hacer una observación : la de que constantemente con argumentos de carácter jurídico se han empleado por el representante de la Generalidad, argumentos de carácter político, aludiendo a las posibles - repercusiones que para la paz pública puede tener la resolución que aquí se dé por el Tribunal de Justicia e incluso tildando de cosas baladíes las infracciones que puedan alegarse del texto constitucional y del Estatuto de Cataluña, poniendo en parangón la trascendencia que esas infracciones pueden tener con la que pueden tener las pasiones populares. Yo creo que estas cosas no se pueden tener en cuenta por un Tribunal de Justicia. Pero es que además casi no puede oírlas. Porque si por motivos políticos, de conveniencia -

inmediata o de pacificación pública, han de resolverse las cuestiones, sobran los Tribunales de Justicia, porque éstos han de resolverlas siempre con criterio jurídico. Y nada más.

RECTIFICACIÓN DEL SEÑOR COMISARIO DE LA GENERALIDAD

Muy brevemente, para corresponder a la amabilidad que ha tenido conmigo el señor Fiscal, al querer recoger algunas de mis manifestaciones, Yo he de recordar a los señores del Tribunal que no he dicho, al final de mi informe, que podía tener esta Ley repercusiones en el orden público en Cataluña. He dicho muy claro — y lo repito que no lo quiero saber, que no lo quiero siquiera mencionar. Es un problema de Gobierno, que no corresponde al Tribunal, el cual, mucho menos, lo ha de resolver. Lo que sí entiendo que corresponde al Tribunal es defender su propio prestigio, y esto — sí que es de la competencia del Tribunal de Garantías. El efecto que pueden producir sus fallos en la opinión puede ser el de entregar a la voracidad de las pasiones populares el prestigio del Tribunal.

PALABRAS FINALES DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL,

SEÑOR ALBORNOZ

La Presidencia tiene que decir al señor Comisario que, aun agradeciendo mucho sus palabras, no necesita de la excitación de nadie para defender ante todo y sobre todo el prestigio de este Altísimo Tribunal. Ante él se encuentra un hecho que es una realidad social y un problema jurídico. A esos dos resultados ha de — atenerse, en todo momento, sin daño para su alto prestigio.

Visto.

319 b:

ESCRIT DEL GOVERN DE LA GENERALITAT  
DE CATALUNYA CONTESTANT LA QUESTIÓ DE  
COMPETÈNCIA

AL TRIBUNAL DE GARANTIAS CONSTITUCIONALES

El Gobierno de Cataluña y, en su nombre, el Presidente - de la Generalidad, cumplimentando acuerdo del Consejo Ejecutivo, comparece ante ese Tribunal en la cuestión de competencia legislativa promovida por el Gobierno de la República mediante escrito de fecha 4 del actual, contra la Ley de Contratos de Cultivo promulgada el día II de abril Último y publicada en el Butlletí Oficial de la Generalitat del dia 12 siguiente. Y, de conformidad con lo dispuesto en el apartado nº 2 del art. 57 de la Ley Orgánica de ese Tribunal, pasa a contestar el referido escrito, en los términos siguientes:

EXTEMPORANEIDAD DE LA CUESTIÓN DE INCOMPETENCIA LEGISLATIVA

PROMOVIDA POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Antes de entrar en el fondo de la cuestión, o sea, de lo que es materia de la competencia legislativa, visto que la Ley atacada se publicó el día 12 de abril Último, y que la cuestión de competencia la entabla el Gobierno de la República mediante escrito de 4 de mayo siguiente, este Gobierno debe hacer la declaración previa

de que entiende que la referida cuestión ha sido promovida fuera - de término, extemporáneamente.

El art. 56 del cap. I. "Cuestiones de Competencia Legislativa", del tít. V, "De los Conflictos entre el Estado y las Regiones autónomas y de éstas entre sí" de la Ley Orgánica de ese Tribunal, dice : "Las cuestiones de competencia se deberán plantear dentro de los veinte días siguientes a la publicación de dichas disposiciones (las legislativas del Estado o de la Región autónoma que se consideran afectadas de incompetencia) en la Gaceta de Madrid, o en los respectivos periódicos oficiales de las Regiones autónomas."

Ahora bien : Desde el día 13 de abril, día inmediato al de la publicación de la Ley de Contratos de Cultivo, al 4 de mayo, fecha del escrito del Gobierno de la República promoviendo la cuestión de competencia legislativa, han transcurrido más de veinte días. Este Gobierno considera evidente que los veinte días de que habla el art. 56 de la Ley Orgánica de ese Tribunal son veinte días naturales.

Según el art. 7º. del Código Civil : "Si en las Leyes se habla de meses, días o noches, se entenderá que los meses son de treinta días, los días de veinticuatro horas y las noches desde que se pone hasta que sale el sol. Si los meses se determinan por sus nombres, se computarán por los días que respectivamente tengan." Por tanto, ante este texto legal, resulta claro que los veinte días a que hace referencia el art. 56 de la Ley Orgánica del Tribunal cuando habla del término en que las cuestiones de competencia deberán ser planteadas -dentro de los veinte días siguientes al de la publicación- son veinte días naturales.

Por otra parte, el referido término de veinte días, no es de creer que el legislador lo fijase de una manera arbitraria y caprichosa : no se trata, a juicio de este Gobierno, de un señalamiento hecho empíricamente, abandonándolo a la casualidad, sino que, por el contrario, lo considera homologado con otro precepto legal, claro y muy conocido : Se refiere al artículo 1º. del Código Civil, a cuyo tenor : "Las leyes obligarán en la Península, Islas adyacentes, Canarias y territorios de África sujetos a la legislación peninsular,

a los veinte días de su promulgación, si en ellas no se dispusiere otra cosa. = Se entiende hecha la promulgación el día en que termine la inserción de la Ley en la Gaceta."

El art. 35 del Estatuto Interior de Cataluña se relaciona exactamente con el art. Iº. del Código Civil. Es seguro que el legislador catalán también tuvo presente la conveniencia de que el plazo señalado para que las leyes adquieran fuerza de obligar, fuese concordante en las Legislaciones de la República y de la Región autónoma, atendidos los reflejos que este hecho pueda tener en las relaciones y conflictos entre el Gobierno de la República y el de Cataluña.

El nexo que establecemos entre los arts. Iº. del Código Civil, 36 del Estatuto Interior de Cataluña y 56 de la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales, es consecuencia de un razonamiento elemental de lógica y, por tanto, norma adecuada de buena interpretación jurídica.

Pues bien : es lógico y jurídico, repetimos, suponer que el legislador, en el art. 56 de la Ley del Tribunal, fijase el plazo a que el mismo se refiere de acuerdo con el art. Iº. del Código Civil -veinte días naturales-, toda vez que produciendo las cuestiones de competencia legislativa, si prosperan, el efecto de anular las disposiciones legales atacadas y todos sus actos de ejecución (art. 59 de la Ley del Tribunal) ha de estimarse perturbador que se busquen y obtengan tales efectos cuando la Ley tildada de incompetencia ha sido ya legítimamente puesta en vigor, por haber transcurrido el plazo de veinte días, pasado el cual en Cataluña, como en los demás territorios de la República, las leyes son obligatorias, según los textos legales.

Considera el Gobierno de la Generalidad que, aun en el caso de que los preceptos aducidos no fuesen suficientes, el hecho de que en la Ley de 14 de junio de 1933 no se haga la más mínima alusión a días hábiles e inhábiles, cierra el paso a tal distinción, del todo extraña a los arts. 7º. y Iº. del Código Civil y a su alcance.

El descuento de los días inhábiles en los términos deriva del art. 304 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y es privativo de los términos procesales, los cuales únicamente afectan las cuestiones que se hallan en trámite ante la jurisdicción judicial, si tales términos tienen por punto de partida un emplazamiento, una notificación o una citación.

Lo dice bien claro el art. 303 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y lo han ratificado, declarando que ni el art. 303 ni el 304 – del propio Cuerpo legal (que manda descontar de los términos judiciales señalados por días, los que no sean hábiles para las actuaciones judiciales) son aplicables cuando no se trata de términos judiciales, las sentencias del Tribunal Supremo de 24 de marzo de 1893 y 8 de abril de 1920.

Para que de un término no judicial, fijado por días, se descontuen los inhábiles, es necesario que la Ley que da el término, lo diga expresamente. Si la ley no crea la excepción, los días de un término no judicial son días naturales.

En las sentencias citadas, lo declara el Tribunal Supremo, refiriéndose a los términos fijados en los arts. 1524 y 1637 del Código Civil y 1062 de la Ley de Enjuiciamiento. No cree el Gobierno de la Generalidad que quepa sustentar que los términos que fijan – los arts. 1524 del Código Civil, para ejercitar el derecho de retracto; 1637 del mismo Código, para hacer uso del derecho de tanteo, y 1062 de la Ley Procesal, para intervenir judicialmente un patrimonio sujeto a testamentaría deban computarse por días naturales y en cambio el fijado en el art. 56 de la Ley del Tribunal sea de días – hábiles, es decir, descontando los festivos.

Sostener otra cosa habría de hacerse, o prescindiendo de lo legislado con carácter general, o por encontrarse en la Ley de 14 de junio de 1933 algún precepto especial que justificase la excepción.

El Gobierno de la Generalidad debe confesar que no ha sabido encontrar este precepto en la calendada Ley.

LA LEY RECURRIDADA ENCAJA INTEGRAMENTE DENTRO  
DEL AREA DE COMPETENCIA LEGISLATIVA DEL PAR-  
LAMENTO CATALAN.

La circunstancia de no existir trámite previo de admisión en las cuestiones de competencia legislativa entre el Estado y las Regiones autónomas, o de éstas entre sí, que se promuevan ante ese Tribunal, obliga al Gobierno de Cataluña a entrar en la cuestión de fondo, sin que esto implique la más mínima flaqueza en el sostenimiento de la extemporaneidad de la cuestión planteada por el Gobierno de la República, y sin que el Gobierno de la Generalidad quiera eludir, con la resolución previa de aquel extremo, la defensa de la plena corrección constitucional y estatutaria con que el Parlamento de Cataluña ha procedido al aprobar la Ley de II de abril Último.

Entrando en la cuestión de fondo, lo primero que sorprende al leer el escrito entablando la cuestión de competencia es la timidez con que el Gobierno de la República la formula. No se dice, de una manera concreta, que la llamada Ley de Contratos de Cultivo infrinja, en tal punto y por tal razón, el art. 15, nº. Iº., de la Constitución de la República y los artículos II y 12 del Estatuto, sino que, copiando a la letra el primero de los mencionados preceptos y añadiendo que los arts. II y 12 del Estatuto subordinan las facultades legislativas en la Generalidad al repetido art. 15, se limita a decir, en términos generales, "... que las disposiciones del Parlamento catalán al regular los contratos de cultivo en sus varias modalidades y en su simple aspecto civil, social o procesal; determinando nuevas bases de contratación, estableciendo los efectos de los contratos, creando Juntas Arbitrales con un procedimiento especial entre ellas, regulando lo que denomina derecho de adquisición, creando un Registro especial de tales contratos y una anotación preventiva en el Registro de la Propiedad con tan singulares efectos que modifica la ordenación hipotecaria del Estado, puede estimarse que está en oposición con las normas que, según los artículos precitados, fijan las respectivas competencias legislativas

del Estado y de la Región autónoma".

Esta timidez, en derecho procesal estricto, constituye un defecto de la demanda, porque le falta la claridad y precisión que deben acompañarla y porque se omiten las conclusiones que el demandante debe fijar para que su acción prospere. Es lo que ya en el procedimiento formulario del Derecho romano, integraba la intentio, respecto a la cual debía pronunciarse el Juez, dictando la Sentencia qua actor desiderium suum concludit.

Si, como dice el Gobierno de la República en el hecho - segundo del escrito que se contesta, le ha inducido a interponer el recurso que utiliza la circunstancia de estimar que algunos de los preceptos contenidos en la Ley de Contratos de Cultivo podían exceder de las atribuciones legislativas de la Región autónoma, parecía obligado que hubiese acompañado la afirmación de precisiones que sirvieran para orientar de una manera seria la discusión y resolución del conflicto y, sobre todo, que expresase concretamente los artículos de la Ley atacada, que determinan nuevas bases de contratación, acusación, ésta, la más grave de todas las formuladas, pues decir que una Ley regulando contratos especiales establece los efectos de los contratos, es una gran verdad, desprovista, no obstante, de toda consecuencia para la resolución de una cuestión de competencia; porque - si se tiene competencia para regular un contrato, ha de tenerse, también, para establecer sus efectos, y no hay nada -sería absurdo- en el art. 15 de la Constitución ni los arts. II y 12 del Estatuto que lo pongan en duda.

Hay que situar el problema en su verdadera realidad, huir de divagaciones y sutilezas. Haciéndolo así, tiene el Gobierno de la Generalidad que empezar por proclamar lo que se omite en el escrito del Gobierno de la República; que la Ley de Contratos de Cultivo, - aunque en la misma se trata del arrendamiento, aparcería, masovería y "rabassa morta", es una Ley reguladora de la propiedad de la tierra.

Esta verdad es necesario decirla y tenerla presente, porque el art. 15, nº Iº., de la Constitución, que reivindica para el Estado español la legislación exclusiva de distintas materias, no incluye entre las reservadas las leyes reguladoras de la propiedad de la tierra, y el art. II del Estatuto de Cataluña no pone a la Legislación exclusivamente civil, atribuida a la Generalidad otro límite que el derivado del nº Iº., del art. 15 de la Constitución, sin que pueda tampoco olvidarse que el apartado b del art. 12 del propio Estatuto reconoce a la Generalidad la legislación - exclusiva y la ejecución directa en materia de política y acción social agraria, exceptuando el régimen minero y las bases mínimas de montes, agricultura y ganadería, en cuanto afecte a la riqueza y coordinación de la economía nacional.

Es, por tanto, de toda evidencia, se examine la cuestión como se quiera, incluso con el prejuicio de encontrar lo que se busca, que, de acuerdo con los artículos citados, y, además, el 16 de la propia Constitución, que establece que en las materias no comprendidas en los arts. 14 y 15 corresponderá a las Regiones autónomas la legislación exclusiva y la ejecución directa, según dispongan los Estatutos aprobados por las Cortes, que para Cataluña, el régimen de propiedad de la tierra no es intangible, pues, involucrado como se halla dentro de la Legislación civil y la política y acción social agraria, las cuales le han sido atribuidas por el Estatuto, puede Cataluña dictar, regulando tal materia, todas las leyes especiales que su Parlamento considere convenientes a las necesidades de la Región autónoma.

No es posible, en el momento actual, legislar sobre la propiedad de la tierra prescindiendo de las corrientes modernas que señalan unas directrices a la política y acción social agraria, defendidas por hombres de derecho, pero impuestas muchas veces como una medida urgente de orden público. En todo el mundo se ha hecho, y lo han practicado copiosamente los Gobiernos de la República. No tenía que ser una excepción este Gobierno de la Generalidad. 327

La llamada crisis del derecho civil tiene por causa - destacada, de una parte, la situación económica del mundo, en su estado de desequilibrio después de la gran guerra; de otra parte, la quiebra, parcial si se quiere, pero quiebra en definitiva, del jus privatum romano, fundado en la utilitas singulorum del Código de Napoleón, del cual se ha dicho que ignoraba a los obreros, y, en fin, del descrédito en que han caído, mientras se buscan nuevas fórmulas de justicia, la teoría de la autonomía individual, como base de los contratos, según la doctrina clásica.

En una palabra : la tendencia moderna, buena o mala, pero que es una realidad a la cual nadie puede substraerse, tiende a socializar el derecho; la propiedad, pasa de derecho subjetivo a función social; el propietario que no cumple la función , será - substituido por quien esté en mejores condiciones, para llevar a término la finalidad jurídico-económica que la nueva concepción - propugna. (De que esta tendencia ha sido fuerte en España dan fe los arts. 43, 44, 45 y 47 de la Constitución y las Bases de la Ley de Reforma Agraria, a las cuales más adelante tendremos que referirnos nuevamente.)

Todo lo anteriormente expuesto es tan cierto, que los - civilistas más destacados desean ir con la mayor rapidez a la reforma del Código Civil "para infiltrarle un espíritu nuevo e impregnarle las instituciones civiles de hábito social". (José Castán, Hacia un nuevo derecho civil, pág. 68).

El derecho civil tiene, pues, una zona que linda, hoy, con el derecho social; pero este derecho no es, tratándose de regular la propiedad de la tierra, el que se halle comprendido en la legislación social de que habla el nº. Iº. del art. 5º. de la Constitución, porque aquella "Legislación social", es la llamada así por autonomía, o sea el derecho del trabajador asalariado, principalmente el obrero industrial. El derecho civil sobre regulación de la propiedad de la tierra, influído necesariamente por las exigencias de la política y acción social agraria (las dos de la competencia de la Generalidad), no es la legislación social que se

reservó el Estado en el nº. Iº. del art. 15 de la Constitución - de la Repúblíca.

Así lo entendió, con toda razón, la Sección de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalidad, encargada de elaborar el proyecto de Ley de Contratos de Cultivo, como se manifiesta en la exposición que la precede. Los autores de la misma -jurisconsultos de reconocido talento y de un sentido conservador acusado la mayoría de ellos- dicen, en la mencionada exposición, lo que a seguido copiamos : "La Sección especial se encontró planteada como primera cuestión, la de determinar el área que en la materia a regular correspondía a la competencia legislativa de Cataluña, al efecto de salvar, en determinadas zonas extremas, las limitaciones que impone el Estatuto del 15 de septiembre de 1932 y la Constitución de la Repúblíca.

El art. II del Estatuto reconoce a Cataluña la legislación exclusiva en materia civil, exceptuando aquello que dispone el art. 15, nº. Iº. de la Constitución; y, entre las excepciones - que contiene -que, como a tales, son de interpretación restrictiva - no se hallan comprendidos los contratos de cultivo. El art. 12 del Estatuto dispone que corresponden a la Generalidad la legislación exclusiva y la ejecución directa en lo que se refiere a política y acción social agraria, aunque exceptuando la legislación social, - de conformidad con el párrafo primero, del art. 15 de la Constitución. La Sección especial, por tanto, ha podido actuar en un sector de amplia competencia, ya que el derecho social, que tiene por finalidad específica regular el desenvolvimiento del contrato de trabajo o de prestación de servicios, no afecta a los contratos de - cultivo, o sea de arrendamiento de cosas." (Acompañó, señalada de nº. 2, una copia traducida al castellano de la mencionada exposición.)

Un criterio substancialmente idéntico sostuvo la Sala - primera de la Audiencia Territorial de Barcelona, al informar, por orden del Tribunal Supremo, el recurso entablado por el señor José Vergés, alegando la inconstitucionalidad de la ley que para solucionar los conflictos derivados de los contratos de cultivo dictó el Parlamento de Cataluña el 26 de junio del 1933. Este informe lo suponemos en poder del Tribunal, pero, para el caso de que así no fuese, se acompaña copia del mismo, señalada de nº. 3 con este escrito.

No obstante, supongamos por un momento que la mencionada Ley de Contratos de Cultivo no es una Ley destinada a regular la propiedad de la tierra con normas de política social agraria, que el Parlamento de Cataluña ha creído pertinentes para la ordenación del uso de la tierra y para asegurar la paz del campo. Admitamos, a los efectos de la discusión, que dicha Ley no es más que una disposición legal, reguladora de todos los contratos afectados por la misma, o sea, como expresa el art. Iº., el de rabassa morta, aparcería, masoveria, arrendamientos de tierra y, en general, todos los actos y contratos, cualquiera que sea su denominación, por medio de los cuales se cede onerosamente el aprovechamiento de una finca rústica a persona distinta del propietario, siempre que sea la explotación de naturaleza agrícola.

Queda admitido. Pero, ¿acaso el arrendamiento de fincas rústicas, la aparcería, la masoveria y la rabassa morta, no son y han sido siempre considerados contratos de naturaleza civil y, por tanto, comprendidos, sin duda alguna, en la competencia legislativa atribuida a la Generalidad, en el art. II, en relación con el 12, - letra b del Estatuto de Cataluña, de acuerdo con el nº. Iº. del art. 15 de la Constitución?

Seguro está el Gobierno de Cataluña que esta pregunta no la contestaría negativamente ningún hombre de derecho. Civiles son los mencionados contratos, y el Código de 1889 y la jurisprudencia del Tribunal Supremo lo confirma reiteradamente.

Esta es la razón por la cual el ataque a la Ley de Contratos de Cultivo no se haga de frente, sino de flanco. La Ley ha sido dictada con incompetencia -dice el escrito demanda del Gobierno de la República- porque atenta "a las bases de las obligaciones contractuales, que se reservó el Estado en el nº. Iº. del art. 15 de la Constitución, tantas veces citado.

Por mucho que se deseara extender las facultades del Estado en materia legislativa, y de restringir las atribuciones de la Región autónoma, no es posible confundir los contratos con las bases contractuales, porque si se estableciera tal confusión, desaparecería de raíz la autonomía en el orden legislativo, y el artículo II del Estatuto constituiría sencillamente una mofa sarcástica. Si dicho criterio prevaleciese, Cataluña, en régimen autonómico, tendría su derecho en un estado de desamparo muy superior a aquel en que se encontraba estando vigente el art. 12 del Código Civil, que ocasionó en su día debates apasionados y que tantas mutilaciones debió sufrir después al interpretarse judicialmente su alcance.

Podrá discutirse si dentro del área de las bases de las obligaciones contractuales se halla comprendido todo el contenido de los títulos I y II del libro IV del Código Civil, o si tan sólo pueden acomodarse unos cuantos principios fundamentales, que es lo que sostuvo el eminentе civilista señor Sánchez Román, nada sospechoso atendida su competencia y posición adoptada, contraria al art. II del Estatuto, al discutirse éste en las sesiones del 16 y 17 de agosto de 1932.

Decía en aquella ocasión el señor Sánchez Román que « las bases de las obligaciones contractuales "son así como cuatro o cinco reglas cardinales, y lo demás ya no son bases generales de la contratación ..." "la vida contractual concreta, los tipos de negocio, todo eso, no está entregado a las bases generales de la contratación, sino a la variedad específica de cada una de estas legislaciones privativas..."

Tanto si dichas bases son media docena de reglas cardinales, como con acierto notorio decía el señor Sánchez Román, o la totalidad de los títulos I y II del libro IV del Código Civil, como creen otros, no es éste el momento de discutirlo, porque la Ley de Contratos de Cultivo no contiene, en verdad, otra base de obligación contractual que la que se formula en el art. 2º. al decir que los contratos de cultivo han de cumplirse de conformidad al uso y la buena fe, según los pactos convenidos siempre y cuando no estén en contradicción con los preceptos de la Ley, base ésta que no es una novedad, antes bien es una reproducción casi literal de la contenida en el art. 1258, que es uno de los preceptos comprendidos en el título II del libro IV del Código Civil.

En el escrito demanda del Gobierno de la República se hace referencia, también, extrayéndolo del informe del Consejo de Estado, y se señala como vicio de incompetencia, a que en la Ley de Contratos de Cultivo se regula el llamado derecho de adquisición. No dicen, empero, ni el Gobierno ni el Consejo de Estado, los motivos para creer que la regulación del derecho de adquisición, del que se ocupan los arts. 14, 43 y siguientes de la Ley y la segunda de sus disposiciones transitorias, constituyen una invasión legislativa; ni en qué precepto de la Constitución y del Estatuto viene comprendida dicha invasión; ni porqué no formulan cargos análogos

contra la regulación del derecho de redención (arts. 57 y 58) y del derecho de reserva (arts. 12 a 15 y 32) que la misma Ley consagra. Y así no es posible discutir, porque falta base de razonamiento que lo permita.

La competencia legislativa del Parlamento de Cataluña para la regulación de la propiedad de la tierra y especialmente de los contratos que cita el art. Iº. de la Ley en sus aspectos civil y de política y acción social agraria, cree este Gobierno ha quedado suficientemente razonada y huelga insistir. Cabe aún recordar, a mayor abundamiento, que el Código Civil admite el derecho de redimir todos los censos en el art. 1608; que el de redimir la enfitensis lo afirma también en el art. 1651; que el censo enfitéutico tiene notables analogías con algunos de los contratos regulados en la Ley de Cultivos; que el derecho de adquirir, no tiene nada de particular que, substancialmente, impida compararla con la redención de los censos; que el mismo comiso lo encontramos relacionado con la redención en el art. 1650 del Código citado, y, por último, que el antiguo derecho civil, en uno de los aspectos que mayor transformación ha sufrido es, en general, en materia de arrendamiento.

Las bases fundamentales de este contrato -precio cierto y tiempo determinado, según el art. 1543 del Código Civil- están en quiebra. Hoy están vivas la prórroga forzosa, la fijezza del precio dentro de una escala gradual, las prerrogativas de la propiedad denominada mercantil sobre los locales destinados al comercio, etc., etc. Por ello, hacer en España el asustado o el sorprendido, ante el derecho de adquisición de que habla la Ley de Contratos de Cultivo, al tiempo que se invocan también, como motivo de incompetencia, las bases de la reforma agraria de 15 de septiembre de 1932, es una cosa insólita, que desorienta, pero no convence.

Otra objeción hace a la Ley de Contratos de Cultivo, - por razón de incompetencia, el escrito del Gobierno de la República, del que venimos ocupándonos, conjuntamente con sus soportes : los informes del Consejo de Estado y de la Sala del Tribunal Supremo. En el fundamento de derecho cuarto se dice que la creación de un Registro especial de los contratos de cultivo y la anotación preventiva en el Registro de la Propiedad con tan singulares efectos que modifiquen la ordenación hipotecaria del Estado, puede estimarse que pugnan con las normas que el art. 15 de la Constitución y 12 del Estatuto señalan, al fijar las respectivas competencias legislativas del Estado y de la Región autónoma.

Este Gobierno no concibe cómo y porqué la existencia - del Registro especial a que se contrae el art. 9º. de la Ley impugnada -Registro que ha de crear la Generalidad y en el cual debe rán inscribirse los contratos de cultivo otorgados en documento - privado- invaden las atribuciones legislativas del Estado. Ni el art. 15 de la Constitución reserva al Estado la ordenación de otros Registros que los existentes y afectos a la Dirección General del Registro y del Notariado, como lo confirma la regla décima de las del traspaso de servicios, relativa a la administración de Justicia, ni el art. II del Estatuto, que atribuyen a la Generalidad - competencia legislativa exclusiva en materia civil, exceptuando - aquello que dispone el mencionado art. 15 de la Constitución, ha sido invadido; ni, por fin, es una novedad legislativa en España - el Registro de los contratos de arrendamiento, sin que hasta ahora hubiera pensado nadie que unos tales Registros habían de depender de la Dirección General de Registros y del Notariado, a la cual se refiere, específicamente, la ya mencionada norma décima del traspaso de servicios de Justicia.

Pensar que la Generalidad no puede ni tan sólo crear - un Registro, en el que se anoten los contratos de cultivo, es una concepción tan raquítica, que nos llevaría a creer que es un sueño la existencia del Estatuto de Cataluña y hasta de la Generalidad, integrada, según el art. 14, por el Parlamento, el Presidente y el Consejo Ejecutivo.

En cuanto a la ordenación hipotecaria del Estado, la Ley de Contratos de Cultivo solamente habla del Registro de la Propiedad en los arts. 43, 48 y 59, estableciendo en el primero que el derecho de adquisición es inscribible, si bien su inscripción no es indispensable para la efectividad del mismo; en el segundo, que la inscripción se practicará por anotación preventiva después del pago del primer plazo por el arrendatario, convirtiéndose en inscripción definitiva, al tener lugar el pago del último plazo, y en el tercero, otorgando las mismas anotación e inscripción al rabasser que - utiliza el derecho de redención.

Estos preceptos no son más que una lógica aplicación de los arts. Iº., 2º y 42, último inciso, de la Ley Hipotecaria; por tanto, nadie que estudie sin prejuicio de los mencionados artículos de la Ley de Contratos de Cultivo podrá llegar, serenamente, a la conclusión de que con los mismos se invade "la ordenación de los Registros e Hipotecas", que el nº. Iº. del art. 15 de la Constitución reserva a la legislación del Estado.

Si el criterio que ahora expresa, con referencia a este punto, el escrito demanda del Gobierno de la República fuera, realmente, el legal, y, por lo tanto, legítimo, no se comprendería que el mismo Gobierno hubiera traspasado al Tribunal de Casación de Cataluña ("Norma octava de las del Traspaso de servicios de Justicia")

el conocimiento "de los recursos sobre calificación de documentos referentes al derecho privativo catalán que hayan de motivar inscripción en el Registro de la Propiedad", porque este traspaso tiene una gran relación con los arts. 66 de la Ley Hipotecaria y 121 a 136 de su Reglamento, y es obvio que pueda afectar más a la "ordenación de los registros e hipotecas" que no la simple anotación preventiva de un derecho real y su conversión en inscripción definitiva, de acuerdo con las reglas generales de dicha ordenación.

El informe de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo expresa que dicho Tribunal ha de ajustar su cometido a lo dispuesto en el número 3º. del art. 616 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los términos del cual le permiten evacuar, a instancia del Gobierno, informes relativos a la Administración de Justicia, a la organización y régimen de los Tribunales y a los asuntos gubernativos y económicos de los mismos.

Manteniendo este punto de vista quiere estudiar el Tribunal Supremo, exclusivamente, los efectos que el precepto de la Ley catalana de contratos de cultivo puedan irradiar sobre la Administración de Justicia y régimen de los Tribunales; y después de indicar, como de paso, que el contenido de la Ley hoy sub judici podría estimarse que modifica lo dispuesto en las Leyes generales del Estado español en materia social y procesal y en las bases de las obligaciones contractuales, cita los arts. 8º. y 38 a 40 de la repetida Ley aprobada por el Parlamento de Cataluña, afirmando del primero que su contenido acentúa más aún la duda respecto a la eficacia de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de los otros, que podrían también entenderse que ha sido olvidada la eficacia de la Legislación del Estado por lo que hace referencia a la competencia para decidir sobre revisión de los contratos.

Observa este Gobierno que lo mencionado en el artículo 8º de la Ley de Contratos de Cultivo no hace más que determinar la competencia de las Juntas Arbitrales, en uno de los casos en que la Ley regula y también que, ultra este artículo, se ocupan de las Juntas Arbitrales los arts. 3º., 12, 19, 23, 27, 28, 29, 38, 39, 40, 42, 47, 52, 53, 54, 56, 58, 61 y 72, todo el capítulo IX de la Ley, dedicado precisamente a las Juntas Arbitrales y las disposiciones transitorias tercera, quinta y sexta.

Podría, pues, el Tribunal Supremo, haber citado todos los preceptos mencionados, con la misma razón que invoca los arts. 8º y 38 a 40, pues en todos ellos se establece la competencia, en los diferentes casos que regula, de las Juntas Arbitrales.

Lo que resulta más difícil es demostrar, como alguien ha dicho, que estas Juntas vulneran el art. 51 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, porque substraen a la competencia de la jurisdicción ordinaria unos negocios de naturaleza civil suscitados en el territorio español.

Cierto que eso no lo dice el Tribunal Supremo, ni podría decirlo teniendo en cuenta que el art. 487 de la Ley Procesal admite el principio de que toda diferencia litigiosa entre partes puede estar sometida al juicio arbitral o de amigable composición, que son cosa diferente de la jurisdicción ordinaria; pero también lo es que insinúa, aunque sea en forma dubitativa, que tal vez podría estimarse debilitada la eficacia de la Ley de Enjuiciamiento Civil por el contenido de los artículos de la de Contratos de Cultivo, que crean y regulan las Juntas Arbitrales. Y esto, lo creemos erróneo.

Cuando una Región autónoma tiene competencia exclusiva en materia civil para regular tales o cuales instituciones, la tiene también para dotarlas y revestirlas de todas las modalidades que la concepción jurídica, guía del legislador, aconseja. Y si esta concepción no se aviene a las normas procesales generales del Estado, deberá prescindir de ella y crear otras extrajudiciales, precisamente porque no puede modificar las judiciales preestablecidas.

Una Ley civil catalana dictada por el Parlamento de Cataluña, en materia de su competencia, puede perfectamente prescindir, por ejemplo, para determinadas infracciones y diferencias entre arrendadores y arrendatarios, del juicio de desahucio, siempre que, al hacerlo, señale preceptivamente un camino para la solución del conflicto derivado de la infracción o diferencia; lo que no pue de hacer es admitir el desahucio como vía procesal pertinente al caso, y al mismo tiempo regularlo en forma distinta de cómo lo hace la Ley del Estado.

Eso le parece a este Gobierno de la Generalidad elemental, porque, de no ser así, la competencia legislativa civil de la Región autónoma sería un engaño; quedaría privada de instaurar cualquier novedad, por justa y conveniente que fuera en cuanto rozara los procedimientos predeterminados en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Si la regulación rituaria de esta Ley no servía y no podía ser substituida por otra, hija del ingenio o fruto de la experiencia, ¿qué podría hacer la Región autónoma para renovar su legislación civil y ponerla de acuerdo con el mundo? ¿Debería esperar a que el Estado quisiera modernizar su Ley adjetiva, anticuada? Entonces, ¿de qué serviría la competencia legislativa en materia civil?

He aquí lo que ha sucedido con la Ley de Contratos de Cultivo. El legislador catalán ha querido prescindir en algunos aspectos del procedimiento judicial. Ha creído oportuno acudir a una forma de conciliación o arbitraje previo y acogerse a lo que no es ninguna novedad en el extranjero ni en España; ha creado unas Juntas Arbitrales, que conocen de determinadas cuestiones civiles, de la misma manera que los Tribunales Industriales y los Jurados Mixtos —que tampoco son jurisdicción ordinaria— conocen de verdaderas cuestiones civiles análogas, sino idénticas, a las que la Ley de Contratos de Cultivo atribuye a la competencia de las Juntas Arbitrales y como el Gobierno de la República encargó, por Decreto de II de julio de 1931, a los Jurados Mixtos de la propiedad rústica, y no a la jurisprudencia ordinaria, el conocimiento de los juicios de revisión a que hacen referencia los artículos 38 a 40 de la Ley de Contratos

de Cultivo, citados por el Tribunal Supremo como posibles infracciones de la legislación procesal del Estado español, por lo que se refiere a la competencia para decidir sobre la revisión de los contratos.

Si el Gobierno de la República pudo prescindir de la legislación procesal del Estado creando, por Decreto de II de julio de 1931, unos Jurados Mixtos que habían de conocer de los juicios de revisión en materia de propiedad rústica, bien puede haber hecho lo mismo el Gobierno de la Generalidad de Cataluña, mediante la Ley de II de abril del presente año, que tiene más solemnidad y garantía que no un Decreto; máxime cuando contra las resoluciones de las Juntas Arbitrales ha concedido el recurso de apelación delante del Tribunal de Casación de Cataluña, según resulta de los arts. 56, 81 y 85 al 87 de la mencionada Ley de Contratos de Cultivo.

Cataluña no puede variar los términos adjetivos de la tramitación de los juicios ante los Tribunales; pero puede, lo mismo que el Estado, eliminar los procedimientos judiciales, cuando crea, al dictar leyes de su competencia, que es más conveniente para los intereses de la Región autónoma apartarse de una litis que acogerse a otras normas regulares y reguladas, extrañas a la jurisdicción ordinaria.

Téngase en cuenta que el Gobierno de la Generalidad, además de la competencia legislativa exclusiva en materia civil, exceptuando lo que dispone el artículo 15, número Iº, de la Constitución y la legislación exclusiva y la ejecución directa en materia de política y acción social agraria (arts. II y 12 del Estatuto), tiene traspasadas las facultades ejecutivas del Gobierno de la República, para la aplicación en el territorio de Cataluña de las Leyes orgánicas y procesales del Estado, en materia de administración de justicia (norma 3º del traspaso de servicios relativos a la Administración de Justicia. Decreto de 24 de octubre de 1933).

Se dice, por último, en el escrito del Gobierno de la República -quinto fundamento de Derecho- que de prosperar la validez de la Ley catalana impugnada, se llegaría a producir una -duplicidad de normas, en gran parte contradictorias, teniendo en cuenta que la base segunda de la Ley de Reforma Agraria extiende sus efectos a todo el territorio de la República y que lo mismo - hace un proyecto de arrendamiento de fincas rústicas presentado a las Cortes.

El Gobierno se apoya, pues, para impugnar la Ley de Contratos de Cultivo, en unas bases de Reforma Agraria que no parece por ahora que quieran aplicarse seguidamente en todo el territorio de la República -en Cataluña no se aplican, ni se avienen, en general, con la distribución de la propiedad de la tierra y con el régimen de explotación de la misma- y en un proyecto de Ley, que aun no ha empezado a discutirse; y, todo esto, apoyándose en una possible dualidad legislativa. Es evidente que si el argumento fuera viable, lo que sobraría, no es precisamente la Ley de Contratos de Cultivo, sino todo el régimen autonómico, por el cual tanto Cataluña había clamado y que consiguió, con el advenimiento de la República, de acuerdo con el art. II y llenando todos los requisitos del art. 12 de la Constitución de 9 de diciembre de 1931.

Por otra parte, sin querer entrar a discutir en este momento si la Ley de Reforma Agraria, que lleva la misma fecha que el Estatuto, es de aplicación en Cataluña, ni si es legalmente posible que las Cortes de la República, prescindiendo del art. 18 del Estatuto y consignando simplemente en una Ley cualquiera que será de aplicación en toda España, dejen sin efecto los preceptos estatutarios, preceptos que, una vez aprobados, integran, según el art. II de la Constitución, la organización político-administrativa de la Región autónoma, reconocida y amparada por el Estado español -

como parte integrante de su ordenamiento jurídico, conviene tener presente que la llamada Ley de Reforma Agraria no es más que una Ley de bases y que entre las 24 que contiene existe sólo una -la 22- que se refiera a Cataluña, y a la cual quiepa atribuir el carácter de base de obligación contractual. Esta base dice que la "rabassa morta" se considerará como un censo y será redimible a voluntad del "rabasser" o "rabassaire".

Pues bien : esta base ha sido fielmente respetada por el Parlamento de Cataluña. El art. 57 de la Ley de Contratos de Cultivo da fe de ello.

Y hay más aún : el momento en que la Ley de Bases de Reforma Agraria fué aprobada por las Cortes Constituyentes, coincidente con la sanción de la Ley del Estatuto de Cataluña, no hizo - obligado por el Estado el cumplimiento de lo dispuesto en el art. 19 de la Constitución para que pueda dictar, por medio de una Ley, aquellas bases a que habrán de ajustarse las disposiciones legislativas de las Regiones autónomas, cuando así lo exigiera la armonía entre los intereses locales y el interés general de la República. La propia circunstancia hizo que no fuera indispensable que el Tribunal de Garantías Constitucionales apreciase previamente la necesidad de establecer una Ley de bases y que su aprobación requiriese el voto favorable de las dos terceras partes de los Diputados que integraban las Cortes. Este razonamiento no va encaminado a descoñocer la fuerza de obligar a la Ley de Bases de la Reforma Agraria; pero sí a consignar que, aun considerándola como una Ley de bases de la República, dictada de conformidad con los preceptos del art. 19 de la Constitución, tiene facultad Cataluña, de acuerdo con el último párrafo de este artículo, para estatuir lo pertinente por Ley o por Ordenación, acerca de la materia regulada por aquélla.

## LA LEY DE CONTRATOS DE CULTIVO

Podría el Gobierno de la Generalidad dar aquí por terminada su contestación al escrito del Gobierno de la República. La parte propiamente jurídica del problema la considera agotada y, refractario como es a vestirse con galas que no le corresponden, debe puntualizar que los dos epígrafes anteriores los ha escrito vaciando el contenido del informe que acerca de la cuestión debatida pidió y obtuvo, por unanimidad, de los señores Presidente y Magistrados del Tribunal de Casación de Cataluña que se constituirá en breve.

Pero como sea que alrededor de la Ley de Contratos de Cultivo, tanto los intereses en juego, como la pasión política han producido un ambiente propicio a desenfocar la finalidad y el alcance jurídico-social de sus preceptos, cree el Gobierno de la Generalidad cumplir con su deber exponiendo al Tribunal, como un elemento de juicio más, que pueda contribuir, a facilitarle el completo conocimiento del problema, y con la mayor brevedad posible, el criterio - de Gobierno que ha presidido la Ley en sus aspectos más fundamentales.

El Parlamento de Cataluña elegido democráticamente, en méritos de las disposiciones transitorias del Estatuto, al aprobar la Ley de Contratos de Cultivo lo ha hecho con el voto unánime de los Diputados presentes que sumaban más de las tres cuartas partes de los que lo constituyen. No cabe aducir, con veracidad, hecho alguno que permita creer que el Parlamento catalán se halla divorciado de la mayoría democrática que lo eligió. El problema del campo fué bandera de combate en todas las luchas electorales últimas. Puede afirmarse, por tanto, que la Ley de Contratos de Cultivo ha nacido de una necesidad democrática, lo cual, en el régimen actual de España, es un indiscutible título de legitimidad.

Evitar la despoblación del campo. Dar estabilidad al campesino, estableciendo la continuidad sucesoria de sus derechos prohibiendo la enajenación y el embargo de los mismos y los arrendamientos a corto plazo y asegurándoles la percepción de las mejoras por ellas realizadas. Regular el precio de aprovechamiento de la tierra, para que no pueda ser una forma de explotación del trabajo, rebajando a un tipo moderado la renta del capital-tierra. Impedir la existencia del intermediario parásito, con la prohibición de los subarrendamientos. Facilitar la adquisición de la propiedad de la tierra a sus buenos y continuados cultivadores. Limitar, en lo posible y dentro de los límites de la competencia legislativa estatutaria, la formación de trabajadores asalariados en el campo. He ahí, sucintamente anunciados, los objetivos esenciales que la Ley debatida se ha propuesto alcanzar.

Convertir en propietarios, dentro de los límites de un patrimonio familiar, pero económicamente suficiente, a la casi totalidad de los campesinos de Cataluña y constituir así una sociedad muy estable, formada de hombres libres por ser económicamente independientes, es la finalidad político-económica que la Ley persigue, sin que represente una dificultad mayor un período de retraimiento en la aportación de capitales al campo, por el gran desarrollo que va adquiriendo, de día en día, la cooperación entre los cultivadores de Cataluña.

Finalmente, es constante en la historia catalana, la lucha, pacífica en general, violenta a veces, del cultivador para obtener la propiedad de la tierra. Basta recordar, al efecto, las revoluciones agrarias de los siglos XIV y XV conocidas con el nombre de "revoltes dels remenses" y las luchas violentas del siglo pasado promovidas por los "rabassaires", principalmente en la comarca del Penedés. La Ley no tiene mayor ambición que resolver este histórico problema de nuestro campo, dentro de la tendencia tradicional que quiere llegar a cundir en una sola persona, el cultivador y el propietario.

Por todo ello,

Al Tribunal de Garantías Constitucionales suplico :

Que teniendo por presentado este escrito, dentro de término, con los documentos que se acompañan, se sirva tener por contestado el del Gobierno de la República entablando la cuestión de competencia legislativa contra la Ley del Parlamento catalán de II de abril último, y, en definitiva, previos los trámites correspondientes y vistos los fundamentos de derecho aducidos, resolver declarando no haber lugar a pronunciarse sobre el fondo de la cuestión planteada, por haberlo sido fuera del término legal, y de no estimarse esta excepción, resolver que la materia de la expresada Ley es de la competencia legislativa de la Región catalana.

Otro sí : A los efectos oportunos, el Gobierno de la Generalidad interesa la celebración de vista, designando como Comisario a don Amadeo Hurtado Miró, y como domicilio del mismo, a los efectos de toda notificación, la casa número 9, piso primero, de la calle de San Agustín, de esa capital; y

Al Tribunal de Garantías Constitucionales suplico:

Que se digne haber por hechas estas manifestaciones a los fines procedentes.

Barcelona, 19 de mayo de 1934.- El President de la Generalitat de Catalunya, LLUÍS COMPANY (signat).

APENDIX VIII

DOCUMENTS DELS PROPIETARIS DE  
L'INSTITUT AGRICOLA CATALA DE -  
SANT ISIDRE I ENTITATS ANALOGUES  
ENTORN DELS CONTRACTES DE CONREU.

AVANTPROJECTE DE LLEI REGULADORA DELS CONTRACTES DE RABASSA MORTA I  
SIMILARS, PRESENTAT PER L'INSTITUT AGRÍCOLA CATALÀ DE SANT ISIDRE A  
L'INSTITUTO DE REFORMAS SOCIALES DE MADRID, EL 12 D'ABRIL DE 1923